

Original y nueve copias

Ape. Hyalke

AMPAROS DIRECTO: 13/2020

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN.

(18)
H. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL TERCER CIRCUITO.

PRESENTE:

AT'N: IL. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

[REDACTED] con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, en su segundo párrafo, en relación con el 10 párrafo primero y 11 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en mi carácter de defensor particular del hoy inculpado [REDACTED] cuyo carácter me fuera reconocido dentro de la causa penal 08/2017-C por la autoridad del conocimiento, Juez Quinto de lo Penal del Primer Partido Judicial con residencia en Puente Grande, Jalisco, conformado con motivo de la supuesta comisión del hecho delictivo de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, previsto en el artículo 176 Ter del Código Penal del Estado de Jalisco, instaurada con motivo de la querrela de hechos efectuada por la que se dice ofendida, [REDACTED] precisándole como domicilio procesal, para todos los efectos de publicidad relacionados a este medio legal de defensa, en tanto se deban efectuar bajo notificación personal, en términos del Capítulo IV de la Ley de la Materia, el ubicado en calle [REDACTED] número [REDACTED] colonia [REDACTED] ante Ustedes, **BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD**, comparezco y:

EXPONGO

En tiempo y forma, por su conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, 83, 86, relativos y aplicables de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Norma Fundamental señalada; 10, fracción III, 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo relativo al Acuerdo General número 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; con la representación que me reviste, interpongo **RECURSO DE REVISIÓN**, contra de la resolución pronunciada por el Honorable Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el pasado 19 diecinueve de noviembre del 2020 dos mil veinte, al resolver en definitiva los autos que se conformaron con motivo del reclamo *constitucional y convencional* efectuado por la que se dice ofendida, [REDACTED] quien se dolió de los actos emitidos por la Décima Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes del también Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y otras autoridades; la primera delas mencionadas, a quien reprochaba que, al momento de hacer valer su arbitrio de alzada sobre los actos penales recurridos, confirmara mediante sentencia pronunciada el pasado día 21 veintiuno del mes de noviembre del otrora 2019 dos mil diecinueve, la absolutoria decretada por el Juez Quinto de

PRIMER THE
ENMATE
TER
ZAL

149

lo Penal del Primer Partido Judicial, con residencia en Puente Grande Jalisco, mediante fallo definitivo dictado el 12 doce de abril de la misma anualidad pasada, dentro de la causa penal incoada en el registro numérico 08/2017-C, integrada con motivo de la querrella efectuada por la señalada pasiva, al denunciar supuestos hechos delictivos que se asocian al catálogo penal de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 176 Ter del Código Penal del Estado de Jalisco, en contra de mi representado; por lo que, previo a dilucidar el desarrollo de este escrito, a fin de dar cumplimiento con lo preceptuado por el ordinal 88 segundo párrafo de la Ley de la Materia, me permito transcribir la parte de la resolución dictada en amparo directo en la que textualmente se efectúa el ejercicio hermenéutico de convencionalidad que hoy trastoca, violenta y lesiona gravemente la esfera jurídica de mi representado, y que se suma a la falta de aplicación de la metodología puntual que se establece dentro del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género por esta Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como por el hecho de que si bien se aplican criterios jurisprudenciales y aislados adoptados por ésta y generados por la Primera Sala Penal, sus contenidos son tergiversados y aplicados desproporcionada y arbitrariamente, sin atender el cúmulo de derechos humanos en juego; tanto en otros tratados internacionales, como en el contexto del catálogo de los derechos humanos que se consagran en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que por su estrecha relación, al momento de resolverse sobre las prerrogativas fundamentales en juego, debieron ser parte del arbitrio judicial, en atención a los principios de interdependencia, progresividad, invisibilidad y universalidad de su contenido, en la forma y términos siguientes:

TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LOS PRECEPTOS CONVENACIONALES

«Así es, en la sentencia que se reclama, la responsable ordenadora se limitó a manifestar no desconocer los diversos instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado para la erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación contra las mujeres, citando al efecto la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, destacando las particularidades esenciales de cada una de éstas.

Sin embargo, fue omisa en atender los lineamientos y en aplicar la metodología que, para juzgar con perspectiva de género, jurisprudencialmente ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conforme a la doctrina que sobre el tema ha emitido la aludida Primera Sala, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino".



PRIMER TRIENIO
EN UNIDAD
TERCER
ZAPORA

150

Entonces, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres *-pero no necesariamente está presente en cada caso-*, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo.

La relevancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar discriminaciones que de derecho o de hecho puedan sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano.

Así, para impartir justicia con base en una perspectiva de género, deben implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género impida la impartición de justicia de manera completa e igualitaria.

AL COLEGADO
PENAL DEL
CIRCUITO
JALISCO.

De ahí que la metodología de que se habla puede sintetizarse en la necesidad de detectar posibles-más no necesariamente presentes-situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres y hombres.

Las consideraciones recién invocadas, se encuentran plasmadas en la tesis aislada y en la jurisprudencia, ambas de la Primera Sala del Supremo Tribunal del País, consultables respectivamente en la página 443, Libro 40, marzo de 2017, Tomo I, con el número 1ª. XXVII/2017 (10ª) así como en la foja 836, Libro 29 abril de 2016, Tomo II, identificada con el número 1ª./j. 22/2016 (10ª), de rubro y textos siguientes:

«Registro digital: 2013866

Aislada

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 40, Marzo de 2017 Tomo I

Tesis: 1a. XXVII/2017 (10a.)

Página: 443

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han

REMER TE
EN MA
TES
ZAP



COLEGIO
TERCER CIRCULO
OPAN, JALISCO

151

encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres.

Amparo directo en revisión 4811/2015. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Guerrero Zazueta y Ana María Ibarra Olguín.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 836.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Registro digital: 2011430

Jurisprudencia

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 29, Abril de 2016 Tomo II

Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.)

Página: 836

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.


Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad



PRIMER TRIG
ENHATER
TERCE
ZAPOR

152

que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.


INAI COLEGADO
10 MAR 2015 DEL
JALISCO
Amplio
Amplio

Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.

Amparo directo en revisión 1125/2014. 8 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Amparo directo en revisión 4909/2014. 20 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Amparo directo en revisión 2586/2014. 10 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos.

Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Tesis de jurisprudencia 22/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

(...)



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA DE
TERCER CIRC
ZAPOCAN, JAL

157

Por lo que, aún y cuando se coincide con la Sala responsable en que los testimonios de [REDACTED] y [REDACTED] no son dignos de valor probatorio en términos del artículo 264, del Enjuiciamiento Penal del Estado, por ciertamente no ser coincidentes en cuanto a los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que la ofendida los ubicó en su denuncia; inclusive prescindiendo de estos testimonios, como ya quedó visto, se demuestra a cabalidad los elementos del delito en estudio, pues no debe perderse de vista que por la naturaleza misma del delito, éste generalmente es de realización oculta.

La postura que se adopta, tiene su razón de ser en que la declaración de la víctima del delito en el caso que nos ocupa, requiere un tratamiento distinto pues debe analizarse, como se anticipó, con perspectiva de género, atendiendo al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia reconocido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En torno a ese tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3186/2016, precisó que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra reconocido expresamente en el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumento internacional que fue adoptado por la Organización de los Estados Americanos al reconocerse que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos que limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce, ejercicio de sus derechos humanos; y que este tipo de violencia constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, criterio que ha hecho suyo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Destaca que de la lectura de los artículos 1 y 2 de la Convención de Belém do Para, se tiene que la violencia contra la mujer puede ser física, sexual o psicológica y la constituye cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.

Preciso que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha sostenido que la violencia contra la mujer es aquella dirigida contra la misma porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada y que abarca "actos que infligen lesiones o sufrimientos de carácter físico, mental o sexual, la amenaza a dichos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad, la violencia cometida en la familia o la unidad doméstica o cualquier relación interpersonal, o la violencia perpetrada o condonada por el Estado o sus agentes, independientemente del lugar en que se cometa".

Agregó, que el artículo 6º, fracción V de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que la violencia sexual la constituye cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto afecta contra su libertad, dignidad e integridad física y que es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

La Primera Sala señaló que las obligaciones le asisten al Estado mexicano en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.



INTERIOR
MINISTRY
TERRACE
ZEPHYR

Al efecto, destacó que los Estados firmamentos de la Convención Belém do Pará, asumieron distintos deberes, descritos en el artículo 7 de este instrumento internacional, entre los cuales destaca el de establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otras medidas de protección, un juicio oportuno, y el acceso efectivo a tales procedimientos.

Tales obligaciones, indicó el Máximo Tribunal, se relacionan con el acceso efectivo a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia, lo cual se complementa con el contenido del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, sostuvo que el derecho de protección judicial consagrado en el citado artículo de la referida convención, cuya protección abarca el que toda persona tenga el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, tiene implicaciones especiales en caso en los que se analicen actos constitutivos de violencia contra la mujer a la luz de las obligaciones contenidas en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.



AL SEÑOR
JEFES DE
PENAL DEL
CIRCUITO
JALISCO.

Dichas implicaciones especiales, precisó, tienen su origen en el hecho de que las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho, conchuyendo algunas relacionadas con las pruebas dirigidas a la acreditación del delito y la responsabilidad penal de imputado en el proceso.

En relación con este tema, resaltó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha reconocido que la violencia de género tiene efectos adversos sobre la capacidad de las mujeres para obtener acceso a la justicia en pie de igualdad con los hombres.

Sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por ejemplo, que estas barreras se manifiestan en el tipo de casos al existir una tendencia al desahogado limitado de pruebas y a no dar credibilidad al testimonio de las víctimas. De igual forma ha notado que se traslada a ellas la responsabilidad de las investigaciones, que se le da una interpretación estereotipada a las pruebas, y que se dicten resoluciones relativas a las pruebas carentes de consideraciones de género, todo lo cual obstaculiza el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia.

A la luz de los deberes contemplados en los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7.e y 7.f de la Convención de Belém do Pará, con el objeto de remover las barreras en el acceso a la justicia ya descritas y como una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, se deben establecer reglas para la valoración de los testimonios de las víctimas de este tipo de delitos con una perspectiva de género, con el objeto de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas y que su inadecuada valoración prueba llevar a las personas juzgadoras a restar credibilidad a la versión de las víctimas.

Lo anterior, señaló, es consistente con lo sostenido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al adoptar su recomendación general 33, ocasión en la que instó a los Estados a revisar "las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente



UNITED STATES
SENATE
OFFICE OF THE CLERK
WASHINGTON, D.C.

155

en casos de violencia contra la mujer. Se deben adoptar medidas, tendiendo debidamente en cuenta los derechos a un juicio de las víctimas y los defensores en los procedimientos penales, para asegurar que no se restrinjan excesivamente los requisitos probatorios, y que no sean excesivamente inflexibles o estén influenciados por estereotipos de género”.

Así, recalcó la complejidad que implica la valoración probatoria por parte de las personas juzgadoras en casos en los que se ha ejercido violencia sexual contra la mujer, la cual radica en la naturaleza de la comisión de este tipo de actos, los cuales son generalmente, perpetrados de manera oculta, situación que dificulta la existencia de testigos o de otro tipo de evidencias, por lo que el testimonio de la víctima del delito suele constituir la prueba de mayor relevancia en la acusación formulada contra la persona imputada.

La Primera Sala sostuvo que se debían establecer reglas para la valoración de los testimonios de las víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer con una perspectiva de género.

Dichas reglas deben ser observadas por las personas impartidoras en este tipo de casos y se deducían, mayoritariamente, de los sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos *Fernández Ortega y Rosendo Cantí*.

Este modelo, se encuentra entregado, al menos, por los siguientes elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de valorar el testimonio de la víctima que ha sido sometida a un acto de violencia sexual.

a) Se debe considerar que los delitos sexuales con un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Así mismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente.

b) Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe atender que no debe ser inusual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo. Por lo tanto, dichas variaciones no podrán constituir fundamento alguno para restarle valor probatorio a la declaración de la víctima.

c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros.

d) Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental.



OPRIMER TRI
EN NATE
TENC
ZAPOT

Entre esos elementos se pueden encontrar dictámenes médicos, psiquiátricos, testimonios, exámenes médicos, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y,

e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.

La Primera Sala sostuvo que el análisis probatorio con perspectiva de género al que se hacía referencia no resultaba únicamente aplicable a los delitos de violación sexual, incluyendo aquellos en los que la comisión de ese delito pueda ser atendida como un acto constitutivo de tortura, sino que a la luz de las obligaciones internacionales descritas, las personas juzgadas deben, oficiosamente, analizar la totalidad de casos de delitos que involucren algún tipo de violencia contra la mujer realizando una valoración de las pruebas en la que se observen las pautas aquí descritas, como lo que debe acontecer con las víctimas de hostigamiento sexual.



TRIBUNAL COLEGIADO
PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO
GUANAJUATO, JALISCO.

De dicha ejecutoria surgió la tesis 1ª CLXXXIV/2017 (10ª.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, Décima Época, visible a página 460, de rubro:

Registro digital: 2015634

Aislada

Materias(s): Constitucional, Penal

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 48, Noviembre de 2017 Tomo I

Tesis: 1ª. CLXXXIV/2017 (10ª.)

Página: 460

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos *Fernández Ortega y Rosendo Cantú* y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN



POWER TRE M
EALMATE R
THERGER
ZAPOPA

15A

50547f82236bfe5b02313dd03a4173d34b31b255d720cf5d585431fe16373e770

COLEGIO
DEL
CIRCUITO
JALISCO.

SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, exámenes médicos, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.

Amparo directo en revisión 3186/2016. Marco César Zaldívar Hernández. 1 de marzo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Peña Hernández, quienes votaron en contra al considerar que el recurso era improcedente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Ana Marcela ZatarainBarrett.

Nota: La tesis aislada R. XXIII/2015 (10a.), aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 238.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Consideraciones de la Primera Sala que se estiman aplicables al caso en estudio y permiten concluir que el testimonio de la víctima del delito suele constituir la prueba de mayor relevancia en la acusación formulada contra la persona imputada.

Lo anterior, considerando que al igual que en los delitos sexuales, el de la violencia familiar generalmente se produce en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras; por tanto, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.



PIRELLA
GÖTTSCHE
LOWE
PARNIS

Además, la sola calidad de víctima en este tipo de delitos ubica a ésta en un grupo vulnerable que obliga a juzgar con perspectiva de género; esto es, impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran sumir, como un corolario inevitable de su sexo.

Todo lo cual patentiza la legalidad de analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental, como así se hizo en la presente ejecutoria, al vincularla con la documental pública consistente en el acta de matrimonio con el activo, y el dictamen pericial en materia de psicología, que en su conjunto resultaron aptos y suficientes para acreditar los elementos del delito....»



INVOCACIÓN DE HECHO NOTORIO PARA LA PROCEDENCIA DE ESTE MEDIO LEGAL DE DEFENSA

INAL COLECCIÓN
LA PENAL DEL
R CIRCUITO
N, JALISCO

Afectos de robustecer lo anteriormente relatado, y para hacer ver la procedencia de este medio legal de defensa, conviene traer a consideración aspectos puntuales del *Acuerdo General 9/2015, de 08 ocho de junio del año 2015/dos mil quince*, a través del cual el Pleno de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, *estableció las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo*. Bajo esa tesitura, en los considerandos de dicha norma o lineamiento general; se especificó –tercero–, el hecho de que, mediante Decreto publicado el 02 dos de abril del 2013 dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó y por ende expidió la nueva Ley de Amparo, misma que entró en vigor el día siguiente de su publicación y que abrogó la anterior; en donde, entre otros, se amplió el espectro de procedencia de la revisión de amparo ante esta Honorable Suprema Corte; así, con base en el artículo 81 de la Ley de la Materia, se dispuso que, entre otros supuestos, la revisión de amparo directo procedía en casos en que el Órgano Federal hubiere efectuado una interpretación directa de los derechos humanos contenidos a la luz de algún Tratado Internacional; la cual –cuarto considerando– generó que se emitiera criterio sobre los alcances del parámetro de regularidad constitucional, en tratándose de normas de derechos humanos, y en las que se concluyó con base en el criterio jurisprudencial bajo el rubro: **«CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO»¹**.

¹ Registro digital: 2006223; Jurisprudencia; Materias(s): Común; Décima Época; Instancia: Pleno; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Tomo: Libro 5, Abril de 2014 Tomo I; Tesis: P/J. 22/2014 (10a.); Página: 94; Mediante la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el Poder Constituyente Permanente, además de modificar el catálogo formal de derechos que pueden ser protegidos mediante los medios de control de constitucionalidad, buscó introducir al texto constitucional el concepto de derechos humanos con toda su carga normativa, siendo una de sus implicaciones la revisión del estándar jurídico

DEPARTMENT
OF
MATE
RIALS
AND
EQUIPMENT



13

Bajo la tesitura anterior, no se puede ignorar que tras la reforma publicada el 10 diez de junio del 2011 dos mil once, denominada por el vulgo y la prensa como de «derechos humanos», el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, trajo consigo una serie de obligaciones de carácter instrumental, en el que dispuso en este caso, con la sinergia normativa que implica el diverso 133 del invocado Marco Fundamental, la aplicación de una exegesis normativa unificada en un **bloque de constitucionalidad**, a través del cual, el parámetro de regularidad constitucional, en tratándose de derechos humanos, se debe extender en la confluencia de las prerrogativas reconocidas en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano; lo que dignifica las obligaciones adquiridas por todas las autoridades del País, en especial énfasis a este Órgano de Justicia, que se erige como instancia terminal de su interpretación aplicando un **control concentrado o directo de constitucionalidad** y, en la forma y términos ya relatados precedentemente en este apartado, bajo un enfoque hermenéutico **convencional mediante un ejercicio Ex Officio difuso de Constitucionalidad**, a efectos de resolver los conflictos que de hecho y de derecho, se justifiquen en la naturaleza derivada de prerrogativas fundamentales.



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO
SAN JUAN, JALISCO

Deberes que en el caso a estudio se actualizan, pues la óptica de interpretación que en este caso fue abordada por los Integrantes del H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal

que determina la existencia de una cuestión de constitucionalidad, a la cual se hace referencia en el artículo 107, fracción LX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como elemento que actualiza la procedencia excepcional del recurso de revisión en el amparo directo. Así las cosas, según se desprende de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando de por medio se exija la tutela del principio de supremacía constitucional, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la solución normativa otorgada por la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo de dicha norma fundamental mediante el despliegue de un método interpretativo. Así, de un análisis sistemático de la jurisprudencia, se desprende que el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos. Sobre estas bases, cuando se alega una confrontación entre una ley secundaria y una norma de un tratado internacional que no regule un derecho humano, la confronta de estas normas secundarias es, en principio, una cuestión de legalidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, debido a que, en el fondo, lo que se alega es una "debida aplicación de la ley" a la luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. En ese aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes secundarias y, por ende, la solución de su conflicto normativo o antinomia corresponde a una cuestión de legalidad: determinar la forma en que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado internacional. Al no concurrir la exigencia de un desarrollo interpretativo de un elemento constitucional, no existe una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de revisión en amparo directo debe declararse improcedente. No obstante, cuando la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria implique la interpretación de una disposición normativa de una convención que, prima facie, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente constitucional, toda vez que cuando se estima que una ley viola un derecho humano reconocido en una convención subyace un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea de coherencia normativa. Lo mismo debe decirse cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su vez fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano. Consecuentemente, el escrutinio no se agota en la constatación de la consistencia de las normas entre sí -los criterios relacionales de creación de normas-, sino en verificar la coherencia del orden constitucional como una unidad dotada de sentido protector o promocional de los derechos humanos, el cual se remite a argumentos sustanciales y no a razonamientos de índole formal. En ese sentido, es viable el recurso de revisión en el amparo directo, siempre que se cumplan las condiciones necesarias de procedencia, como es la exigencia técnica de desplegar un método interpretativo del referido derecho humano; es decir, el presente criterio no implica suprimir los requisitos técnicos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, requeridos por la Ley de Amparo y la jurisprudencia de esta Suprema Corte, pues ese supuesto se inserta en los criterios procesales ordinarios.



DEPARTMENT OF EDUCATION
DIVISION OFFICE - MARIKINA CITY
MARIKINA CITY
ZAPUNAN

del Tercer Circuito, se adopta desde un enfoque *softlaw* y *hardlaw*, para reconocer no sólo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y sin discriminación, sino además, bajo ese teorema supra nacional, la metodología o técnica jurídica para reconocerle, dentro del marco jurídico nacional, la aplicación de prerrogativas que establecen un derecho humano en juego; lo que de facto colisiona con otros derechos humanos derivados de su naturaleza interdependiente e indivisible, que no fueron abordados por el Órgano Jurisdiccional, y que forman parte de las obligaciones que en este caso, se estiman de capital importancia, y requisito *sine quan non*, para atender la postura judicial, con base a las obligaciones adquiridas en el marco difuso convencional, y que en el particular, generó, por un lado, la aplicación deficiente de estándares internacionales para la efectiva concretización de un derecho humano; y, por el otro, la obligación de ineludible cumplimiento para reconocerlos conforme a un marco normativo sistemático y funcional que se reverbera en forma integral a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como conforme al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos «Pacto de San José Costa Rica»; y, desde luego, en el caso a estudio, las normas internacionales utilizadas en concreto, como lo son las Convenciones sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer «CEDAW» y la Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Belém Do Pará»; éstas últimas de las cuales partió el arbitrio judicial, y sobre las que destacó las presunciones lógicas, humanas y jurídicas que derivaron en que el arbitrio judicial concluyera otorgar el amparo y protección de la justicia federal.

En ese contexto, en el presente, se plasma una postura que, ahora sí, interpretando los enfoques homogéneos que pretende distribuir este H. Máximo Tribunal, pero sustentándose en las posturas que convergen al marco fundamental de los derechos humanos, tengan por objeto y defecto establecer de manera objetiva y razonable, los derechos humanos que asisten a la parte que represento; y no partir, como ya se dijo, de un solo enfoque, pues si bien es cierto que en el particular, la presente instancia se abrió a petición de la que se dijo quejosa; esto es, [REDACTED] esto no es impedimento para que el Órgano Federal como Tribunal Constitucional, efectúe una adecuación normativa que tuviere por objeto el establecer los derechos y libertades reconocidas en juego, y *atendiendo a la diversidad de los géneros y de los derechos en conflicto*. Bajo esa tesitura, reconocer que en el caso particular, se incumplían obligaciones supranacionales, sobre las cuales el Órgano Colegiado estableció la interpretación directa de los derechos humanos, y por ende, fijó las relaciones o posiciones jurídicas a adoptar, estableciendo su sentido y alcances para en este caso conceder el amparo y la protección de la justicia federal acosta de mi representado, es el hecho que viene a legitimar la tramitación de este medio legal de defensa, pues el ejercicio del arbitrio judicial se adoptó en posturas normativas con enfoque de derechos humanos; es decir, porque en el texto transcrito, tal y como se ha hecho del conocimiento, estos parten de la interpretación de una serie de disposiciones convencionales, como lo son: *La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer también conocida como Convención Belén do Pará; La Convención Americana sobre Derechos Humanos «Pacto de San José Costa Rica»; y, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de*



UNITED STATES
MATERIAL
RECORD
OFFICE

161

Discriminación contra la Mujer «CEDAW»; y aunque aplicada en forma parcial, de lo que se reconoce a través de ***la Convención Americana sobre Derechos Humanos «Pacto de San José Costa Rica».***

Por lo anterior, si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción IX, establece las competencias delegadas por el Constituyente al Poder Judicial de la Federación; en los cuales se inserta de forma excepcional el recurso de revisión en tratándose del amparo directo; esto es, cuando se resuelva sobre la Constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de la Constitución General u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; y por el otro lado, de acuerdo a las relaciones normativas de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecidas en el contexto gramatical o literal del artículo 81, fracción II, en donde también se le reconoce como atribución jurisdiccional a esta H. Corte Suprema, el conocimiento de la revisión cuando se promueva contra sentencias que resuelvan sobre constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; es inconcuso que, en el particular, me asiste la razón para constituirme ante esta Instancia Superior de Justicia de la Nación, a efectos de hacer valer el medio legal de defensa reconocido dentro de un marco fundamental, en el que se establecen las hipótesis jurídicas de las que resulta procedente el recurso ordinario, como mecanismos para impugnar aquellas decisiones que actualicen los supuestos normativos de procedencia.

Decisión que en el particular se refuerza si se toma en consideración que el Acuerdo General en el que se funda este apartado, y que fuera establecido por el Honorable Pleno de este Máximo Tribunal del País, advierte, de la exégesis de los artículos en mención; es decir de su relación abstracta, pero de igual forma, del contenido del ***acuerdo primero, inciso a)***, entre otros supuestos para la procedencia de la revisión—y ***que abona a lo aquí planteado***—cuando en la sentencia definitiva que se dicte el medio de defensa uniinstancial, el que ***se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte***, como en el caso actualiza que México como nación, y al forma parte de un sistema interamericano y universal, ha suscrito diversos instrumentos internacionales de derechos humanos; entre los que hoy se destacan las señaladas «CEDAW» y «Belém Do Para», entre otros cuerpos normativos que fueron la materia reguladora que tuvo por objeto otorgar el amparo y protección de la justicia federal.

Y es que, este aserto tiene sentido, en tanto, como ya se dijo y se reitera en este apartado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Tratados de índole Internacional que versen sobre derechos humanos, comparten un estrato normativo que se unifica e interrelaciona, a efectos de satisfacer las cargas que conlleva el respeto irrestricto a la dignidad humana y las obligaciones de promoción, respeto y protección que le subyacen. Por



TRIBUNAL C
MATERIA PEN
TERCER CIRC
ZACAPAN, JAL

162
50547 f82236bfe5b02313dd03a4173d34b31b255d720cfd585431fe16373e770
COLEGIO
AL DEL
UITO
SCO.

eso, a partir de la reforma de 10 diez de junio del 2011 dos mil once, la regularidad que se surta como parámetro constitucional, sólo se puede atender de forma sistemática, unitaria y funcional cuando se trate de la tutela de prerrogativas humanas y sus garantías, de manera que la omisión de una no se suple en la aplicación de otra, y se esquematiza en el orden jurídico nacional patentizando su aplicación irrestricta e irrenunciable conforme al contenido de los conflictos humanos en juego, a fin de preservar el orden público e interés social que les es inherente; en cuyo sentido, se solicita **el control constitucional directo**, así como el control de **convencionalidad ex officio derivado de un control de constitucionalidad difuso** que permita esclarecer y establecer la interpretación humana que corresponda, adoptando que la garantía que en el particular se consagra se dignifica de la serie de obligaciones que parten del derecho reconocido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se debe garantizar que todas las personas **sin distinción gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del País, así como dentro del contenido de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte**, puesto que la única forma válida y legítima para restringirse o suspenderse, es por virtud de nuestro Orbe Supremo y en los casos que puntualmente no estén expresamente manifiestos, a través de aquellas que establezcan los tratados suscritos; siendo obligación de todas las autoridades del País, sin distingos, pero de acuerdo al ámbito particular de su competencia y atribuciones, el velar porque los mismos sean promovidos, respetados y garantizados, así como su vulneración sancionada, **en un marco de igualdad y no discriminación**, que permita garantizar el acceso a la justicia, así como la aplicación de una tutela judicial efectiva, a fin de poder restituir la regularidad constitucional vulnerada.

ESTANDAR DE IMPORTANCIA Y TRASCEDENCIA

Es importante establecer que los preceptos normativos en comento; es decir, tanto el artículo 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el 81, fracción II de la Ley de Amparo reglamentaria de sus artículos 103 y 107, establecen en el marco de procedencia del recurso de revisión y por ende, supuestos de procedencia de este mecanismo de defensa, la **importancia y trascendencia del tema jurídico debatido**; que no son otros que, aquellos que esta honorable Corte Suprema de la Nación ha establecido en la **relevancia** o en su caso **novedad** del tema en cuestión, de **acuerdo al segundo punto del Acuerdo General en mención**, emitido por el Pleno de este H. Tribunal.

En ese sentido, por un lado, el acuerdo de mérito destaca que, como importancia y desde luego trascendencia, se deberá considerar aquellos que, surtiendo los requisitos que en este caso se subsumen al establecimiento de **la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales**, tenga por objeto establecer un criterio de capital **relevancia** o **novedad**; por ello, conviene destacar como hecho notorio jurídico el que la Primera Sala de nuestra H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la progresividad gradual de los Acuerdos Generales que sobre la materia se han definido como Política Judicial para la procedencia del recurso de revisión; siendo en este caso la más reciente, la Disposición General invocada en el acuerdo 09/2015, en



PRIMER TROU
EN WATER
PERCEP
ZAPOPA



TRIBUNAL COLEGIADO
DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CIRCUITO I, JALISCO.

la que se hace destacar que ahora: *«lo importante y trascendente no parece ser tanto que ésta resuelva todas las cuestiones constitucionales, sino que sirva de guía en el dialogo interpretativo constitucional a que dieron lugar todos los cambios mencionados; de ahí que en el Punto Segundo Transitorio de dicho Acuerdo General, se establece que los temas que ameritan procedencia son aquellos que impliquen pronunciamientos “novedosos o de relevancia para el orden jurídico. Se insiste, esto es posible, dado que “importancia y trascendencia” no son elementos normativos de un contenido inequívoco ni permanente en el tiempo, sino conceptos variables en el tiempo»*. Así las cosas, es claro que la novedad o relevancia del tema, son los aspectos a dilucidar para comprobar la actualización en los elementos jurídicos adoptados en la política judicial como de importancia y trascendencia; mismos que, como se parte de esta descripción normativa que fija lineamientos de admisión, son variables en tanto no existe un criterio unificador que establezca el momento en que se está en presencia de uno u otro de los supuestos adoptados, puesto que éstos se adaptan a las circunstancias especiales en que se ven actualizados, quedando en consecuencia, sujetos al contenido de los derechos humanos en controversia, surgiendo a consecuencia del nuevo paradigma judicial que esta H. Corte asume, pues ya no sólo se trata de identificar los temas jurídicamente relevantes en cuanto a la Constitución, sino además, con la incorporación del *Corpus Iuris* que trajo consigo la reforma de 10 diez de junio del 2011 dos mil once, en la de constituirse como un Ente Unificador, pero además, armonizador del nuevo teorema normativo; a lo que además se suma que otro de los tópicos en cuestión para la procedencia de revisión evocando el mismo punto segundo del Acuerdo General a escrutinio, se justifica cuando en el particular se actualice en la sentencia de amparo directo un arbitrio judicial en el que el Órgano Colegiado respectivo, desconozca algún criterio sostenido por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con alguna cuestión propiamente constitucional, ya sea por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

Cobra aplicación al caso concreto que nos ocupa:

«Registro digital: 2012054
Aislada
Materias(s): Común
Décima Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Libro 32, Julio de 2016 Tomo I
Tesis: 1a. CLXXXVIII/2016 (10a.)
Página: 325

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA CONFIGURACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN CADA ACUERDO GENERAL PLENARIO, REFLEJA EL PAPEL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DESEMPEÑAR EN CADA ÉPOCA. De conformidad con el artículo 107, fracción IX, constitucional, para que proceda el recurso de revisión en amparo directo es condición necesaria, más no suficiente, que subsista una genuina cuestión constitucional, ya que, además,



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER C
EN POPAN,

164

50547f82236bfe5b02313dd03a4173d34b31b255d720cfd585431fe16373e770



EL COLEGIADO
PENAL DEL
CIRCUITO
JALISCO.

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe comprobar que se actualicen las notas de importancia y trascendencia, de conformidad con los acuerdos generales que ésta emita. Ahora bien, debe concluirse que cuando en dichos acuerdos se reglamentan aquellos conceptos, se realiza en el ejercicio de facultades constitucionales de política judicial otorgadas a aquélla para determinar en qué casos se requiere del establecimiento de doctrina jurisprudencial a fin de lograr la progresiva supremacía del texto constitucional en la vida nacional, pues ésa fue la intención de la reforma constitucional de 1999, de permitir que esta Corte se concentrara en la resolución de aquellos asuntos trascendentes para el orden jurídico nacional. De ahí la importancia de explicitar las razones de política judicial que subyacen a los distintos acuerdos generales emitidos por el Tribunal Pleno. Desde 1999, han existido dos de ellos: el primero fue el Acuerdo Plenario Número 5/1999, emitido el 21 de junio de ese mismo año, al inicio de la novena época. La principal preocupación en ese momento fue consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, mediante la depuración de sus competencias en materia de amparo, a fin de especializarse en la resolución de temas propiamente constitucionales y delegar todos los temas de legalidad. Por tanto, la preocupación subyacente fue la de consolidar un cuerpo de doctrina jurisprudencial en materia constitucional que sirviera de base a la función judicial en todo país. De ahí que cualquier tema constitucional no definido jurisprudencialmente, que no adoleciera de algún obstáculo técnico para su resolución en el fondo, regularmente ameritaría admisión. La política judicial era apuntalar la doctrina jurisprudencial sobre cualquier tema constitucional, para concluir el proceso de transformación del órgano en un verdadero tribunal constitucional. Posteriormente, se sucedieron una serie de reformas constitucionales en junio de 2011, mediante las cuales se estableció al corpus iuris de los derechos humanos como centro de protección constitucional y se introdujeron nuevas reglas para el juicio de amparo. Así, con el inicio de la Décima Época, se constató una redimensión cuantitativa y cualitativa del control constitucional: cuantitativamente, se ha constatado una descentralización, pues todos los jueces del país deben aplicar control difuso de constitucionalidad; cualitativamente, el parámetro de control constitucional encuentra una expansión en sus elementos, ya que también se integra con todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debió modificar su política judicial y procedió a emitir el Acuerdo General Número 9/2015. Conforme a éste, ahora lo importante y trascendente no parece ser tanto que ésta resuelva todas las cuestiones constitucionales, sino que sirva de guía en el diálogo interpretativo constitucional a que dieron lugar todos los cambios mencionados; de ahí que en el Punto Segundo de dicho Acuerdo General, se establece que los temas que ameritan procedencia son aquellos que impliquen pronunciamientos "novedosos o de relevancia para el orden jurídico". Se insiste, esto es posible, dado que "importancia y trascendencia" no son elementos normativos de un contenido inequívoco ni permanente en el tiempo, sino conceptos variables en el tiempo.

Amparo directo en revisión 5833/2014. Fernando RiónAutrique y otros. 28 de octubre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

Nota: El Acuerdo Número 5/1999, del veintuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para



PRIMER PREMIO
EN MATERIA
TERCER C
ZAFUAN

la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, y el Acuerdo General Número 9/2015, de ocho de junio de dos mil quince, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo citados, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, página 927, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2483, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.»

Bajo ese contexto, es en el que hoy se considera actualizada la procedencia de este mecanismo de defensa, puesto que los elementos de importancia y trascendencia para que se justifique la idoneidad de este recurso legal, se actualizan en uno y otro supuesto, ya que el tema que en el presente se aborda constituye un tópico de **relevancia para el orden jurídico nacional**, en tanto que el quehacer de las autoridades, se configura a través de las reformas constitucionales emitidas el pasado 10 diez de junio del 2011 dos mil once, sobre el cual se finco, precisamente, el alcance normativo neo-constitucional de los derechos humanos, su objeto, alcances, efectos y desde luego consecuencias en las estructuras normativas, así como en los deberes y obligaciones que se les asocian tanto a las autoridades del País como a las misma sociedad. Porque como se estableció en el criterio jurisprudencial en mención, ahora bajo este esquema novedoso de derechos humanos y garantías, esta H. Corte Suprema de la Nación, desarrolla un marco de dialogo e interpretación que sirva de guía respecto de las dimensiones novedosas cualitativas y cuantitativas de este este nuevo paradigma judicial.

Por ello, a través de ese nuevo orden normativo denominado también como **bloque constitucional**, en el que hoy en día parten las exigencias de aplicar un control conforme a la constitución y desde luego a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, justifica la importancia del tema en cuestión, atendiendo a lo relevante de dignificar los alcances normativos de los derechos humanos, y los sujetos que se ven inmersos en cada caso en que se actualice su aplicación, así como los efectos y consecuencia que les conllevan; incluso, en el que dicha intelección normativa se justifique en la medida en que su aplicación sea legítima; es decir, que procure que su actualización se de en un marco propicio que parta desde enfoques, presunciones o arbitrios objetivos y razonables; esto es, que su aplicación no sea desproporcionada, sino que parte de realidades normativas y materiales, de manera que no se justifique **por el simple hecho de tratarse de una especie del género humano**, privilegiando que su aplicación se dé dentro de un marco de respeto, igualdad y equidad justificada que se lleve a cabo a través del respeto irrestricto al orden público e interés social que les da vida jurídica, pero además, que permite confluir en un marco de respeto a otros derechos humanos también reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso en otros Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a fin de que, en caso de haber conflicto, se pondere la legitimidad de un derecho y otro, así como los efectos menos lesivos para la persona a quien se constituye la restricción, siempre y cuando, ésta sea justificada, y no parta como en el presente, de una apreciación difusa y dogmática empleada por el los Integrantes del H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.



PRIMER TRIBUN,
EN MATERIA
TERCER C
ZAPOTAN,

156

En efecto, por regla general, los *derechos humanos no son parte de una especie del género en específico*, sino que éstos, en forma independiente a los interseccionalismo que nacen de la constante, continua y permanente interacción humana, se encuentran reconocidos sin distinciones para todas las personas. Ciertamente, existen casos en que se actualizan normas para atender preferentemente a *grupos vulnerables o prioritarios*, lo que hace la excepción a la regla; empero, precisamente, en este caso, es cuando más se debe destacar la procedencia de sus fuentes formales y la idoneidad en los casos materiales; sin que ello venga a suplir las normas o fuentes de derecho nacional e internacional que aplican a la generalidad comentada.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COURT OF JUDICIAL
PENAL DEL
CIRCUITO
JALISCO

Es ahí donde se justifica la intervención de este H. Tribunal Superior, pues dilucidar la aplicabilidad de un criterio normativo, más aún cuando se trata de un derecho humano, no puede partir de apreciaciones subjetivas unidimensionales, porque de ninguna forma se puede escapar de la diversidad social que atempera su aplicación, ya que el deber que subyace a las cualidades de derecho nacional y supranacional, tienden por objeto a garantizar los derechos humanos y las garantías de toda la especie humana, de manera que, el arbitrio judicial debe ser consiente y analizar toda la problemática que traerá consigo en este caso la restricción a otras prerrogativas y sus garantías. Además, se debe ser cuidadoso en la interpretación, aplicación y efectos que se relacionen a los derechos humanos, pues no se puede negar que a éstos subyacen los principios de interdependencia, invisibilidad y desde luego universalidad sobre las que en forma progresiva y gradual se han desarrollado; porque se ha dicho, y es un criterio reiterado por esta H. Corte Suprema, el que los modelos hermenéuticos constitucional y convencional no se excluyen o son subsidiarios, por lo que la aplicación de uno no deja de obligar a la autoridad respectiva a la justificación del otro, y los mismo converge con la fuente normativa de prerrogativas que tutelan la dignidad humana; esto es, en el sentido que, no basta con destacar la actualización de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer «CEDAW» y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Belém Do Para», sino que estas forman parte de un catálogo que no puede prescindir, aún de oficio, de los particulares derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos «Pacto de San José Costa Rica», por mencionar alguno de ellos, y en donde por lo que respecta al particular, no sólo se deben considerar los derechos y prerrogativas asociados a las mujeres, sino además a las garantías judiciales consagradas en el debido proceso legal, la igualdad procesal y ante la ley, la contradicción, la carga de la prueba en la parte acusadora, la inmediación que generan o que se reflejan en ceñirse a las reglas específicas que posibilitan el acceso a la justicia así como la aplicación de una tutela judicial efectiva.

De ahí en considerar que, el estudio del presente por este Tribunal Constitucional, sí llevaría a adoptar un criterio jurídico de relevancia para el orden legal nacional, en tanto los temas relativos a la *violencia contra la mujer y su discriminación*, no son obstáculo para que éstos se actualicen en cada caso y en toda tesitura en el que se encuentra de por medio una especie del género femenino y mucho menos en todos los casos en que la misma denuncie ante



UNITED NATIONS
GENERAL ASSEMBLY
7th Session
1952

162

las autoridades de procuración de justicia la violencia y discriminación en su contra, ***pues estos estándares son relevantes en la medida en que se actualice su contenido***; y no es que se quiera exhibir la conducta asumida por el Órgano Colegiado, pero su arbitrio judicial deja mucho que desear al momento de constituirse como Juez Ordinario y no como Juzgador Constitucional; pues lo más grave de la interpretación que en este caso se lleva a cabo es que no termina por desentrañar las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para la aplicación hermenéutica de estándares de derechos internacional asociados a las mujeres como sector prioritario en los casos en que sufren violencia y discriminación, pues sólo se constrañe a hacer suyos los diversos criterios adoptados por este Órgano Superior de Justicia al que se comparece, pero nunca adopta la postura que permite justificar su actualización al caso a estudio, mucho menos desentraña aquellos alcances, reglas o metodologías de su aplicación, sino que ***su preámbulo es el género y su especie la mujer, lo que le permite adoptar por ese sólo hecho, posturas, acciones o posiciones que transgreden el orden jurídico nacional y supranacional***; y es que pasa desapercibido que el género va más allá del aspecto sustantivo entre mujer y hombre, sino que se transmuta de acuerdo a la riqueza de la diversidad, en donde el hombre también como género humano, es parte de violencia sistemática, ***misma que de igual forma se desarrolla y se niega como parte del machismo en el que lo masculino no puede ser objeto de éstos ataques, inclusive y como se ha demostrado, en donde mujeres aprovechan su posición histórica de desventaja para hacerse pasar por víctimas de delitos a fin de procurar una situación de incertidumbre a su pareja.***

LEGADO
DEL
TO
CO.

Es ahí donde se estima que el criterio adoptado debe ser relevante y erigirse en forma fehaciente sobre la realidad histórica que de igual forma converge entre géneros, porque pasa como en el presente que las autoridades otorgan mayores derechos y prerrogativas a las mujeres que ***no necesariamente parten de estándares de derecho nacional e internacional justificados***; pues al margen de que existan fuentes de derecho nacional y supranacional que confluyen bajo un orden e interés social de protección a estratos marginados e históricamente subordinados, no menos cierto lo es que su justificación al ser excepcional, se debe dar dentro de los límites de lo objetivo y razonable, de manera que se compruebe su aplicación bajo un estándar humano dignificador, ***pero no sólo en su reconocimiento o mención***, sino además, en la justa ***adecuación de su sentido y alcances***, de forma tal que éstos no vengán como en el presente a justificar ***la falta de elementos probatorios, la poca idoneidad de su contenido, así como las contradicciones surgidas de su apreciación y la deficiente o nula capacidad de la Autoridad Acusadora para integrar debidamente una investigación criminal, dando mayores alcances a los dichos de un denunciante, que si bien conlleva un estándar indiciario importante, no puede soportar por sí misma la imposición de una condena penal que tiene por objeto y defecto limitar las prerrogativas, libertades y derechos de mi representando, así como expenderlo como responsable ante la sociedad, únicamente bajo la premisa de que, quien denuncia es una mujer, desconociendo que si bien los delitos de violencia familiar se hacen en ocasiones fuera del ojo o conocimiento público; en el particular se mencionaron por ésta varios testigos, entre los que se encontraron maestras, inclusive los mismos hijos de los interesados –denunciante y denunciado– de quienes nunca se tomó su declaración, incluso, existen otros elementos de prueba –interrogatorios y careos– con los cuales se puede***



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA PENAL
TERCER CIRCUITO
ZACORAN, J/

168

50547f82236bfe5b02313dd03a4173d34b31b255d720cfd585431fe16373e770

reforzar o dar sentido a aspectos que como en el presente de la denuncia de hechos y ampliaciones quedan en duda por las constantes contradicciones e imprecisiones, y no justificarlos por el simple hecho de tratarse de un género aparentemente en desventaja —*lo cual nunca se comprobó*—, denigrando u otorgándole mayores prerrogativas que al implicado por el sólo hecho de ser hombre y no mujer, y en esas condiciones, partiendo *de la falacia de petición de principio para afirmar hechos o circunstancias de los cuales justifica la existencia de un delito, denostando las pruebas de descargo ofrecidas por la parte que represento, y partiendo en un sentido sobredimensionado y parcial de las de mi contraria*, lo que como se dijo, parte de la exegesis que efectúa sin el debido cuidado, del contenido de los tratados internacionales relacionados especialmente de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer «CEDAW» y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Belém Do Pará», pero desconociendo otros derechos y garantías en juego.



COLEGIADO
JAL DEL
UITO
SCO

Finalmente se solicita que en la misma tesitura, se considere que el presente mecanismo de defensa es procedente, en tanto que los Integrantes del H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Tercer Circuito, desconoce los criterios sostenidos por esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto es, aquellos que han establecido que el ejercicio de interpretación y aplicación de normas de derecho nacional, como ya se dijo, no viene a suplir el ejercicio hermenéutico que se debe desarrollar con base a los postulados que de igual forma como prerrogativas humanas establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues el margen de intelección que se debe adoptar, debe hacer propicia la debida aplicación del conjunto normativo visualizado a través del binomio legal implícito en los artículos 1º y 133 de la Norma Supra indicada; y en el mismo contexto, se debe hacer valer bajo un enfoque que permita atender todos los derechos humanos que están en juego y que se encuentran reconocidos en el marco de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, a los cuales se deben sumar en una y otra cuestión, los criterios adoptados jurisprudencialmente o a través de sentidos resolutivos y sus consideraciones, tanto aquellos que fuera resuelto por este Honorable Tribunal del País, como la en su caso, en la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos; en este último caso, considerando aquellas fuentes de derecho vinculante y no vinculante pero orientador, en el caso de que el Estado Mexicano sea o no parte de dichos procedimientos y condenas; puesto que el criterio de interpretación conforme, no es en sí mismo, una elección de quien juzga, a efectos de que sobre éste recaiga la decisión de qué marco normativo invocar, pues éstos se encuentran condicionados de los derechos y prerrogativas que subyacen a los hechos, a la materia, a las pruebas y a las normas que en su caso se actualicen para atender la petición de pedir.

De ahí en considerar que los criterios que se dejaron de atender, al sólo hecho de apreciar los alcances normativos de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer «CEDAW» y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Belém Do Pará» —*que no debidamente por omitirse la obligación de justificar su actualización*—, y de forma muy limitada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos «Pacto de San José Costa Rica», hacen



PRIMER TRIBUNAL OC
EN MATERIA PENAL
TERCER CIRCU
ZAPOCAN

justificable que, el Órgano Superior que hoy se recurre, haya resuelto atendiendo a sólo una parte del catálogo de derechos actualizado, y que por consecuencia, desconoce la aplicación de los siguientes criterio jurisprudencial y que se robustece con otro aislado, que son parte del catálogo normativo de apreciación que permite efectuar una debida apreciación de los casos concretos, en la forma y términos siguientes:

«Registro digital: 2009179

Jurisprudencia

Materias(s): Común, Constitucional

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 18, Mayo de 2015 Tomo I

Tesis: 1a./J. 38/2015 (10a.)

Página: 186

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La obligación de ejercer el control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior, porque el Tribunal Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que el control ex officio fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los jueces y todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de amparo; en esos supuestos, deberá además llevar a cabo el ejercicio en los tres pasos que indica el expediente Varios 912/2010: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación.

Amparo directo en revisión 3200/2012. 8 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.

Amparo directo en revisión 909/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.

Amparo directo en revisión 2916/2013. 13 de agosto de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER C
7A EPOCA

Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo en revisión 3797/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo en revisión 3274/2014. 12 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

Tesis de jurisprudencia 38/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de abril de 2015.

Nota: La ejecutoria relativa al expediente Varios 912/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313.

Por ejecutoria del 13 de junio de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la contradicción de tesis 34/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir ya un criterio vinculante del Tribunal Pleno derivado de las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de mayo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.»

«Registro digital: 2000072

Aislada

Materias(s): Constitucional, Común

Décima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: Libro IV, Enero de 2012 Tomo 5

Tesis: III.4o.(III Región) 5 K (10a.)

Página: 4320

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERCERLO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, tuvo importantes modificaciones que impactan directamente en la administración de justicia, porque evidencian el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio *pro persona* como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, privilegiando aquellas que brinden



PRIMER TRIENIO
EN MATERIA
TERCER
TRICENIO

mayor protección a las personas. De esta manera, todos los órganos jurisdiccionales nacionales deberán, en principio, ejercer el control de convencionalidad de las normas, atendiendo no sólo a los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna, sino también a los contenidos en los tratados internacionales que la Nación tenga suscritos en materia de derechos humanos. Así, actualmente existen dos vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados: Primero, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación mediante las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo directo e indirecto y, segundo, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. En estas condiciones, el parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente: 1) Todos los derechos humanos que contemple la Constitución Federal (con fundamento en sus artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; 2) Todos los derechos humanos que dispongan los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; 3) Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en las sentencias en las que el Estado Mexicano sea parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no sea parte. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los Jueces presupone realizar tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio. Significa que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto. Se traduce en que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Ley Suprema y en los tratados internacionales en los que México sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la norma que menos beneficie cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

Amparo directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimentel. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas aisladas P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.), P. LXIX/2011 (9a.) y P. LXX/2011 (9a.), de rubros: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX



PRIMER TRIMESTRE
EN MATERIA
TERCER
ZAPOPA

172

OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 535, 551, 552 y 557, respectivamente.»

Por eso, de acuerdo a los criterios invocados, la obligación a aplicar sin distinción y en toda oportunidad el catálogo de derechos humanos posicionados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, convergen en escrutinio para la debida aplicación de diversos derechos humanos en juego, sin caer en el absurdo de pensar que ello conlleva la carga de analizar todo el catálogo vigente de prerrogativas sustantivas, pues por eso el arbitrio judicial debe ser profesional, objetivo e imparcial; esto es, debe ser un experto en la materia que desarrolla y, por ende, atender la confluencia normativa de otros derechos que también conllevan la carga de normas fundamentales de acuerdo a los hechos específicos, a efectos de establecer bajo una dialéctica objetiva pero incoada en ambos conciertos, cuales derechos humanos deben prevalecer, pues se insiste, en el particular, la relevancia del tema se centra en los abusos que se llevan a cabo por parte de las Autoridades que desconocen derechos sin justificación, por el sólo antecedente de la especie humana; como en el caso particular subyace en las mujeres; dejando de largo las garantías judiciales consagradas en los artículos 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos por mencionar algunos en este preámbulo de procedencia- los cuales no fueron parte del estudio" que llevó a cabo para tal efecto, y sin que pase por desapercibido que nunca justificó la actualización de las normas consagradas en el marco de las convenciones «CEDAW» y «Belém do Pará», de las cuales sólo atendió su vigencia y alcances, pero nunca su actualización normativa como parte de la legalidad que forma parte de la seguridad jurídica del desarrollo de su función jurisdiccional y que tiene por objeto la interdicción de la arbitrariedad, en donde la autoridad no sólo debe fundar, sino además motivar su actuación, de manera que ésta tienda a justificar que se adecúa a cada caso concreto; lo que de suyo trae la vulneración del estándar de derechos que no fue reconocido ni atendido derivado de los demás tratados internacionales invocados, así como de los dispositivos normativos tutelados en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de otros derechos humanos en juego, que de acuerdo al criterio jurisprudencial señalado con antelación, debieron ser parte del estudio que tuviere por objeto delimitar los alcances del derecho humano, a efectos de no atentar de forma injustificada, excesiva y arbitraria sobre las prerrogativas de mi representado, y sobre las cuales me permito efectuar los siguientes conceptos de:

AGRAVIO

PRIMERO.- La valoración que al efecto lleva a cabo el Órgano Colegiado Resolutor al momento de pronunciarse en amparo directo sobre la procedencia de la protección de la justicia federal, entorno a la apreciación normativa de los artículos 1°, 2°, 3°, 7°, 7°E y 7° F de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Belém Do Pará»; en su correlación con el 6° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como 2° y 25 de la Convención Americana sobre



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER
ZACAPÁN

173

Derechos Humanos «Pacto de San José Costa Rica», trastocan el orden elemental que confluye de la fuente de obligaciones de carácter nacional y supra nacional de derechos humanos que como autoridad se encuentra obligada a acatar. En efecto, la intelección normativa dispuesta como preámbulo de la actuación de los Integrantes del Honorable Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, no satisface los elementos idóneos de seguridad jurídica; **esto es, en el sentido de atender a la adecuación normativa aplicable al caso concreto y la ponderación de derechos humanos reconocidos dentro de un catálogo fundamental en orden de igualdad y no discriminación por sexo y que trastocan garantías judiciales como la Presunción de Inocencia e Indubio Pro Reo**, pues su fallo, desatiende para tal efecto la precisión de todas las circunstancias que especialmente se hubieren tomado en consideración para su actualización y precisando las razones particulares de su emisión y las causas inmediatas de su aplicación, lo que permite hoy a través de este medio legal de defensa, considerar que su apreciación sesgada, no puede repercutir y mucho sustentar la modificación de los actos de autoridad reclamados por la quejosa.

COLEGIADO
ENAL DEL
RCUITO
ALISCO.

Lo anterior se afirma de esa manera con total precisión, pues al momento de aplicar la sinergia normativa en mención, el Órgano Colegiado recurrido desatiende que en un estado democrático y de derecho en el cual ejerce la soberanía jurisdiccional que le es delegada en el marco normativo de la Ley de Amparo, su posición es la de constituirse, como un garante de las normas fundamentales reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; lo que genera que no pueda decidir una controversia de derechos humanos, con base en una parte de ese marco normativo **o sujeto únicamente a la esfera de derechos de una sola de las partes en conflicto**, desatendiendo todas las repercusiones que se ven involucradas en el conflicto humano. Así, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución General en mención el Poder Constituyente o Permanente, ha sido enfático en establecer a partir de la reforma de 10 diez de junio del 2011 dos mil once, un nuevo enfoque o modelo de interpretación para hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas; lo que de suyo trae la aplicación de un estándar nacional y supranacional que se encuentra orientado en un marco que no establece jerarquías; esto es, a través de un orden superior que se actualiza en cada caso en que se vean involucrados los derechos humanos y garantías de las personas, ya sea que la lesión provenga de una norma general o de la omisión y acción de alguna autoridad que tienda a vulnerar esa fuente de derechos universales. Enfoque protector que parte de una apreciación *neo constitucional*, que entiende el alcance que hasta hace algunas décadas se tenía sobre la base del *derecho positivo*, y que extiende la democracia de las normas, su orden público e interés social, el cual se ve reflejado en una apreciación normativa funcional y sistemática integral bajo controles hermenéuticos *Conforme y Pro Persona que son elementos rectores en la función de la Autoridad Judicial en el ejercicio jurisdiccional*.

Bajo esa perspectiva, y evocando aún el contenido del catálogo de derechos que nos son reconocidos en el contenido del artículo 1º de la norma fundamental supra indicada, se puede advertir de una apreciación e intelección teleológica, el que las autoridades en el País, tienen no sólo la atribución reconocida, sino además la obligación definida, de promover,



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER O
ZAPOCAN,

174

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la coherencia normativa que se refleje del catálogo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es que, no se puede negar que la actualización de un derecho humano se tiende a actualizar desde perspectivas transversales, en las que por su naturaleza universal, indivisible e interdependiente parte de un orden progresivo y gradual reconocido en la dignidad humana en forma histórica a través de los años, trae como una consecuencia que éstas no puedan ser desconocidas al momento de atender como en el presente, sólo una parte de su catálogo, cuando las exigencias formales ameritan un arbitrio judicial más amplio; mismo que se robustece de los contenidos de los criterios jurisprudenciales, como aislados invocados en líneas que anteceden y descritos bajo los rubros y textos: **«CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL»** así como **«CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERCERLO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES.**

COLEGIO NACIONAL DEL JUEZ CUITO LISCO.

Y es que, si el efecto es reconocer derechos humanos, éstos no pueden a su vez desconocer otras prerrogativas de la misma naturaleza, pues su carácter interdependiente e indivisible y universal le obliga a efectuar su arbitrio de manera objetiva, imparcial y desde luego razonable; porque las obligaciones contenidas en los tratados internacionales que al efecto invoca, no permiten hacer distingos ni preferencias a efectos de desatender aquellos que de igual forma como garantías judiciales, se constituyen de otros marcos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, o incluso, en el contenido de otros más que si bien invocó, sólo atendió en forma parcial y con falta de imparcialidad, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos *«Pacto de San José Costa Rica»*.

Porque en ambos textos, el Estado Mexicano con su ratificación, se obligó a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a *toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por sexo* -artículos 2º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 1º del Pacto de San José Costa Rica»; en ese sentido, era elemental que además de la apreciación normativa que al efecto llevo a cabo en torno a las Convenciones *«Belém do Pará»* y *«CEDAW»*, considerara dentro de esa coherencia normativa, las implicaciones que se asocian a las **garantías judiciales**, que se consagran en el artículo 8º del referido Pacto de Costa Rica; pues dentro del estado democrático jurídico, universalmente se ha reconocido el derecho de toda persona a que sea oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por conducto de un Juez Tribunal competente, independiente, imparcial establecido con anterioridad a la ley, en la acusación penal formulada en su contra, así como para la determinación de sus derechos. Y es que no se puede desconocer que estas prerrogativas, se vulneran en perjuicio de mi representado, hoy tercero interesado, al momento de establecer un estándar normativo sobre el cual sobre la base de elementos probatorios mínimos se pretende constituir una condena, pese a que ambas partes fueron debidamente representadas, en el caso de la querellante, a través del Agente del Ministerio Público, quien es la autoridad encargada de efectuar conforme al artículo 116 del Código de



PRIMER TUBO
EN UNTERIA
TERCER ()
ZAPOPAN

175

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, *la comprobación del cuerpo del delito de que se trate; esto es, los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito*. Pues de acuerdo a este precepto, es sobre esa base probatoria sobre la que en todo caso se podrá tener por demostrada o en su caso acreditada su responsabilidad penal, al deducirse su participación.

Por eso es que no hace sentido, que si bien, de acuerdo al artículo 127 bis del otrora Código Adjetivo Penal para el Estado de Jalisco, *en los supuestos que deriven del delito de violencia intrafamiliar, el cuerpo del delito se acreditará: a) Comprobando el parentesco consanguíneo o civil o a la relación de hecho existente entre el sujeto pasivo y el activo, y b) con los dictámenes periciales que expresen el deterioro causado por el agresor a la integridad física o psicológica o que haya afectado la libertad sexual de la víctima; estos elementos parten de una fuente indiciaria que se sustenta en el contenido esbozado por la querella efectuada por la supuesta víctima del delito* [REDACTED] *y aunque ciertamente su testimonio o denuncia adquiere relevancia, no se puede desconocer que su dicho, relevante como se dijo para incoar la investigación criminal, en términos del artículo 266 del Enjuiciamiento Penal para el Estado de Jalisco, sólo contiene valor indiciario; sin embargo en el particular su apreciación se debió efectuar, atendiendo a las contradicciones manifiestas tanto en lo esencial como en lo accidental del escrito de denuncia presentado el 20 veinte de agosto del 2014 dos mil catorce; la ratificación de denuncia de 05 cinco de noviembre del 2014 dos mil catorce; así como las ampliaciones de denuncia de 12 doce marzo del 2015 dos mil quince y sus ratificaciones de 20 veinte de marzo del 2015 dos mil quince, en los que la exposición de los hechos fue dudosa, y no permitió el establecimiento de circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión; pues pasar por inadvertido dichas incidencias, trastoca el ejercicio hermenéutico responsable que permite establecer la exposición de las razones para valorar las pruebas, a fin de que siempre que se tenga duda, se esté en lo más favorable al reo; lo cual trastoca uno de los principios elementales del proceso que, de acuerdo al texto del artículo 20, inciso a), fracción VIII, establece que el Juez sólo procederá a la condena cuando advierta exista convicción de la culpabilidad del procesado.*

Ello, pues del mismo modo, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece que *todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia*, de manera que se debe garantizar que éstas sean oídas con las debidas garantías más allá de dimensiones naturales asociadas a los sexos. Luego, es claro que lo anterior se trastoca y tergiversa, puesto que se atenta contra *la presunción de inocencia consagrada en los numerales convencionales invocados*, así como previstos en el artículo 20, inciso b) fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 punto 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ya que se permite emitir un juicio delator, *que parte de un mismo indicio o acusación, a través de una falaz petición de principio, sobre la cual robustece de la misma denuncia inicial como de las subsecuentes ampliaciones, las acusaciones que en forma lisa y llana efectúa aisladamente la quejosa, en este caso querellante ante la autoridad penal; puesto que por los motivos aducidos en el párrafo que antecede, se debió atender que no*



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCE
ZAPOP

176

obstante que el testimonio de la víctima tiene capital importancia; esto sólo es indiciario, y que, contrario a lo manifestado por los Integrantes del Cuerpo Colegiado que se recurre, aunque en algunos casos los delitos de violencia intrafamiliar se puedan dar dentro del seno familiar sin la confluencia de testigos, *la querellante manifestó que los distintos hechos acaecidos, se hicieron ante la presencia* de quienes dijo respondían a los nombres de: [REDACTED] así como [REDACTED] y [REDACTED] incluso refirió que los menores concebidos dentro de la relación sentimental y matrimonial; [REDACTED] y [REDACTED] fueron parte de esa violencia sistemática que a su decir se perpetuó a lo largo de los años, incluso hizo del conocimiento que para el caso de lo anterior, las maestras de sus hijas [REDACTED] le habían comentado que su hija se comportaba de forma verbalmente agresiva con sus compañeros, y que incluso le llegó a comunicar que no obedecía indicaciones, e incluso que le mencionaba que su padre, el hoy tercero interesado recurrente a quien representa esta parte, bebía cerveza y manejaba tomado; así como el hecho de que la psicóloga de la guardería [REDACTED] ubicado en [REDACTED] de la colonia [REDACTED] los había citado tanto a ella como a su esposo, para hacerles del conocimiento que su hija estaba manifestando conductas y agresiones a sus compañeros, porque su papá tomaba, se emborrachaba y manejaba tomado a todas partes, misma que por los mismos hechos supuestamente acaecidos solicitó se citara a declarar a sus maestras; esto es, [REDACTED] psicóloga del CDI #2 de [REDACTED] así como a la Licenciada [REDACTED] a efectos de se demostrara la afectación psicológica que denunciaba habían sufrido de igual forma sus menores hijos e hijas.

Cobra aplicación al caso a estudio:

«Registro digital: 2000124

Aislada

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: Libro IV. Enero de 2012 Tomo 3

Tesis: 1a. I/2012 (10a.)


Página: 2917

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos que *el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpaado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en*

PRIMER TRIS
X EN WATEI
TERCE
ZAPOP/

177

los autos. Por otra parte, el Tribunal en Pleno sustentó la tesis aislada P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", en la que estableció que en la Ley Suprema, vigente en ese entonces, no estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y sistemática de sus artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, primer párrafo, y 102, apartado A, segundo párrafo, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que el perfeccionamiento de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente a rango constitucional a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para quedar ahora contenido en el artículo 20, apartado B, denominado: "De los derechos de toda persona imputada", que en su fracción I, establece: "I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".

 Amparo directo en revisión 2087/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gama.

NAL DE JALISCO
LA PENAL DEL
CIRCUITO
JALISCO

Empero, contrario a lo anterior, y pese a precisarse la intervención de diversos atestes en los hechos supuestamente acaecidos, la Autoridad Ministerial no desahogó ningún otro elemento de prueba que generara convicción a sus manifestaciones, ya que pese a la denuncia de hechos efectuada en diversos tiempos por [REDACTED] no generó que la rectora de la investigación criminal llevara a cabo el desahogo de otros testimonios; siendo que en el particular, solo se desahogaron las testimoniales de [REDACTED] y [REDACTED] mismas que cabe decir, en la correlación normativa de los artículos 264 y 276 del Enjuiciamiento Civil para el Estado de Jalisco, y de las que se advierte se refirieron únicamente a los hechos acaecidos el 18 dieciocho de abril del año 2014 dos mil catorce; empero en donde por un lado, la ateste [REDACTED] perdió todo atisbo de veracidad al no ser mencionada por la referida denunciante como parte dentro de los hechos sucedidos en dicha data, pues como se aprecia de sus declaraciones; ésta señala que ese día sólo se encontraban en el lugar de los hechos [REDACTED] y [REDACTED] última mencionada que nunca compareció, además de que incluso tanto de una como otra testimonial, no se corroboraron en las circunstancias de tiempo, pues por un lado la denunciante [REDACTED] refirió que los hechos sucedieron a las 8:00 horas del medio día; y las referidas atestes precisaron que estuvieron presentes a las 13:00 trece horas en forma coincidente; máxime que además de lo anterior, no fueron coincidentes en las circunstancias especiales y razones particulares de sus atestes, pues éstas no precisaron la relación detallada de los hechos que se suscitaron de acuerdo a lo referido por la denunciante; lo que fue corroborado por la Sala responsable, al señalar que los testigos de cargo señalados eran contradictorios; además de que como se refirió por esta parte, en el caso de la testigo [REDACTED] ésta nunca fue señalada como presente en los hechos acaecidos por la denunciante en dicha fecha; lo que fue corroborado inclusive por la autoridad recurrida, quien al respecto señaló en éste último sentido que: «...se coincide con la Sala responsable, en que los testimonios de [REDACTED] Y [REDACTED]

PRIMER TRI
EN MAT
TERI
ZAPC

178

no son dignos de valor probatorio en términos del artículo 264 del Enjuiciamiento Civil para el Estado...».

Lo anterior se refuerza con el contenido del criterio sustentado bajo la voz:

«Registro digital: 173507

Aislada

Materias(s): Penal

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: Tomo XXV, Enero de 2007

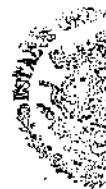
Tesis: I.4o P.36 P

Página: 2295



TRIBUNAL COLEGIADO
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TERCER CIRCUITO
TOLUCA, JALISCO

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PIENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES. De acuerdo con la tesis P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", este principio aparece implícito en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos principios de debido proceso legal y el acusatorio dando lugar a que el acusado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia, sino que incumbe al Ministerio Público acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del inculcado. Al tenor de estos lineamientos se colige que el principio de inocencia se constituye por dos exigencias: a) El supuesto fundamental de que el acusado no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción inversa de culpabilidad durante el desarrollo del proceso; y, b) La acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto, lo que determina necesariamente la prohibición de inversión de la carga de la prueba. Ahora bien, el primer aspecto representa más que una simple presunción legal a favor del inculcado, pues al guardar relación estrecha con la garantía de audiencia, su respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar al acusado la oportunidad de defensa previa al acto privativo concreto; mientras que el segundo se traduce en una regla en materia probatoria, conforme a la cual la prueba completa de la responsabilidad penal del inculcado debe ser suministrada por el órgano de acusación, imponiéndose la absolución si ésta no queda suficientemente demostrada, lo que implica, además, que deben respetarse los lineamientos generales que rigen para la prueba en el proceso penal y su correcta justipreciación, pues los elementos de convicción que se consideren para fundar una sentencia de condena, deben tener precisamente el carácter de



PRIMER TIDE
EN MATER
TERCE
ZAPCPI

174

pruebas y haber sido obtenidos de manera lícita. Así, la presunción de inocencia se constituye en el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales y que sea capaz de enervar al propio principio.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 864/2006. 31 de marzo de 2006. Unanimidad de votos (No obstante la Magistrada Olga Estrever Escamilla, manifestó estar acorde con el sentido del fallo, mas no así con todas las consideraciones). Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Héctor Vargas Becerra.

Amparo directo 1324/2006. 12 de julio de 2006. Unanimidad de votos (No obstante la Magistrada Olga Estrever Escamilla, manifestó estar acorde con el sentido del fallo, mas no así con todas las consideraciones). Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Héctor Vargas Becerra.»



AL COLEGIADO
PENAL DEL
CIRCUITO
JALISCO

Por ello, se considera que, al no haberse tampoco suplido las inconsistencias relativas a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las referidas comparecencias efectuadas por la denunciante, hoy quejosa, pese a que las mismas hubieren podido instruirse adecuadamente con otros elementos de convicción como el desahogo de interrogatorios o careos, no debe ser una deficiencia reprochable a la parte que represento, pues ésta no tiene la carga de probar los hechos denunciados, sino de desvirtuar aquellos que cumpliendo los parámetros legales de referencia a la ley de la materia, desprendan presunciones o convicciones de un hecho; pues permitir que los referidos medios de prueba, pese a dichas deficiencias, y no contener en su perfeccionamiento las circunstancias de modo, tiempo y lugar tengan alcances demostrativos, otorgándole eficacia a sus contenidos **por el sólo hecho de tratarse una mujer quien denuncia los hechos delictivos de violencia intrafamiliar, desmotándose la figura del sexo masculino, y colocándolo en una posición precaria en la que su biología natural les es causa o motivo de condena, sin establecer una adecuación normativa que permita colegir si la denunciante se encuentra dentro de los supuestos alusivos a los grupos prioritarios que ameritan la aplicación de las normas «Belém Do Pará» y «CEDAW», pese a que la carga de derechos parte en esencia de la igualdad y no discriminación, que atenten como en el presente, atentar contra la dignidad humana, y que sus efectos son los de anular o menoscabar los derechos y libertades reconocidas; generándose una notoria falta de seguridad jurídica, pues se permite que se actúe en consecuencia en forma arbitraria y dogmática, pues el juzgador se debe a los hechos, y éstos últimos sólo se pueden justificar con pruebas que, admitidas de acuerdo al estándar legal respectivo, desprendan alcances demostrativos suficientes no sólo para acreditar el tipo penal, sino además la plena responsabilidad de mi defendido.**

Pues ello permite que se actúe en forma desproporcionada, y se determine que el sin número de situaciones que fueron denunciadas, se tornen como verdades absolutas, pese a que si bien el dicho de la denunciante tiene un valor indiciario preponderante, éste sólo tiene por objeto darle credibilidad a efectos de incoar la investigación, efectuar todos los actos o



PRIMER TERN
EN WATER
TERCEI
ZAPOPA

diligencia de escudriñamiento, así como para dictar las medidas de protección que en su caso permitan garantizar la protección del inocente, la procuración de que el culpable no quede impune, esclarecer los hechos y en su caso, llegado el momento oportuno, garantizar lo que corresponda por reparación del daño; pero ello no puede partir acosta de la vulneración de los **principios de igualdad procesal y ante la ley**, así como de **contradicción**, pues se permite que una acusación aislada surta efectos plenos para constituir un delito y fijar una pena.



AL C. JACO
A PENAL DEL
CIRCUITO
I, JALISCO.

A ese respecto, es que se considera que, aunque no se desconoce el estándar humano que permea el orden jurídico nacional, y que se pretende aplicar por el Órgano Federal; esto es, en el sentido de que, conforme al artículo 1° de la Convención «Belém Do Pará», la violencia contra la mujer debe entenderse como aquella conducta o acción que, basada en su género, cause muerte, daño, sufrimiento sexual y psicológico; inclusive el hecho de que de acuerdo a su numeral 2°, ésta se puede desarrollar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende entre otros violación, maltrato y abuso sexual. Inclusive, el que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3°, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, o que de acuerdo a su artículo 7°, todos los Estados Partes están obligados a condenar todas las formas de violencia contra la mujer, y que para tal efecto, conviniendo para tal efecto en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; **ello no es obstáculo para que se desatiendan otros derechos humanos que de igual forma constituyen estándares de garantía para el debió proceso legal, y que han sido reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el contenido de cada uno de los Tratados Internacionales señalados citados**, sobre los cuales se reconoce el estándar de prueba para justificar los hechos y en todo caso soportar una condena y dar sentido y alcances a los hechos denunciados, cuyo deber parte, como se dijo de los estándares humanos de **Presunción de Inocencia e Indubio Pro Reo**, puesto que las dudas destacadas en el marco probatorio utilizado para incoar el proceso no pueden ser un obstáculo para demostrar la inocencia sino una vía para garantizarla, porque la acusación que se haga de n hecho delictivo forma parte de un aparato integrador del que surgen otros elementos convictivos que correlacionados, permitan establecer **una decisión judicial justa, que parta sobre verdades relativas demostradas, y no a través de inferencias arbitrarias de un mero indicio.**

Bajo ese contexto, las calidades calificadas en las normas humanas, deben hacer que quien tiene dentro del marco de sus funciones el dirimir conflictos penales, actúe en ejercicio de la inmediación de las leyes, y no se emplee o justifique en una calidad subversiva al orden jurídico nacional y supra nacional de derechos humanos, pues estos estándares, precisamente al colegirse en pretensiones jurídica que tutelan la dignidad humana, no pueden partir bajo ninguna circunstancias de apreciaciones que no les sean objetiva y razonablemente aplicables al caso concreto. Pues, las debida diligencia de las obligaciones contenidas en el albor de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Belém Do Pará», establecen al mismo tiempo dentro de su artículo 7°, y de todo su catálogo



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER C
ZACON

181

de obligaciones, actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar toda la violencia contra la mujer, *empero considerando que ello conlleva una carga implícita que debe ser acreditada en forma sólida, y no sobre la base de apreciaciones subjetiva*; puesto que como se dijo, éstos derechos, para que no colisionen con otros derivados, por ejemplo a las *garantías judiciales* que se prevén en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; inclusive, de los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben coordinarse en una fuente normativa en la que se demuestre que, *sin prescindirse su contenido, armoniza las otras garantías humanas en juego, y permiten superar la Presunción de Inocencia o el Indubio Pro reo cuyas fuentes normativas operan a favor de mi presentado.*



COLEGIO
NAL DEL
CUITO
USCO.

Lo que no pugna que se desconozca la serie de prerrogativas humanas asociadas a las mujeres en el marco de una vida libre de violencia y sin discriminación, sino por el contrario, garantiza que los fallos adoptados surtan sus efectos con base en elementos patentes que de su contenido, en forma sostenible y veraz, justifiquen la gama de derechos humanos que sobre el particular se ven actualizados, a fin de que, las obligaciones supra nacionales, como las que surgen en el marco nacional de éstas, y que fueron invocadas en el contexto del artículo 6° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que disponen los tipos de violencia contra la mujer, *sean identificados, comprobados y sancionados, ahora sí, ameritando el rigor legal implícito que converge dentro de toda esa sinergia normativa que aquí se dispone, pero no pretendiendo justificar lo que no fue en este caso acreditado con base en la carga de la prueba acusadora*, colocando a quien hoy represento en una posición vulnerable por permitirse que se actúe en ejercicio del poder punitivo y sancionador del Estado, pese a no haberse demostrado fehacientemente los motivos para ello.

Cobra aplicación al caso concreto:

«Registro digital: 2018965

Aislada

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Pleno

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 62, Enero de 2019 Tomo I

Tesis: P. VII/2018 (10a.)

Página: 473

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculcados cuando durante el proceso no se hayan aportado

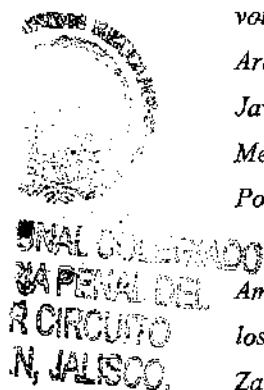
PRIMER TRIMESTRE
EN MATERIA
TERCER
ZAPOPA

182

pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.

Amparo directo 61/2014. Alejandro Garniño Tejeda y otro. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo 14/2015. Juan Manuel García Chávez. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.



Amparo directo 15/2015. Ángel Muñoz Rico. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo 16/2015. Sergio Figueroa Hernández. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, aprobó, con el número VII/2018 (10a.), la tesis aislada que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación.»

Y lo anterior se manifiesta de esa manera, pues no se desconoce que, si bien es cierto se pretendió configurar la violencia que fue denunciada por la hoy quejosa, a través de que en el caudal constan la pericial en materia de psicología, sobre la base de que la testificación de la supuesta víctima es la prueba fundamental, sus alcances demostrativos, como se vio en la serie

PRIMER TRIO
EN WATER
TERCER
ZAPORAN

de comparecencias, no fueron precisos, concluyentes ni eficacias, pues no arribaron a la conjetura de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, siendo que pese a que la misma manifestó una serie de actos de violencia sistemática en su persona, el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia que preciso el Órgano Colegiado por conducto de los alcances interpretativos que efectúo para tales casos la Primera Sala de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no precisa que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, si bien es un derecho humano fundamental, *supla la deficiente investigación y desde luego integración de elementos probatorios que con base en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponden al Agente del Ministerio Público;* pues como ya se dijo, los principios procesales reconocidos en el marco del artículo 20 de la Norma Fundamental Supra indicada, permiten colegir que éstos *-fracción I-* tienen por objeto *el esclarecimiento de los hechos*, proteger al inocente, así como procurar que *el culpable no quede impune*; empero en este último caso, considerando que, en primer lugar, *-fracción V- la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal; y en donde las partes deben tener la igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa;* para finalmente, decidir como aquí se ha dicho sobre la responsabilidad penal plena, pero entizando en que, *-fracción VIII- el Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado.*

AL COLEGIADO
JALISCO
CIRCUITO
JALISCO

De ahí que la calidad de víctima del delito, debe estar sujeta a una comprobación más rigurosa, a efectos de que no se victimice a quien se encuentra como parte acusada dentro de la construcción penal de los hechos. Pues, la revictimización de la ofendida, no es pasar por alto el deber de investigar el delito de que se trate, sino que ellos se surten, de acuerdo a los conceptos establecidos en el artículo 5º de la Ley General de Víctimas, en el hecho de que se tomen las características y condiciones particulares de la víctima para que éstas no sean el motivo que les niegue dicha calidad, o se exijan mayores mecanismos o procedimientos que agraven su condición, o establezcan requisitos que obstaculicen o impidan el ejercicio de sus derechos o la expongan a sufrir un nuevo daño o conducta de los servidores públicos, cuyos deberes no trastocan el que se participe de una contienda judicial en el que se respeten los derechos procesales que como parte se le reconocen, y en donde si bien el Agente Ministerial tiene la obligación de comprobar la comprobación del delito de que se trate, se le permite incluso, coadyuvar a la Representación Social, y por ende, a que de igual forma se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, así como a que se le desahogue las diligencias correspondientes e intervenir en el juicio o interponer inclusive los recursos ordinarios.

Bajo esas proposiciones se estima que, las conjeturas adoptadas por el Órgano Colegiado para en su caso, pretender justificar un marco normativo que tutela los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, si bien se trata de un marco normativo válido, no menos cierto lo es que su adecuación, por los motivos aducidos, no quedo comprobada, y por ese mismo efecto, el otorgamiento del amparo y protección de la justicia federal para el caso de que se reconozca la existencia del hecho criminal, la plena responsabilidad y la condena a mi representado, hoy tercero interesado, a través de los

PRIMER TRIM
EN MATERIA
TERCER
ZAPORAN

184

qu
la
o c
de
PENAL D
CIRCUITO
JALISCO

37 | P á g i n a



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA PE
TERCER CIR
ZAPOPAN, JA

185

50547f82236bfe5b02313dd03a4173d34b31b255d720cfd585431fe16373e770

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conlleva garantizar que el acceso a éstos mecanismos judiciales, no sea un tema de preferencias, sino de objetividad y desde luego una justa razonabilidad de las decisiones que sean completas, congruentes, imparciales y expeditas, lo que debe partir de un ejercicio de apreciación no preferencias, sino por el otro lado, sistemático, funcional y orientado a la convergencia de los hechos acaecidos, de sus aspectos accidentales y esenciales, sin que ello permita que se trastoquen otros derechos como **la carga de la prueba, la Presunción de Inocencia y el Indubio Pro Reo**, que también son parte de ese mecanismo humano que garantiza el acceso a la justicia; pues pese a que las mujeres, aunque en este caso se concrete la Autoridad recurrida a aquellas que sufren de violencia sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer ese derecho, ello no amerita que se dé un alcance y valor sobredimensionado a sus dichos, pues estos parten de un conflicto penal que está sujeto a prueba; y los sesgos de desigualdad, lejos de lo que, pretende participar, no son hipótesis comprobadas sino por comprobar, mismas que, como ya se dijo, se encuentran justificadas en acciones afirmativas que permitan durante el desarrollo del proceso, en las decisiones que se adopten al resolver cualquier incidencia que se presente, así como al momento de resolver aspectos relacionados al mismo o en definitiva aquellas apreciaciones orientadas a garantizar ese derecho, pero respetando sus límites y alcances, y no pretender que esto sea una base o guía para justificar la idoneidad de medios de prueba inoperantes o la falta, nula o deficiente integración ministerial en perjuicio de mi representado.

COLEGIADO
NAL DEL
JUTO
ISCO.

SEGUNDO.- La sentencia recurrida trastoca el deber de protección de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto como ya se dijo en el agravio que antecede, el ejercicio de protección que se distribuye a las Autoridades Mexicanas del País, al momento de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, **se debe efectuar desde un contexto de igualdad y no discriminación originada por sexo**, en el que se sancione toda intromisión que en forma desproporcionada atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En ese sentido, se considera que la apreciación sesgada que se efectúa sobre todos los alcances normativos que confluyen a la protección de los derechos humanos, se efectúa en forma desigual, teniendo como parámetro de validez o legitimidad para ello, el que la quejosa en la apreciación de los hechos criminales del delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, sea mujer, y **no necesariamente que la misma se coloque dentro de los supuestos que al efecto establecen en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer**, pues sobre la base de sus manifestaciones aisladas, se da por sentada una acusación, y la veracidad de circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión para constituir la materialidad del hecho delictivo, pese a que el acceso a la justicia y desde luego la protección a los derechos humanos asisten tanto a hombres como a mujeres.

Bajo ese contexto, es que no se pasa por desapercibido, que el desarrollo de criterios efectuados por el Juzgador, parte en forma parcial en beneficio de la que fuera pareja de mi representado; pues si bien hay un desarrollo normativo, este se efectúa desde la perspectiva



ENTER TRIP
ENROUTE
TERCE
ZAPORI

particular que subyace únicamente a los derechos de la denunciante, cuando contrario a ello, los derechos humanos no tienen un destinatario determinado; y esto que se precisa, se hace ver en torno a que el los Integrantes del Colegiado, efectúan una apreciación normativa que como se dijo, se vislumbra del sentido y alcances normativos dispuestos en la Convención «Belém Do Pará», misma que destaca en un sentido sistemático y funcional con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; empero, ese derecho último, no es parte de una esfera humana definida, sino que se aplica por igual a todos los casos en que se amerite garantizar que las personas tengan derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos humanos fundamentales; pues como ya se anticipó, su exégesis, debe de igual forma comprender la prerrogativa humana consagrada en el texto del artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone en el particular, que **toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo para ese efecto, resoluciones de manera pronta, completa, pero sobre todo imparcial.**



TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO
JALISCO

Por eso, si estas garantías, a su vez, se refuerzan en el hecho de que, en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley *exactamente aplicable al delito de que se trata; lo que comprende sus formas de comprobación*; es inconcuso que una condena que parte aisladamente de una acusación, y a la cual se le refuerza su contenido, *pese a tener un valor indiciario*, mismo que, no pierde su relevancia, *pero si se define de sus aspectos de modo, tiempo y lugar para lograr, concatenado con otros elementos de prueba, aquellos elementos que tiendan a comprobar la existencia material y jurídica de los hechos acaecidos*, sin lugar a dudas, atenta contra la esfera humana de acceso a la justicia, pues ésta no es propia de un género en específico, sino que aplica a cada caso concreto, y pese a que en el particular, quien instó la vía judicial de amparo, sea la víctima del delito, ello de ninguna manera, amerita que el arbitrio judicial comprenda sólo un apartado de todo el espectro legal que se encuentra en juego, pues finalmente la decisión que este emita, debe ser conforme a los hechos y a la interpretación jurídica de la ley, bajo ese deber inexcusable sujeto a uno de los principios más trascendentales de toda autoridad y que tiene por objeto anular cualquier acto arbitrario en perjuicio de las personas, como lo es el de seguridad jurídica, sobre el cual subyacen los deberes manifiestos de fundar y motivar sus determinaciones, de manera que sólo aquello que demuestre estar debida y suficientemente fundado y motivado, pueda, para efectos vinculantes de las sentencias, decidir sobre los derechos de las personas. Pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es enfático en que el sólo hecho de ser autoridad, no reviste la consecuencia de que los actos se consideren como de naturaleza legítima, pues se ha demostrado, y es parte de que existen medios de defensa como el que corresponde, que muchas veces, éstos límites normativos se superar hacia líneas que no son reconocidas de un marco de validez.

Cobra aplicación al caso concreto que nos ocupa:

OFFICER IN CHARGE
ENLARGED
TERCE
7AP00A

«Registro digital: 2017423

Jurisprudencia

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 56, Julio de 2018 Tomo I

Tesis: 1a./J. 44/2018 (10a.)

Página: 171

DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO.

Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas "acciones afirmativas"; y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto—para confirmar la rigurosa necesidad de la medida—o uno ordinario—para confirmar su instrumentalidad—. En ese sentido, el primer análisis debe realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se estiman incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas, en realidad conllevan diferencias de trato que, más allá de no ser análogas, en realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse de discriminación, al no existir un tratamiento diferenciado.

Amparo directo en revisión 83/2015. Fernando Cruz Mercado. 6 de abril de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.

Amparo directo en revisión 2663/2017. Apolinar Fídel Hernández. 23 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.



ESTADO DE JALISCO
CIRCUITO



PRIMER TRIMESTRE
EN MATERIA
TERCER
ZAPOPA

Amparo directo en revisión 2750/2017. Agapita Mendoza Martínez. 13 de septiembre de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente y Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su ausencia hizo suryo el asunto Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Hugo Alberto Macías Berud.

Amparo directo en revisión 1358/2017. Catarina Mendoza Martínez. 18 de octubre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular relacionado con la legitimación del recurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.

Amparo directo en revisión 4408/2017. Martina Mendoza. 18 de octubre de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Brenda Solano Montesinos.

Tesis de jurisprudencia 44/2018 (10A.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de julio de dos mil dieciocho.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 01 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.»

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FOLIO 400
FOLIO DE
PROUTO
JALISCO.

Y se afirma lo anterior, porque se considera extralimitado que, se consignent como hechos comprobados, todas aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar que fueron en el particular externadas por la denunciante [REDACTED] es decir, que baste que exista su afirmación en ese sentido, para que surta la actualización del delito reprochado. Y es que, como se dijo, el deber de aplicar derecho, en este caso, de acuerdo al paradigma de derechos humanos, de acuerdo a la convergencia de los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se agota cuando se atiende a una parte del catálogo de los derechos humanos reconocidos en ese marco normativo instrumental o en su defecto, en aquellos contenidos en ciertos tratados internacionales; sino que para que el mismo sea válido, y cumpla su función protectora dentro del sistema judicial en el cual se pretenda aplicar, es necesario que aborde todos los derechos en conflicto, y así mismo, que aquellas apreciaciones que partan de una norma fundamental generalizada, como el caso del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aborde desde una similar eficacia, los derechos que asisten a mi representado. Porque éste, se encuentra en una categoría especial, ya que parte como posible autor de un hecho criminal, y ésta calidad no puede darse por hecho, sino que también amerita un marco espectral normativo que justifique que el mismo es en verdad quien cometió los hechos que se le reprochan, aún y cuando se comprobare el tipo penal, pues no necesariamente este engendra la presunción legal, lógica y humana de que los cometió.



PRIMER TRIENAL
EN MATERIA DE
TERCER CÍF
POPAN, J.

Por eso, se estima que carece de la parcialidad que como medida moderadora, se establece como parámetro de garantía en el actuar de la autoridad, a fin de que no exista otra presunción que no se justifique de los hechos, de las pruebas y de las leyes aplicables; pero que también, al mismo tiempo, su apreciación sea justificada, razonada sobre bases objetivas y no sobre afirmaciones dogmáticas, engendrando bajo la premisa de una descripción de normas fundamentales que permiten el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, valores totalmente extralimitados y desmedidos que, como en el presente, parte sobre la esfera jurídica de que quien comparece es una mujer que denuncia hechos violentos en su persona; pues se insiste, aplicar ese estándar protección, no conlleva conceder valores que no reconocen las normas aplicables; esto es, dotar de validez una acusación, pese a que la misma no está reforzada con otros elementos de convicción, ser naturalmente contradictoria, confusa y sin detallar circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan una apreciación objetiva.

Pues el hecho de que la mujer tenga derecho a una vida libre de violencia, no engendra que el hombre no tenga derecho de igual forma a un juicio justo, así como en su caso al respeto de las garantías judiciales que para el debido proceso se establecen en todo caso en su beneficio, pues este parte en las condiciones apuntadas, de la desventaja de ser la persona a la que se le acusa de un delito, y más grave aún, de que su género humano, ahora también le acarrea una disminución de derechos, pues se insiste, *la categoría de mujer que es violentada, como todo hecho, debe ser probado*, y los indicios por regla general, no pueden *colegirse desde un mismo punto de vista*, pues quien asegura que las circunstancias nada concluyentes e imprecisas de la denunciante, sean la realidad que acontece realmente de los hechos, pues más allá de que como ya se dijo, pueda darse el caso en que la violencia en su contra se llegue a cometer en ausencia de testigos, la hipótesis a estudio hace presumir que con base a lo por esta narrado, estuvieron presentes [REDACTED]

[REDACTED] así como [REDACTED] y [REDACTED] incluso se insiste en que ésta refirió que los menores concebidos dentro de la relación sentimental y matrimonial; [REDACTED] y [REDACTED] fueron parte de esa violencia sistemática que a su decir se perpetuó a lo largo de los años, e hizo del conocimiento que para el caso de lo anterior, las maestras de sus hijas [REDACTED] le habían comentado que su hija se comportaba de forma verbalmente agresiva con sus compañeros, y que incluso le llegó a comunicar que no obedecía indicaciones, e incluso que le mencionaba que su padre, el hoy tercero interesado recurrente a quien representa esta parte, bebía cerveza y manejaba tomado; así como el hecho de que la psicóloga de la guardería [REDACTED] ubicado en [REDACTED] de la colonia [REDACTED] los había citado tanto a ella como a su esposo, para hacerles del conocimiento que su hija estaba manifestando conductas y agresiones a sus compañeros, porque su papá tomaba, se emborrachaba y manejaba tomado a todas partes, misma que por los mismos hechos supuestamente acaecidos solicitó se citara a declarar a sus maestras; esto es, [REDACTED] psicóloga del CDI #2 de [REDACTED] así como a la Licenciada [REDACTED] a efectos de se demostrara la afectación psicológica que denunciaba habían sufrido de igual forma sus menores hijos e hijas.



PRIMER TIRAJE
EN MATERIA
TERCER
TIRAJE

190

Por eso, bajo esa óptica, es que se considera que había elementos de convicción que en su caso debieron ser constatados, previo a la emisión de una condena, y no referirse a unos que por sí mismos no son concluyentes para justificar la acción penal que hoy se pretende, aún bajo el amparo desmedido, por no actualizarse su contenido, de la Convención «Belém do Pará», pues se insiste, los deberes colegidos en el artículo 7° de su cuerpo normativo con los que se pretende justificar su intervención, conlleva el deber de agotar aquellos elementos probatorios señalados, a efectos de actuar con la debida diligencia en la prevención y sanción de la violencia **que se llegue a acreditar en contra de la mujer; pues su sola condición no implica que pueda la carga de la prueba**, misma que como ya se dijo, es responsabilidad del Agente del Ministerio Público, y no se puede reprochar su falta de aptitud profesional a la parte que represento, pues a esta no le asiste el deber de acreditar la materialidad del evento delictivo que se le reprocha, sino que ésta es parte de las obligación que conforme a ese estándar normativo supranacional mencionado se le delegan a efectos de que aprecie en forma razonada, los elementos externos que configuren la hipótesis criminal, y no sustituirse las deficiencias en los elementos de prueba, a fin de justificar la constatación de los hechos criminales y la condena o responsabilidad penal.

Porque las reglas que al efecto se pretenden aplicar, encuentra su etiología en casos en que la violencia que se comete contra la mujer, **se genera con base en agresiones de carácter sexual**, por cuanto las reglas que en el particular se pretenden, no encuadran ni siquiera encuentran justificación, para pretender generar convicción donde no la hay. Pues se cae en el absurdo de que baste una acusación de una mujer en contra de un hombre, para que su dicho, con valor preponderante, sin justificarse de otros elementos de prueba, generen una condena, eliminando las garantías que se consagran en un juicio mixto inquisitivo, en el que operan reglas específicas tanto para la procuración como para la administración de justicia, pues se insiste, **la calidad de mujer violentada, sólo se justifica en la medida en que los medios probatorios desprendan, del engarce lógico, jurídico y natural de los hechos, que la misma forma parte de ese grupo humano violentado, pero no si esta es imprecisa, y no detalla circunstancias que permitan justificar una coherencia temporal y espacial, pues se genera que la parte que represento se encuentre en total estado de indefensión, cuando no tiene realmente circunstancias plenas que rebatir, si tampoco cuenda con la certeza del modo, el lugar y el tiempo en que se cometieron.**

Máxime que el Colegiado, nunca justificó que el arbitrio judicial adoptado por la Sala y el Juez Penal de origen, más allá que, de la primera mencionada señalada, refiriera que si bien reconoció los derechos a juzgar con perspectiva de género, nunca los concretizó, y es que no escapa que precisara el que, de acuerdo al artículo 2° del «Pacto de San José Costa Rica» y los artículos 7.e y 7.f de la Convención «Belén Do Pará», con el objeto de remover las barreras de acceso a la justicia de las mujeres **víctimas de violencia sexual**, ameritaban el trato especial de reglas con el objeto de evitar **afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas**, pero en el particular ello no aconteció, y eso no fue demostrado por el Órgano Colegiado, ya que la única justificación que sustento la absolución y confirmación por las que en su momento fueron señaladas como Autoridades responsables, fue el hecho de que, como aquí se refiere, **había**

EMER 1
ENM
TE
ZAF

141

ausencia de pruebas, y las propias y particulares de la ofendida eran imprecisas, inconsistentes y no detallaban las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sin que se apreciara un lenguaje desmedido, abusivo o estereotipado para tal efecto, sino más bien la aplicación que aquí fue descontextualizada de un marco normativo en forma imparcial en forma razonable y justificada.

Y ello, es que, contrario a lo que afirma, aún y cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al adoptar la recomendación general 33, instó a los Estados: esto se hizo con el fin de atender las normas sobre pruebas y su aplicación, cuando *surjan de la violencia contra la mujer*, en las que recomendó adoptar medidas, que tuvieran en cuenta los derechos de las víctimas y los defensores en los procedimientos penales para asegurar que no se restringieran excesivamente los requisitos probatorios y que los mismos no fueran excesivamente inflexibles o estuvieran influenciados por estereotipos de género; empero, se insiste, a pesar de que dicho desarrollo lo procuró en los casos de *violencia sexual*, mismos que generalmente acontecen en escenarios ocultos, y que por ese motivo origina complicaciones para que la víctima pueda acreditar sus dichos con testigos, y en donde por ese hecho el testimonio de la víctima suele constituir la prueba más relevante en la acusación formulada contra la persona imputada; *empero*, en el particular, lo que se sigue es el delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, en donde se insiste, había exceso de testigos y circunstancias que en su caso, hubieren podido darle validez al desarrollo de los hechos que de manera sesgada fueron pronunciados por la hoy quejosa [REDACTED] pues el hecho de que todos los partícipes del escenario no fueron citados a declarar, no fueren citados a declarar con la consecuencia que ello genera, no quiere decir que ese hecho pueda de alguna manera ser imputable a la parte que represento, pues esta ya se dijo es exclusiva de la parte acusadora.

En la misma tesitura, no es que las denuncias formuladas por la que se dijo víctima, [REDACTED] no tuvieron relevancia o se hubiere sido inflexible en su contenido, sino que en todo momento, se le dio la validez necesaria, pues como consta de esta instancia, se inició la investigación, se desarrolló la etapa judicial, y se concluyó con un fallo dictaminador de Segundo Grado, lo que sí es inflexible, es que sólo con sus dichos, teniendo en cuenta que existe un deber de comprobación de los hechos, hoy, por la calidad de varón de mi representado, y la calidad de mujer de la que denuncia, se esté otorgando valores que no tienen los alcances probatorios que se pretenden, pues no se debe confundir el ser inflexibles cuando la materia de la prueba no desprende los datos que la ley existe para la comprobación del delito, incluso, para justificar la calidad de víctima del delito de violencia que ahora por conducto del Órgano Colegiado se pretende para otorgar el amparo y protección de la justicia federal, pues el hecho de que exista un aparato especial de protección para éstas, no conlleva perse que se puedan nulificar otras garantías judiciales en juego, y otorgar privilegios o mayores prerrogativas por formar parte de un sexo, sobre todo cuando se decide en definitiva, ya que se insiste, la valoración que al efecto se dio por las que se dijo Responsables, contrario a lo razonado más no materializado por el los Integrantes del Colegiado recurrido, se hicieron con la mayor imparcialidad y objetividad posible, teniendo en cuenta el deber de probar, y la

SEVENTH
BRIGADE
TERRI
ZAPOR

192

presunción de la inocencia que le asistiría en todo caso a mi representado, dentro de un orden constitucional y convencional, pues nunca se advirtió, e incluso no lo manifestó por ese lado la Autoridad recurrida, el que los argumentos de su análisis estuvieren influenciados por algún estereotipo de género, mucho menos que la valoración que absolvió a mi cliente fuere otorgada sobre la base de dichos argumentos.

Por eso, aunque exista una mecánica normativa especial, en beneficio de la mujer, antes existe una que propicia la igualdad de trato entre éstos, por lo que la exteriorización de una acusación sin justificación probatoria válida y ante la insipiente de ésta, *por el hecho de que mi representado sea varón y quien denuncia sea mujer*, trastoca el orden elemental que se circunscribe a la esfera humana que se consagra en el artículo 1º Constitucional, pues en la forma y términos que se pretende, la actuación de la Autoridad resulta desmedida, pues por lo que comprende al género, *este no se justifica sólo en beneficio de la mujer, sino en cuanto al género humano y sus diversidades*, por lo que era su deber, abordar un criterio rector del orden nacional y supranacional en sentido amplio y no escrito en forma exclusiva a la mujer, ponderando una valoración que se tradujera en un fallo justo, representativo del nuevo orden o paradigma de derechos humanos.

Cobra aplicación por analogía:

UNAL COLEGIADO
RIAPENAL DEL
R CIRCUITO
AN, JALISCO.

Registro digital: 2014099

Jurisprudencia

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 41, Abril de 2017 Tomo I

Tesis: 1a./J. 30/2017 (10a.)

Página: 789

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el



PRIMER TRI
EN MATE
TERC

193

marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Amparo en revisión 796/2011. Martín Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.

Amparo en revisión 559/2012. Óscar Daniel Arael Hernández Castañeda. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Armado Argüelles Paz y Puente.

Amparo directo en revisión 1697/2013. 21 de agosto de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.



TRIBUNAL COLEGIADO
DE LA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO
DE JALISCO.

Amparo en revisión 569/2013. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz.

Amparo directo en revisión 652/2015. Israel González Peña. 11 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Tesis de jurisprudencia 30/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de abril de 2017 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de abril de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.»

Contexto anterior en el que se afirma que existió discriminación por género, pues pese a suplir deficiencias formales y de fondo que dejan en complicaciones defensivas y en un



ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS
ZAPOTLAN

194

notorio desequilibrio a la parte que represento, al soslayar impresiones de las denuncias que en su momento efectuó la denunciante [REDACTED] y sobre todo, concluir con base a éstas una acusación penal condenatoria, mismas que justificó en una mecánica que, como se verá en otro agravio, además de que incumplió, se justifica en los casos de delito de *abuso sexual*; y con lo cual estudió su declaración, en conjunto con otros elementos de convicción, estableciendo ésta como la prueba fundamental; pues si bien se comparte que la conjuco con el acta de matrimonio y la pericial en psicología; estos elementos no resultaban aptos y suficientes para acreditar la materialidad del delito, y menos para justificar una sanción penal plena; en principio porque ello no se puede lograr bajo la consigna de otorgar por el sólo hecho de ser mujer, la calidad de víctima de un delito; sino que esto parte de los alcances normativos que ésta desprenda; y en el caso de la testimonial, quedó en claro que la misma presentó sendas inconsistencias al no presentar claramente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y mucho menos verse robustecidas por las atestes que comparecieron a la causa penal; esto es, porque de ninguna manera, se podría justificar el parámetro rector utilizado por la Autoridad recurrida, en tanto que, los hechos que se mencionaron, pese a que iniciaron a los seis años de comenzar la relación, misma que refirió iniciaron desde el 01 uno del mes de 11 noviembre del 2007 dos mil siete, sólo fue concreta en dos eventos; esto es, aquellos referidos el referido 18 dieciocho de abril del 2014 dos mil catorce, a las 8:00 ocho horas de la tarde, y los segundos una semana antes, el mismo mes de abril, pero el día 12 doce también de dicha anualidad, pero a las 19:00 diecinueve, así como un tercero el 11 once de marzo del 2015 dos mil quince, pero a las 04:30 cuatro horas con treinta minutos.

Empero, ninguno de los hechos acaecidos se encontraron corroborados, excepto los que refirió como consumados el día 18 dieciocho de abril del 2014 dos mil catorce, de los que únicamente compareció la ateste [REDACTED] ya que la por ella referida [REDACTED] nunca compareció a actuaciones; y respecto los otros denunciados; estos nunca encontraron sustento más que el indiciario referido por [REDACTED] por lo que las otras circunstancias de modo, tiempo y lugar que preciso, nunca se encontraron robustecidas con otros elementos de convicción, sino que, además, como ya se dijo, sus manifestaciones quedaron comprometidas a la corroboración de citar a [REDACTED] así como [REDACTED] y [REDACTED] incluso a los menores concebidos dentro de la relación sentimental y matrimonial, [REDACTED] y [REDACTED] o a los docentes o psicólogos de sus respectivos centro educativos; *lo que en realidad fue el parámetro legal utilizado por la Sala Ordinario para restarles valor probatorio.*

Sin embargo, pese a lo anterior, la Sala pretendió, con base en la sinergia normativa convencional del «Belén do Pará», a efectos de justificar alcances normativos que pudieran soportar una condena, atender a las manifestaciones vertidas pese a las contradicciones y su notoria falta de corroboración; pues al margen de que justificara el entroncamiento, como ya se había dicho, el deber de acreditar los hechos criminales, forma parte de una coherencia en la que cada parte está obligada a demostrar lo que beneficie a su esfera jurídica; siendo en el caso del Ministerio Público el deber de acreditar los elementos corpóreos que justifiquen el



TRIBUNAL
MATERIAPE
PER CIR
N. JA

195

tipo penal y además la probable responsabilidad, de los cuales debió partir el arbitrio judicial no sólo para advertir la materialidad de los hechos denunciados, *sino también para justificar que la quejosa [REDACTED] se encontrare en los supuestos contenidos dentro de la citada convención.*

Lo anterior se afirma porque no obstante que del contenido de autos se dispusiera de la prueba pericial emitida mediante oficio IJFC02186/2015/12CE/PS/16 que fuera suscrito por la experta en el área de psicología, Licenciada [REDACTED] en la que se determinó que la quejosa [REDACTED] presentaba afectación psicológica y emocional compatible con la sintomatología característica en personas que han sufrido de violencia en su entorno familiar, como parte de la dinámica disfuncional en su vínculo de pareja con su esposo; pues pese a la dinámica metodológica por la en uso de su expertis determinó constatar el daño moral y psicológico "por los hechos cometidos en su agravio", la dinámica de los hechos denunciados, aún con las deficiencias formales para su emisión en la que se plasmaran con notoria claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar, si fueron abordados por la Sala responsable desde una óptica objetiva, en la que de igual forma determinó que los insultos no correspondían a descripción física de la quejosa; esto es, que *tenía un aspecto diferente al que supuestamente se ventilaba en la denuncia de hechos, por lo que era poco probable que el denunciado [REDACTED] le hubiere proferido ese tipo de agresiones verbales*; además la Sala fue contundente en precisar que la denunciante no había tomado medidas definitivas contra la que se dijo era violencia en su contra, hasta que presentó denuncia a finales del 2014 dos mil catorce, fecha en la que compareció a denunciar los hechos relatados el 18 dieciocho de abril del 2014 dos mil catorce, y que su marido ya había abandonado el domicilio conyugal, siendo además advertido que manifestó que su marido ya había abandonado el domicilio conyugal; esto es, que el denunciado entonces contrario a lo que había afirmado en denuncia no se había ido un año antes sino a menos de un año.

Lo mismo aconteció cuando destacó datos que difícilmente se pueden olvidar como lo es la complicación del embarazo en la gestión de sus hijos, efectuadas en sus narrativas de hechos, empero que, al hacer lo propio ante la psicóloga referida, señaló lo contrario; esto es, que no hubo complicaciones, pese a que como bien lo refirió la sala, ya había señalado en su relato de marras, que el embarazo de [REDACTED] había sido de alto riesgo, *divergencias, aunado a la falta de corroboración de otras probanzas, incluso tomando en cuenta las falta de precisión en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que fueron el artífice de que su dicho fuere desacreditado, y que al mismo tiempo, tampoco justifica que el Órgano Colegiado recurrido, los hubiere utilizado en la forma y términos precisados, pues nunca se refirió a lo dispuesto por la Sala, sino que, dejando de lado todas esas divergencias, esbozó una serie de razonamientos generalizados por los cuales, excediendo los alcances de establecido en el marco de la Convención «Belém do Pará», justificó sus acusaciones sobre la base de que, la denunciante era mujer*, lo que genera que en este momento se cause afectación a la esfera jurídica de mi representado, porque el estándar de prueba para la presunción de inocencia, debe partir de un marco objetivo y razonable, *tanto*



THE
STATE
OF
NEW YORK

196

para determinar los hechos, como para el caso de hacer valer toda valoración normativa y desde luego justificar los actos de autoridad, en cuyo caso se considera que el fallo protector es desigual, pues deja de lado lo que fue plasmado en agravios anteriores, esto es, que en la definición de los derechos de este trámite penal, no sólo se trata de los derechos de quien denuncia, sino además de la tutela efectiva de quien los recibe, quien también tiene el derecho de acceder a la justicia, en tanto que **no puede ser de ninguna manera responsable hasta que se demuestre lo contrario.**

Máxime que los estándares utilizados por la Autoridad recurrida, se generaron sobre la base del criterio jurisprudencial bajo el rubro y texto:

«Registro digital: 2015634

Aislada

Materias(s): Constitucional, Penal

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 48, Noviembre de 2017 Tomo I

Tesis: 1a. CLXXXIV/2017 (10a.)

Página: 460

SE
PENAL DEL
CIRCUITO
JALISCO.

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos *Fernández Ortega y Rosendo Cantú* y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que



PRIMER TRIBUN
EN MATERIA
TERCER C
APOCAN,

197

el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, exámenes médicos, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.

Amparo directo en revisión 3186/2016. Marco César Zaldívar Hernández. 1 de marzo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández, quienes votaron en contra al considerar que el recurso era improcedente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Ana Marcela ZatarainBarrett.

Nota: La tesis aislada P. XXIII/2015 (10a.), aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo 1, septiembre de 2015, página 238.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.»

COLEGIADO
NAL DEL
UITO
SCO

Empero los elementos que enmarca se refieren a delitos de **violencia sexual**, y que para tal efecto, pese a que se diseminan en elementos, éstos no fueron abordados ni aplicados al caso concreto, generando la presunción de que el arbitrio aquí utilizado fue sólo **sobre la base discriminatoria que generó desigualdad**, al establecer que mi defendido era acusado por una mujer que denunciaba violencia intrafamiliar.

Se afirma lo anterior, ya que los elementos constituidos conforme al criterio invocado señalan que la regla de la valoración con perspectiva de género tiene que contener:

«a) Se debe considerar que los delitos sexuales con un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Así mismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente.

b) Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de **violencia sexual**. En razón de ello se debe atender que no debe ser inusual que el recuento de los hechos pueda presentar **algunas inconsistencias o variaciones** en cada oportunidad que se solicita realizarlo. Por lo tanto, dichas variaciones no podrán constituir fundamento alguno para restarle valor probatorio a la declaración de la víctima.



PRIMER TRIBUNAL (
 EN MATERIA PEI
 TERCER CIRC
 TAPAPAN, JAL

c) *Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros.*

d) *Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental.*

Entre esos elementos se pueden encontrar dictámenes médicos, psiquiátricos, testimonios, exámenes médicos, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y,

e) *Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.»*

Empero, nunca justificó que el delito que se tratase fuere de violencia sexual; por lo que no es dable considerar que no existan otras pruebas que deban comprobar los hechos, como en este caso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dijo se cometieron los distintos actos de *violencia intrafamiliar*. Luego, también se destacó que las denuncias y ampliaciones no fueron corroboradas con diverso material probatorio que generara convicción, siendo además, disidentes entre sí, así como insuficientes por la falta de corroboración con la diversidad de testigos que se dijo participaron de su concierto, además de que los que sí declararon, como en el caso de [REDACTED] esta nunca participó las mismas circunstancias que fueron narrados por la denunciante, siendo imprecisa no sólo con ésta, sino además con los hechos que le fueron transferidos por la quejosa a la experta en psicología, por lo que en el segundo de los supuestos o elementos, fue el motivo para determinar que tal determinación no revestía eficacia demostrativa, pues no se trata de *algunas inconsistencias o variaciones, sino de un cúmulo de relatos desiguales, contrarios y desajustados de la realidad fáctica que se pretendió comprobar y de la que carecieron elementos convincentes de prueba*. Siendo injustificable que nunca tomó en consideración, pese a ser otro de los elementos invocados, aquellos aspectos subjetivos relacionados a la víctima, como su edad, condición social, así como su pertenencia a un grupo vulnerable o que históricamente ha sido discriminado constituirse en condiciones que, de manera objetiva y razonable pudieran apreciar un panorama personal o incluso más subjetivo de su vida e intimidad de la quejosa.

Por ello, el deber de protección tutelar, se considera fue partícipe de una real y manifiesta *desigualdad y discriminación por sexo*, pues se desatendieron aquellos elementos que le restaron validez a su relato por la Sala responsable, y que no sólo partieron de la falta de comprobación derivada de la notable ausencia de testigos que justificaran aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar, sino que también se hicieron destacar, en todas aquellas circunstancias que generaron duda, por lo que su descalificación se hizo con base en el principio constitucional *Indubio Pro Reo*, por



DER TRIBUN/
EN MATERIA
TERCER C
CORAN.

199

eso, no es dable considerar que, contrario a ello y ante la deficiencia de elementos que justificaran sus asertos, se pretenda justificar una responsabilidad criminal, pues los elementos probatorios con los cuales se pretendió comprobar su actualización, no fueron contundentes, concluyentes ni prudentes, siendo ante dicha situación, en un orden jurídico elemental de derechos, que *sin atender a la circunstancia del sexo se hubiere emitido un fallo que tuviere coherencia con los que hasta el momento se había decidido por la Sala responsable y el Juez; ambos del orden ordinario.*

TERCERO.- Finalmente, se reitera que, por cada uno de los motivos aducidos y las consideraciones vertidas, considerando las violaciones que parten del desconocimiento de los derechos humanos que convergen no sólo a un sexo, sino a una dimensión más amplia, es que se considera oportuno solicitar a efectos de garantizar la protección de los derechos humanos, y el acceso a la justicia de mi representado, a fin de que se restituya el orden constitucional y convencional que fue relegado por falta de imparcialidad y preferencia, cumpliendo así con las obligaciones colegidas dentro del marco de derecho internacionales asociado al cúmulo de prerrogativas evocadas en cada uno de mi escrito de agravios *-Indubio Pro Reo y Presunción de Inocencia, así como a las garantías judiciales de igualdad entre las partes y ante la ley entre otros-*, se sirva atender este relato de disyuntivas señaladas, incluso, atendiendo de ser el caso otros derechos humanos en juego; puesto que, además de que subsiste el deber de suplir la deficiencia de los agravios que en su caso se llegue a presentar en materia de amparo; esto es, bajo la óptica dispuesta en el artículo 79, fracción II, inciso a), que parte ahora de la condena que ordena el Órgano Colegiado recurrido, subsiste el otro deber, que de igual forma complementa la protección que hoy se solicita; esto es, aquél que subyace a los derechos humanos reconocidos en el marco de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a través de los cuales se distribuyen competencias tendientes a dignificar la esfera humana y cualquier abuso que se presente contra su esfera.

Por eso, se insiste, es procedente que en su caso, se supla la deficiencia que en su caso advierta de los conceptos de estos agravios; pues ya se ha dicho, de acuerdo al precepto 1º de la norma suprema indicada, existe una clara obligación de acuerdo al principio de supremacía legal, para que toda las Autoridades, y más aún aquellas que ejercer el control concentrado, procedan de forma constitucional y convencional a examinar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se adviertan de los actos reclamados; pues toda restricción injustificada a los mismos, es sin lugar a dudas una restricción que atenta contra la progresividad y gradualidad que hoy en día se ve reflejada dentro del denominado **Bloque de Constitucionalidad**, pues estos conllevan hoy más que nunca, el que los mecanismos judiciales especializados para tal efecto, garanticen la restitución de la esfera humana, lo que encuentra sustento con el contenido de las obligaciones adquiridas en términos de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser marcos idóneos y fecundos para lograr, a través de este mecanismos de protección, el reparo de nuestras libertades fundamentales.



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA PE
TERCER CIR
Z-PO-EN, JA

Cobra aplicación por analogía:

«Época: Décima Época

Registro: 2003160

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3

Materia(s): Común

Tesis: XXVII.1o. (VIII Región) J/3 (10a.)

Página: 1830

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro homine). Lo anterior, acorde con los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales se advierte que los derechos humanos se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad humana por lo cual no es procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna. En atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del amparo les corresponde con mayor énfasis, en razón de sus funciones de impartición de justicia y conforme al objeto del citado juicio, "proteger" y "garantizar" los derechos humanos en las controversias sometidas a su competencia. Por su parte, los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a un recurso "efectivo" ante los tribunales competentes, que la amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y esos instrumentos normativos. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", que los Jueces están autorizados para realizar un control de convencionalidad "ex officio", esto es, con independencia de que las partes lo invoquen, pues dicha facultad no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de los accionantes en cada caso concreto. En observancia de todo lo anterior, cuando el juzgador de amparo advierte que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, debe abordar el estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen o no dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de esta manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los



PRIMER TRIBUNAL
DE MATERIA F
TERCER CI
QUOPAN, J

201

derechos fundamentales, sin soslayar, desde luego, los presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis planteada. Esta suplencia complementa la prevista en la Ley de Amparo, ya que revela mayores alcances en cuanto al sujeto, al proceder en favor de cualquier persona y no sólo en beneficio de determinados individuos, circunstancia que, sin embargo, no torna inoperante el beneficio regulado en dicha ley, pues éste reviste una protección más amplia en cuanto al objeto, debido a que no se limita a violaciones de derechos humanos en materia de constitucionalidad y convencionalidad, sino también de legalidad. Lo anterior deja entrever que si bien ambas clases de suplencia pueden concurrir en ciertos casos, en otros puede resultar procedente una u otra, de manera que la contemplada en la Ley de Amparo sigue teniendo plena eficacia en los supuestos que prevé.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.

Amparo directo 132/2012 (expediente auxiliar 226/2012). 13 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez.

Amparo directo 356/2012 (expediente auxiliar 586/2012). Lizbeth Angélica Ancona Chuc. 10 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro.

COLEGIADO
JAL DEL
UITO
CO.

Amparo en revisión 321/2012 (expediente auxiliar 863/2012). 5 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro.

Amparo directo 613/2012 (expediente auxiliar 892/2012). Dalia del Socorro Rodríguez Palomo. 31 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Amparo en revisión 343/2012 (expediente auxiliar 964/2012). 15 de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Nota:

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 287/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia I.a./J. 29/2013 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 313/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de julio de 2013.

La tesis aislada P. LXVII/2011 (9a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 535.



PRIMER TRIBUN
EN MATERIA
TERCER
APOPAN

202

Por ejecutoria del 5 de marzo de 2014, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 385/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.»

«Época: Séptima Época

Registro: 394570

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo VI, ParteTCC

Materia(s): Común

Tesis: 614

Página: 408

AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL. El juicio de amparo es el instrumento procesal creado por nuestra Constitución Federal para que los gobernados puedan hacer proteger sus garantías constitucionales de las violaciones que al respecto cometan las autoridades. Y ese instrumento no sólo debe ser motivo académico de satisfacción, sino que también en la vida real y concreta debe otorgar a los ciudadanos una protección fácil y accesible para sus derechos más fundamentales, independientemente del nivel de educación de esos ciudadanos, e independientemente de que tengan o no, abundantes recursos económicos, así como del nivel de su asesoría legal. Esto es importante, porque la protección que el Poder Judicial Federal hace de las garantías constitucionales de los gobernados debe funcionar como un amortiguador entre el poder del Estado y los intereses legales de los individuos, y en la medida en que ese amortiguador funcione, en vez de sentirse un poder opresivo, se respirará un clima de derecho. Luego los jueces de amparo no deben hacer de la técnica de ese juicio un monstruo del cual se pueda hablar académicamente, pero que resulte muy limitado en la práctica para la protección real y concreta de los derechos constitucionales real y concretamente conculcados. De donde se desprende que las normas que regulan el procedimiento constitucional deben interpretarse con espíritu generoso, que facilite el acceso del amparo al pueblo gobernado. En un régimen de derecho, lo importante no es desechar las demandas de amparo que no están perfectamente estructuradas, sino obtener la composición de los conflictos que surgen entre gobernados y gobernantes, y resolver judicialmente sobre el fondo de las pretensiones de éstos.

COLEGIADO
ENAL DEL
CIRCUITO
JISCO.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época:

Amparo en revisión 824/75. Filomeno Delgado Domínguez. 21 de septiembre de 1976. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 507/76. Asociación Ganadera Local de Jonuta, Tabasco. 19 de octubre de 1976. Unanimidad de votos.



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER (C
POPAH.

203

Amparo en revisión 170/77. Refaccionaria Industrial Molinera, S. A. 19 de abril de 1977. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 194/77. Muebles y Decoración Sobrino, S. A. 10 de mayo de 1977. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 554/77. José Trinidad Badillo. 16 de agosto de 1977. Unanimidad de votos.»

«Época: Novena Época

Registro: 177437

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXII, Agosto de 2005

Materia(s): Común

Tesis: I.7o.C.29 K

Página: 2038

COLEGIADO
VAL DEL
JTO
100.

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE (ALCANCE INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). La tesis de jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR LO TANTO NO ES ILIMITADA.", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se establece que la suplencia de la deficiencia de la queja sólo procede a partir de lo expresado en los conceptos de violación o, en su caso, en los agravios, de manera que sin la existencia de un mínimo razonamiento expresado en la demanda, esto es, sin la elemental causa de pedir, el Tribunal de Control Constitucional no se encuentra en aptitud de resolver si el acto reclamado es o no violatorio de garantías, debe entenderse en el sentido de que en los casos que el tema verse sobre la inconstitucionalidad de algún precepto, debe contener el concepto o, en su caso, el agravio, un mínimo razonamiento para poder suplir la queja. Sin embargo, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente, una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, acorde con lo que establece el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuya interpretación y alcance fue determinada por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de jurisprudencia por contradicción, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.", cuya interpretación no ha sido superada, dado el orden jerárquico de ambos órganos jurisdiccionales, en esos casos es procedente tal suplencia.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 432/2005. Antonio de Jesús Camacho Serna. 7 de julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretaria: Rocío del Carmen Sánchez Benítez.



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER C
FABRAN,

209

Nota: Las tesis de jurisprudencia citadas, aparecen publicadas con los números 1a./J. 35/2005 y P./J. 149/2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 686 y Tomo XII, diciembre de 2000, página 22, respectivamente.»

«Época: Décima Época

Registro: 2003160

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3

Materia(s): Común

Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/3 (10a.)

Página: 1830

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro homine). Lo anterior, acorde con los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales se advierte que los derechos humanos se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad humana, por lo cual no es procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna. En atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del amparo les corresponde, con mayor énfasis, en razón de sus funciones de impartición de justicia y conforme al objeto del citado juicio, "proteger" y "garantizar" los derechos humanos en las controversias sometidas a su competencia. Por su parte, los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a un recurso "efectivo" ante los tribunales competentes, que la amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y esos instrumentos normativos. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", que los Jueces están autorizados para realizar un control de convencionalidad "ex officio", esto es, con independencia de que las partes lo invoquen, pues dicha facultad no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de los accionantes en cada caso concreto. En observancia de todo lo anterior, cuando el juzgador de amparo advierte que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, debe abordar el estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen o no dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de esta manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se

LEGADO
DEL
TO
TO



COMERTRIZONA
EN MATERIA
TERCER CI
7 POPAN.

205

resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los derechos fundamentales, sin soslayar, desde luego, los presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis planteada. Esta suplencia complementa la prevista en la Ley de Amparo, ya que revela mayores alcances en cuanto al sujeto, al proceder en favor de cualquier persona y no sólo en beneficio de determinados individuos, circunstancia que, sin embargo, no torna inoperante el beneficio regulado en dicha ley, pues éste reviste una protección más amplia en cuanto al objeto, debido a que no se limita a violaciones de derechos humanos en materia de constitucionalidad y convencionalidad, sino también de legalidad. Lo anterior deja entrever que si bien ambas clases de suplencia pueden concurrir en ciertos casos, en otros puede resultar procedente una u otra, de manera que la contemplada en la Ley de Amparo sigue teniendo plena eficacia en los supuestos que prevé.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.

Amparo directo 356/2012 (expediente auxiliar 586/2012). Lizbeth Angélica Ancona Chuc. 10 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro.

Amparo en revisión 321/2012 (expediente auxiliar 863/2012). 5 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro.

Amparo directo 613/2012 (expediente auxiliar 892/2012). Dalia del Socorro Rodríguez Palomo. 31 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Amparo en revisión 343/2012 (expediente auxiliar 964/2012). 15 de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 287/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 1a./J. 29/2013 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 313/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de julio de 2013.

Por ejecutoria del 5 de marzo de 2014, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 385/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.»

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente le:

P I D O



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA P
TERCER CIR
DODAN, J.

206

PRIMERO.- Se me tenga en tiempo y forma, por cada uno de los motivos aducidos, interponiendo **RECURSO DE REVISIÓN**, contra el fallo definitivo pronunciado por el II. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el pasado 19 diecinueve del mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte, y por consecuencia, en términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, exponiendo los agravios expresados contra su pronunciamiento.

SEGUNDO.- En términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, interpongo por su conducto este mecanismo legal de defensa, a efectos de que en su oportunidad, a la brevedad posible, lo remita a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en última instancia se pronuncie sobre su procedencia.

TERCERO.- A efectos de cumplir con lo establecido por el ordinal 86, empero en su hipótesis jurídica establecida dentro de su párrafo tercero, acompaño las copias del traslado a efectos de que se distribuyan entre las partes contendientes en amparo.

CUARTO.- Se me tenga señalando domicilio procesal señalado al proemio de este escrito para los efectos de publicidad contenidos en Capítulo IV de la Ley de Amparo.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, México, a la fecha de su presentación.

COLEGIADO
II DEL
TO
CO.





PRIMER TRIBUNAL O
EN MATERIA PEN
TERCER CIRCU
TAPOPAN, JALISCO

AMPARO DIRECTO NÚMERO: 13/2020

ASUNTO: SE INTERPONE AMPLIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.

II. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL TERCER CIRCUITO.
P R E S E N T E:

Original y nueve copias.

AT'N: H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

[REDACTED] reiterando mi representación reconocida en términos del numeral 6º, segundo párrafo, en relación con el 10 párrafo primero y 11 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, como defensor particular del inculpado [REDACTED] cuyo carácter me fuera reconocido dentro de la causa penal 08/2017-C por la autoridad del conocimiento, Juez Quinto de lo Penal del Primer Partido Judicial con residencia en Puente Grande, Jalisco, conformado con motivo de la supuesta comisión del hecho delictivo de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, previsto en el artículo 176 Ter del Código Penal del Estado de Jalisco, instaurada con motivo de la querrela de hechos efectuada por la que se dice ofendida, [REDACTED] ante Ustedes, **BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD**, comparezco y.

EXPONGO:

En tiempo y forma, por su conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, 83, 86, relativos y aplicables de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Norma Fundamental señalada; 10, fracción III, 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo relativo al Acuerdo General número 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; con la representación que me reviste; *por encontrarme dentro del término legal de 10 diez días que al efecto se reconoce de la cuadratura normativa dispuesta en el artículo 86 de la Ley de la Materia;* interpongo **AMPLIACIÓN DE MI RECURSO DE REVISIÓN**; *evocando novedosamente aquellos agravios que considero le causan a mi representado la resolución pronunciada por el Honorable Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el pasado 19 diecinueve de noviembre del 2020 dos mil veinte; y al efecto lo hago en la siguiente forma y términos:*

**TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA
DE LOS PRECEPTOS CONVENCIONALES:**

Al tratarse de un recurso adherente al primigenio, solicito que por lo que respecta al apartado de la transcripción literal de la interpretación directa de los preceptos normativos que derivan de los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, *se tengan por reproducidos, y se hagan del mismo modo efectivos en este ocurso, a efectos de dar cumplimiento a las formalidades dispuestas dentro del artículo 88, párrafo segundo de la Ley de Amparo.*

ESTANDAR DE IMPORTANCIA Y TRASCEDENCIA



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA P
TERCER CI
ZAPOCAN, J

208

De igual forma, se solicita que, por lo que respecta a las exigencias contenidas para la procedencia de este recurso, en los términos del *Acuerdo General 9/2015, de 08 ocho de junio del año 2015 dos mil quince*, dictado por el Pleno de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso por lo que respecta a lo previsto tanto en la sinergia normativa de los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 81, fracción II de su Ley Reglamentaria, se dispongan los mismos argumentos que al efecto se esbozaron para justificar los supuestos de *importancia y trascendencia*, a partir de la *relevancia de la controversia que trastoca, con el dictado de la sentencia definitiva en amparo directo, a mi representado, al orden jurídico nacional y al marco de obligaciones que surgen con base a este al catálogo homogéneo de derechos humanos; esto, dados los argumentos que, al interpretar* la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer «CEDAW» y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Belém Do Pará», así como las diversas fuentes normativas *softlaw* que se les asocian a los sistemas interamericanos del que derivan de los sistemas interamericanos y universales de los que el Estado Mexicano forma parte, e incluso, de la interpretación parcial que acontece de un marco universal no definido hacia un sexo, con base en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos «Pacto de San José Costa Rica», cuya indebida y en su caso excesiva y parcial interpretación causa los siguientes:

AGRAVIOS:

LEGADO
VAL DEL
UITO
1990.

CUARTO.- La resolución recurrida, es contraria al marco normativo que al efecto ha establecido la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la racionalidad de la perspectiva de género que subyace a una metodología funcional, orgánica, técnica que *se ajusta a casos específicos y no por el simple hecho de constituir naturalmente un sexo*, tal y como se ha establecido en el *Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género «haciendo el derecho a la igualdad»*. En efecto, el referido instrumento normativo, es una notable compulsa que unifica una coherencia normativa en torno a la aplicabilidad de un estándar de interpretación referido al juzgamiento universal de derechos humanos.

Y es que la H. Suprema Corte que hoy atiende este recurso y los agravios que en el se exponen, ya ha definido la importancia que tienen las sentencias en un plano tanto en el ámbito individual como colectivo, cuyos alcances indudablemente *tienden a influir la vida de las personas, más allá de que constituyen parte de la democracia que se subdivide para la eficacia de un estado soberano no autoritario; es decir, como una extensión de la tan ansiada democracia*.

Así, este mecanismo introductorio, como se refiere en su contenido, busca advertir, atender, reconocer y actuar sobre la base de: *los impactos diferenciados de normas; la interpretación y aplicación del derecho conforme a los diversos roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres; las exclusiones jurídicas producidas ante la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género; la distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones y; la legitimidad del establecimiento de tratados diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias*.



PRIMER TRIBUNAL COL
EN MATERIA PENAL
TERCER CIRCUITO
ZAPOCAN, JALISCO

209

Ahora bien, no escapa que esta Honorable Corte, como se desprende del contenido de dicho texto, ha buscado que ese rol que se asuma con base al sexo y/o el género, parte desde una óptica en la que su aplicación no trastoque y deconfigure la independencia así como la imparcialidad que guía la impartición de justicia, en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de acuerdo al nuevo paradigma de derechos humanos, con la sujeción clara y específica que se colige de la unidad articulada en el binomio 1º y 133 de la norma Fundamental Supra Indicada, en donde el marco de su aplicación, se dispone desde ópticas que trascienden la legalidad y se nutren o potencian de cuerpos normativos que *se distribuyen en las estructuras que tutelan la dignidad humana*.

Por eso, se considera que la aplicación coherente de ese entramado legal que conjuga los menesteres abstractos dirigidos a una naturaleza formal y material del género, *debió ser parte del parámetro de aplicación para juzgar con perspectiva de género*; pues ya lo dice el mismo instrumento: «El presente Protocolo constituye una herramienta fundamental para hacer realidad el derecho a la igualdad, consagrado por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos»

Bajo esa tesitura, debe decirse que el referido instrumento, hace un énfasis al derecho de las personas, defeneciendo que éstas se *ajustan a los intereses y necesidades que en su caso ameriten protección jurídica*. Por eso, se considera en este agravio, que la postura que se debe asumir, debe partir de una coherencia normativa elemental y no de influencias ajenas a derecho. *Precisamente el sexo como parámetro de validez, se trate de hombres o mujeres, es un conflicto que actual, que surge, por un lado, de la persistencia de actos jurídicos, así como prácticas que disminuyen los derechos de mujeres, pero también en donde esos límites racionales, al ser descontextualizados sin bases objetivas y razonables, causan en demérito del justificable –sin definir géneros y sus especies–.* Esto es, se ha caído de igual forma, en el criterio a todas luces reprochable, que los derechos de protección a éstas deben ser absolutos que parta de la sola condición de mujer, y se desnaturaliza el contexto del acceso a la justicia como marco de decisión imparcial, *lo que cabe decir, afecta los casos en los que real y justificadamente sí se justifique una protección inmediata de sexo y/o género.*

Sin lugar a dudas, a nadie conviene que ningún derecho se extralimite, pues lo que es justo parte de lo razonable, y la razonabilidad sólo puede deducirse de aquellos que se analiza desde una óptica objetiva; el Juzgador en el ámbito de su quehacer jurisdiccional, para cumplir esa función, tiene a su vez diversos instrumentos que coadyuvan a garantizar lo que en verdad justifica la democracia de la decisión judicial justa, que debe partir de verdades relativas comprobables a través de las pruebas, y de las cuales se extraigan los hechos.

Y es que, el Protocolo ya lo dice: «Las condiciones estructurales que obstaculizan el acceso a los derechos y condenan a las personas a cumplir determinado rol a partir de su identidad sexo-genérica, demanda un compromiso especial de las y los jueces, quienes por medio de sus sentencias, intervienen en la vida de las personas y en la definición de cuestiones relativas al Estado y su actuación.» Por eso, es que aquí se considera el que esas condiciones estructurales también parten, *como en el presente caso, cuando se mancilla de*



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA DE
TERCER CIR
TAPAPAN, JA

210

acuerdo a una estructura definida, a los hombres en un sentido general; esto es, sobre la base de que el género masculino es por regla general un violentador de mujeres; condición que se agrava, cuando como aquí acontece, se sobre estima la cualidad probatoria de pruebas que, constituyen, como ya se ha precisado en agravios anteriores, presunciones infructíferas por su falta de corroboración, sus constantes inconsistencias e imprecisiones que se pasan por desapercibido para tomar con tal crédito y desatender con total descredito una acusación y una defensa en la que se encuentran en juego, o se quiera hacer creer que está en juego un conflicto de sexos.

Esa condición es fundamental, porque como se dijo, de esta parte que al albor de normas de derecho internacional, como lo son la *Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)*, la *Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer*, así como la *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer*, se pretende justificar aquello que no es justificable. Y es que, no se trata del hecho de que no se comparta el que existen casos en que se amerita una especial presunción derivada de los hechos *comprobados o de los indicios demostrados*; pero esa significancia, debe ser legítima; porque aún y cuando se pretenda tomar valor de una declaración en la que la denunciante sea una mujer, no se puede sólo atender aquellos que le beneficia, sino además, *todas las inconsistencias que al efecto le pueden restar credibilidad, lo que no trastoca el orden normativo anteriormente señalado, sino que hace justo y válido los casos en que se aplique su dimensión normativa.*

Porque, evocar los textos anteriormente transcritos, conlleva una carga de probar que la mujer *ha sido violentada y discriminada, cuya afirmación no se puede dar en un contexto desconocido para el Juzgador, sino en una base sólida de pruebas, en la que de igual forma se debe poner en duda todo aquello que desprenda sospecha -tal y como lo hizo la Sala responsable y que no fue revertido para revocar el fallo otorgando el amparo y protección de la justicia federal por el Órgano Colegiado-*. Tampoco este criterio que se comparte constituya el hecho de que no se deban atender elementos aislados de una denuncia para advertir circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas de acción, pues ciertamente este indicio tiene capital importancia y es relevante *como punto de partida para la comprobación de los hechos*. Sin embargo, cuando el mismo es cuestionado por sus mismas suspicacias; esto es, aquellas que posteriormente son proferidas en ampliaciones, así como en otras comparecencias, como en el caso de la entrevista con la especialista del Instituto de Ciencias Forenses en el área de la psicología -*cuyo contenido ya fue atacado en agravio anterior*-, no puede considerarse que pese a dichas incógnitas, se pueda formular una acusación, pues el Juez antes que nada es un tercero ajeno a los hechos, y sobre todo debe ser un especialista versado en el derecho, y debe entender que *está sujeto a cumplir con las cargas que conlleva la aplicación de garantías judiciales bien definidas, y a que, así como la mujer tiene derechos como víctima de la posible comisión de un delito, el hombre por su parte que en este caso es acusado, tiene la prerrogativa vigente de que, ante la duda, lo que corresponde es la absolución de una condena.*

Por eso se considera que la actuación del Órgano Colegiado, cuando parte de un solo elemento normativo definido u orientado únicamente al mujer, o sea hace uso de otros como



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA PENAL
TERCER CIRCUITO
ZAROPAN, JALISCO

211

el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ignorando todas aquellas que de igual forma constituyen derechos, libertades y garantías para mi representado, incluso aún y cuando aduce e invoca el criterio avalado por esta corte en torno a la Jurisprudencia sobre el juzgamiento con perspectiva de género, es *un límite al escenario real que converge y que está obligado a justificar en la toma de sus decisiones, pues sólo parte de una de las consignas que en su actuar le enmarca en el derecho nacional e internacional, además de que caracteriza y estigma al hombre como un ente violentador, al reforzar argumentos con una notoria carga de sustento o de un análisis genérico, unitario y aislado tanto de las denuncias como ampliaciones y ratificaciones de la aquí quejosa, pero desestima aquellas contradicciones precisadas o incluso omitidas en su estudio y que fueron plasmadas en estos agravios y por la misma "Sala responsable"*; lo que constituye una caracterización del hombre no como sujeto de derecho, sino como parte de un régimen opresor y violento de la esfera femenina, sin atender contextos reales, autocríticos y fehacientes.

A ese respecto, el Protocolo destaca aquello que aquí se considera transgrede el Órgano Colegiado; esto es: *«La caracterización de las personas, y las decisiones jurídicas tomadas a partir de dicha caracterización, deviene en la visibilización o invisibilización de las personas y sus intereses, condicionándoles el acceso a la justicia»*. Y es que hacer juicios justos no es revictimizar a las personas que parten como *posibles víctimas de delito*, pues ello no acontece como cuando en el presente se inicia investigación, desarrolla un proceso y se dicta sentencia. Ciertó, se puede considerar que, la deficiencia de la actuación de la Autoridad Ministerial fue la violentadora y generadora de esa revictimización, pues ya se dijo, nunca se citó a declarar a la totalidad de los presentes en los hechos denunciados, no se preocupó siquiera por reconducir de algún modo las dudas o reticencias que se advierten de la denuncia inicial, ampliaciones y ratificaciones de ésta, ni por desahogar otros elementos de convicción como las declaraciones de los menores hijos, *pese a que se señaló que también éstos fueron violentados y en donde parte el interés superior del menor como marco protector de su esfera humana y jurídica*; sin embargo, esas deficiencias no puede dar lugar a que, el excesivo escrutinio de las manifestaciones de [REDACTED] sea la verdadera razón de esa revictimización, pues ese demérito o mérito de todo el caudal probatorio en lo individual y en su conjunto, es una carga del Juzgador, porque de éste en forma precisa debe partir el derecho aplicable, y en materia penal, como ya se ha dicho en otros agravios, convergen principios que van más allá de una especie del género, como lo son *las garantías judiciales, el Indubio Pro Reo y la Presunción de Inocencia*.

Para robustecer lo anterior, debe decirse que el citado Protocolo emitido por las H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido la igualdad en la perspectiva de género, en donde ha destacado con total claridad que: *«La introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes al derecho a la igualdad. Las reivindicaciones por descentralizar y equilibrar el ejercicio de poder han logrado que existan criterios que empoderan a las víctimas al reconocerles sus derechos y repararles las violaciones a los mismos»*. Pero se insiste, esta construcción de equilibrios sólo puede concebirse desde el marco de la igualdad, e incluso de la equidad, pues ningún efecto positivo tiene para el derecho sustantivo y adjetivo penal, que se desconozca la esfera procesal, jurídica, judicial y humana de otra persona, sobre todo ante la convergencia de



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER C
ZAPOTAN,

212

deberes humanos que de igual forma se encuentran dentro de esa coherencias normativa que aplica a la perspectiva de género.

Porque ciertamente, no hay un desconocimiento a la igualdad, cuando se parte de la insuficiencia de pruebas, pues ambas partes están sujetas a un proceso, cada una en este caso con su debida representación; en el caso de la víctima, a través del Agente del Ministerio Público, quien en términos de la carga normativa de los artículos 21 del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 116 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, debe, como rector de la investigación, acreditar el cuerpo del delito de que se trate; es decir, aquellos elementos objetivos o externos que constituyan la materialidad del hecho que la ley señale como delito. Pues sobre ésta base descansa el que se acredite que la responsabilidad penal. Máxime cuando el estándar probatorio se amplía cuando se trata de justificar el tipo penal, en el que los elementos a acreditar se vuelven más inflexibles pero por respeto a las *garantías judiciales de Presunción de Inocencia e Indubio Pro Reo*, de manera que lo que en su momento soporto una formal prisión, -como lo refiere la Autoridad recurrida al señalar que no obstante que se decretó auto de libertad la ofendida promovió amparo indirecto del que conoció el Juzgado Segundo de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con el número de expediente 2002/2017, en el que se concedió la protección constitucional, que fue confirmada por este Tribunal Colegiado al conocer el recurso de revisión 232/2018, derivado de lo cual se revocó el auto de libertad reclamado y se confirmó la formal prisión al activo-, no amerita que de igual forma se soporten en una condena que establece a diferencia del acreditamiento del cuerpo del delito, la comprobación del tipo penal, cuyo estándar es más robusto y preciso.

Cobra aplicación al caso concreto que nos ocupa:

«Registro digital: 2007869

Jurisprudencia

Materias(s): Penal

Décima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 12, Noviembre de 2014 Tomo IV

Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)

Página: 2711

DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: "**ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.**", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA PI
TERCER CIR
ZAPOCAN, JA

213

descripción típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación).

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 84/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 141/2014. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 152/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 99/2014. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 251/2014. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.»

«Registro digital: 160621

Jurisprudencia

Materias(s): Penal

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: Libro III, Diciembre de 2011 Tomo 2



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCERA
ZARORA

214

ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aún considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, la cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba.

Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Amparo directo 8/2010. 30 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo directo 7/2010. 30 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA F
TERCER CI
ZAPOCAN,

215

Tesis de jurisprudencia 143/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de noviembre de dos mil once.»

De ahí que, el análisis que en su momento parte de un estándar probatorio para que se configure una probable responsabilidad, no debe ser igual de laxo que para la acreditación del tipo penal, pues se trata de etapas procesales distintas en las que las consecuencias de derecho de igual forma son diferentes, pues mientras una tiene por objeto instar un proceso, el otro surte la consecuencia de emitir una condena, un fallo que determina que se es partícipe de un hecho criminal. Por eso, la aplicación de un estándar normativo fundamental, debe ser en todo caso de actualizarse su contenido, congruente con las etapas en las que se emplea aquella interpretación de sus fuentes normativas, pues no se puede justificar la ligera las hipótesis de mujer violentada o discriminada en forma desmedida y sin ser objetivos en su actualización; lo que también ha sido reconocido en el marco del Protocolo en mención, pues al respecto, y como ya se ha destacado en agravios anteriores a la reforma denominado «*de derechos humanos*» se ha establecido que: «*El resultado más significativo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011 en México, es que la persona y sus derechos son colocados como eje central de impartición de justicia*».

Ante esta justificación, el respeto a las garantías judiciales que ya se ha plateado, forma parte de esa divergencia de derechos que se encuentra estructurada en el ejercicio de la función jurisdiccional, porque bajo los sistemas interamericanos y universales, el ejercicio de los deberes inherentes a la función jurisdiccional, debe partir de una aplicación normativa que se justifique en cada una de las esferas humanas en juego, pues el respeto a ese tipo especial de prerrogativas no son privativas de un sexo, sino que de acuerdo a lo dispuesto por todo el entramado legal que en forma integral converge al **bloque constitucional**, en especial al que se dispone del contenido de los artículos 1º, 4º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1º y 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son enfáticos en establecer que el Estado debe adoptar un enfoque protector a toda persona que se encuentre sujeta a su jurisdicción, respetando que esta sea juzgada en igualdad ante la ley, **y no bajo posiciones de ventaja sobre otras por su sexo**, pues esas mismas obligaciones encuentran sustento en otras prerrogativas humanas, que como en otros agravios ya se señaló, encuentran sentido en el contexto del **debido proceso legal, las garantías judiciales, la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia**; todas éstas en sentido general; y en forma particular, así como la víctima tiene una gama de derechos a la no revictimización, a la reparación del daño y a garantizar que los hechos no queden impunes y se sancione al culpable; el inculpado debe también tener reconocido su catálogo de derechos a la **Presunción de Inocencia y a aquella que establece bajo el Principio Indubio Pro Reo**, que cuando exista duda, sobre todo cuando se trate de un estándar probatorio más estricto al tratarse del estudio del tipo penal, se esté en lo más favorable a éste y se le absuelva; lo que se insiste, parte de esa aplicación específica a juzgar con perspectiva de género.

Bajo ese teorema, se considera que los criterios invocados por el Órgano Colegiado, además de referirse a casos de **abuso sexual**, no atienen a la realidad manifiesta de juzgar con perspectiva de género, pues sus consideraciones a efectos de destacar la perspectiva se hacen



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA DE
TERCER CÍF
ZAPOPAN, J

216

bajo una óptica específica, cuando el Protocolo señalado en este apartado, como se ve, abarca todos los escenarios en que se pueda dar este tipo de interpretaciones; además de la forma de la forma en que objetivamente se puede considerar objetiva y razonable su actualización. Y es que no escapa que la autoridad, para efectos de aplicar dicho criterio, parte, de entre otros argumentos ya combatidos, de aquel que se nutre del criterio bajo el rubro y texto:

«Registro digital: 2019751

Aislada

Materias(s): Penal

Décima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 65, Abril de 2019 Tomo III

Tesis: III.2o.P.157 P (10a.)

Página: 2187

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si se trata de delitos en los que pueda existir discriminación que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos como la codependencia y el temor que propician la denuncia del delito, donde cobra preponderancia entre dichos ilícitos, el de violencia intrafamiliar. Ahora bien, de conformidad con el artículo 176 Ter del Código Penal para el Estado de Jalisco, comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, causando un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas. Cuando dicho ilícito se perpetra en su vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, **sino momentos específicos o reiterados y actos concretos,** como pueden ser el maltrato verbal, las amenazas, el control económico, la manipulación, entre otros, por lo que debe considerarse de realización oculta, al cometerse en el núcleo familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste. Respecto a dicho tópico, el Más Alto Tribunal del País ha sostenido que en los delitos de realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de violencia intrafamiliar, la prueba pericial en psicología resulta la idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de dicho delito.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 303/2017. 14 de junio de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Martín Ángel Rubio Padilla. Ponente: José Luis González. Secretaria: Saira Lizbeth Muñoz de la Torre. Esta tesis se publicó el viernes 26 de abril de 2019 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



PRIMER TRIBUNAL CC
EN MATERIA PEN
TERCER CIRCU
ZAPOCAN, JALISCO

217

AVE
MO
SCD

Empero el criterio anterior establece una dimensión amplia, pues en este caso la discriminación puede surgir tanto para hombres como para mujeres, y aunque en este se avale en que el mismo se acredite en su vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad; no menos cierto lo es que *debe detallar momentos específicos o reiterados y actos concretos*, y la denuncia esbozada por la supuesta víctima, hoy quejosa ante esta Instancia Constitucional, como lo es en la causa penal [REDACTED] fue notoriamente inconsistente al detallar sus dichos, mismos que por un lado, no establecieron circunstancias de modo, tiempo y lugar; y, por el otro las que sí se justificaron en ese contexto, no fueron corroboradas con otros elementos de convicción, cabiendo aquí el caso en que pese a que se trata de delitos en ocasiones de realización oculta, estos se cometieron ante la presencia de diversos testigos, mismos que o no comparecieron o compareciendo fueron contradictorios, tal y como se ha referido en agravios que anteceden; y en donde incluso, la que se dice se insiste víctima del delito, fue contradictoria en sus dichos, puesto que, de igual forma, como ya se precisó en agravios que forman parte del escrito primigenio de agravios, la Sala no fue consciente que existe un deber, un estándar de prueba que forma parte de una condena justa, y al ser esta contradictoria no sólo con sus propias afirmaciones en denuncia, sino además con el dictamen en materia de psicología y los hechos externados ante la experta en la materia, es que ante la duda razonable se le dio a mi cliente el favor de la duda razonable del artículo 20, inciso A), fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se pueden establecer calidades de víctima de discriminación o violencia conforme al marco de las convenciones «Belém do Pará» ni «CEDAW», si estas no parten del análisis de los hechos que, necesariamente conllevan el análisis del caudal probatorio, pues éste en forma personal le es desconocido al Juzgador, quien parte de verdades aparentes, para después hacerlas relativas y tomar una decisión judicial justa; lo que conlleva atender sus contenidos con el rigor probatorio que terminen por desprender, aún si esto determina restarles eficacia probatoria, pues el acceso a la justicia debe partir de una Tutela Judicial imparcial, completa, congruente y expedita; *y que no pugna con el hecho de no reconocerle el valor preponderante a su dicho, pues éste al mismo tiempo debe ser objeto de análisis y estudio detallado a efectos de partir de una decisión justa.*

Además, cabe destacar que, la actuación del Órgano Colegiado, no sólo para el reconocimiento, sino además para la comprobación del análisis con perspectiva de género, dejó de atender los compromisos que, como parámetro guía se establecen en el referido Protocolo, precisamente, con base en la suscripción y ratificación de las Convenciones «Belém do Pará» y «CEDAW»; esto es, que, advirtiendo el que no existían parte importante de medios de prueba y que los existentes desprendían dudas en su análisis, por la falta de actuación diligente de la Representación Social; hacer que las Autoridades e Instituciones se comporten conforme a las obligaciones que tengan por objeto y defecto prevenir, sancionar y erradicar la violencia; puesto que la debida diligencia de la actuación de la Autoridad en la integración del caudal probatorio, además de ser una garantía del procedimiento, es un derecho humano que le es reconocida en el texto del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el particular 7º de la Convención «Belém do Pará», y no como lo pretende, partiendo de presunciones y afirmaciones arbitrarias, atendiendo en un sentido nada crítico los alcances de sus acusaciones directas a mi cliente.

PRIMER TEL
EN MATER
TERCE
ZAPOPI

Pues la igualdad es una regla, y la discriminación motivada por su falta debe ser parámetro de comprobación y no de suposición. Puesto que el mismo protocolo destaca que es su deber -*página 25*-, procurar, a través de los *medios adecuados*, la práctica del principio de la igualdad entre el hombre y la mujer, y garantizar, en su caso, la protección efectiva contra todo acto de discriminación. Y es que se insiste y por eso, con la finalidad de que desprenda de un marco objetivo como lo es el citado Protocolo, -*página 26*- el derecho a la igualdad y el acceso a la justicia constituyen en todo caso imperativos de derecho internacional público que generan obligaciones de carácter *erga omnes*, de lo que parte que, tanto el reconocimiento de un derecho como su desconocimiento, deben ser entidades probadas y justificadas.

Además, tampoco se advierte que el Órgano Colegiado, a efectos de que se sustituyera en los alcances probatorios dados por la Sala responsable -*que como ya se dijo no atendió en su totalidad*- y tener por acreditados los elementos necesarios para aplicar el criterio hermenéutico con enfoque en *perspectiva de género*, hubiere hecho un análisis robusto sobre el marco conceptual que reconoce el citado Protocolo. Pues en este -*página 29*- se precisan: «*La construcción teoría de la igualdad como un principio y como un derecho que demanda ciertos enfoques, reivindicaciones y contenidos sustantivos en las sentencias*». Esto es, se atienden los elementos para detectar en qué casos está justificado ejercer un trato diferenciado, en donde se establece que, como principio, de acuerdo a la opinión consultiva 18 de la Corte IDH solicitada por México, es:

RECEIVED
JALISCO
R CIRCUITO
N, JALISCO.

a) Tiene el carácter de *juscogens*, por lo que no admite acuerdo en contrario. Ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio puede ser admitido;

b) Es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional;

c) Implica que el Estado, ya sea a nivel internacional o en su ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no pue de contrariar el principio de igualdad y no discriminación;

d) Genera efectos inclusive entre particulares.

De ahí que, lo anterior viene a reforzar el hecho de que, en una acepción general, el principio de igualdad no es privativo, por eso, la necesidad de atender los enfoques que en su caso, para una mejor representación de su adecuación normativa, parte de la metodología que representa el Protocolo en mérito, pues aquí ya se ha dicho, y lo anterior viene a reforzar, *ningún acto jurídico que entre en conflicto con ese principio puede ser admitido*, por eso que, pretender de una manera parcial, alterando el sentido, pero además sin hacerlo aplicable al caso particular, para concluir que el testimonio de la víctima, es suficiente para acreditar el tipo penal y la responsabilidad penal plena, constituyen acepciones derivadas de una exégesis desigual, pues el escrutinio probatorio debió ameritar un análisis más crítico, no sólo como parte de la denuncia que se hace por la supuesta comisión de un delito de violencia familiar, puesto que las divergencias, irregularidades y contraposiciones de éstas con otros medios de prueba, no podían justificar una condena bajo el estándar definido en las convenciones de



PRIMER TRIMESTRE
EN MATERIA
TERCER (C)
ZAPOCAN

219

«Belém do Pará» y «CEDAW»; ya que éstas parten de una realidad que se debe comprobar sobre la base de la violencia y la discriminación contra la mujer, lo que no aconteció en el caso a estudio.

Ya lo dice en este caso el referido Protocolo a análisis: *«En consecuencia, señala la Corte IDH, los Estados sólo podrán establecer distinciones objetivas y razonables cuando éstas se realicen con el debido respeto a los derechos humanos y de conformidad con el principio de la aplicación de la norma que mejor los proteja»*. En ese mismo sentido, no se puede ocultar que el mismo instrumento, al hablar de la igualdad como derecho, instituye una herramienta subjetiva para acceder a la justicia, pues otorga la titularidad a las personas para reclamar por diversas vías la realización efectiva de la igualdad al aplicar el escrutinio de derechos.

Por lo anterior, no se puede justificar la aplicación de la perspectiva de género al caso que nos ocupa, puesto que el análisis desprendido por el Órgano Colegiado recurrido, no es objetivo; es decir, no parte de toda la gama de derechos que en el presente entran, desde un enfoque o perspectiva de la igualdad como principio, tanto a los derechos humanos que se le reconocen como víctima, como a los que en el particular se le reconocen a mi representado como inculpado, siendo una parte esencial que sus efectos no sean privativos, a efectos de que no se demerite el criterio de interpretación utilizado para tal efecto, puesto que en el mismo sentido en dicho instrumento se ha dispuesto: *«Para dotar de contenido a la igualdad, es necesario tomar puntos de referencia. Por ello, se dice que es un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que la determinación de si hay una vulneración al derecho a la igualdad supone un juicio de comparación que se realiza entre personas, leídas a partir de su situación particular y del contexto en general*. De ahí la gravedad de atender una forma de interpretación de derechos con enfoque o perspectiva de género que parte de un análisis meramente subjetivo, y por ende referido a uno sólo de los participantes, puesto que la manera de aplicar debidamente su contenido, es partir de las circunstancias especiales o de aquellas circunstancias especiales o inmediatas que convergen entre las partes, pues de partir hacia uno de los enfoques, hacen que la perspectiva de género, se desnaturalice y actúe como un estándar de preferencia por convicción.

Además, nunca se comprobó si en el particular la generación de ese actuación, hacia que la quejosa [REDACTED] fuere acreedora de algún tipo de conflicto que generara la desigualdad como parte de un contexto *formal, material o estructural*, lo que debió partir no sólo de conjeturas, sino de hechos comprobados; es decir, de un análisis pero objetivo de las pruebas; esto es, sin atender un valor definido por sexo, y sin atender aspectos accidentales o esenciales al mismo que hicieren generar dudas razonables, como sí lo hizo la Sala que se tildó de responsable. Cabe destacar que tanto la igualdad debe ser formal, porque aún y cuando existan leyes definidas hacia un grupo prioritario, no se puede, como ya se ha dicho, desconocer que los derechos humanos son universales; lo que partió precisamente del análisis llevado a cabo en cada uno de los actos reclamados por la quejosa, porque se insiste en que el carácter de víctima tiene valor preponderante, pero también se debe ser consiente en cuanto a que, en determinado momento, ese valor se debe reforzar, pues en materia penal, al momento de iniciar una investigación criminal penal, se le concede valor para efectos de



PRIME
EN

FINAL
IP

220

reconocerle el alcance de actuar sobre su base en diligencias de investigación, luego para lo que ve a la formal principio, para con datos mínimos que justifiquen el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal, iniciar un proceso formal en contra del presunto agresor, lo que debe ajustarse a cada paso o etapa el criterio que se adopte con base en las convenciones que genere la actuación de la Autoridad Federal recurrida, pues al momento de llegar al tipo penal, toda duda que no hubiere sido corregida, reforzada o perfeccionada, establece dudas razonables que ameritan *Indubio Pro Reo*, que se emita una sentencia absolutoria, pues la parte que represento, no es culpable pese a que se haya iniciado formal proceso en su contra, pues ésta sola es una etapa en la que la calidad de inocente no se extingue y por ende el actuar de la autoridad debe ser responsable en sus actos al momento de resolver.

Además, nunca se demostró que la quejosa [REDACTED] por una condición estructural, estuviere sometida de algún modo por forma parte un grupo que en forma histórica fuere vulnerable, pues tan era autónoma en su actuar, que logró que ni el que se dice responsable, tercero interesado, se fuera del domicilio que cohabitaban, incluso, como ya se dijo, compareció a tramitar denuncia penal en su contra, y no sólo una vez, sino varias ocasiones, tan es así que las mismas terminaron por perjudicarlo al ser nada concretas, así como totalmente contradictorias en algunos de sus aspectos accidentales y relevantes que por eso y no por discriminación en su contra o ignorando que esta formara parte de un grupo en desventaja se le hubiere negado una condena a [REDACTED] puesto que ello se dio en consecuencia de la no acreditación del tipo penal y de la responsabilidad plena de mi representado, con base a conjeturas objetivas, razonables y analíticas que ya han sido expuestas en el cuerpo de este ocurso.

Por esa misma vía, considero que se debió atender como principio y como derecho subjetivo que ahora en este último caso se reclama, si en verdad existía razón para que se considerara válido hacer un enfoque con perspectiva de género definido hacia la quejosa, ya que el hecho de que se le denostara eficacia demostrativa a sus dichos no advirtió algún tipo de trato diferenciado que vulnerara la igualdad, *como sí ocurrió a mi representado en la forma y términos que se desprenden de este ocurso y anterior de agravios*. Pues el análisis que se hizo por parte del Órgano Colegiado recurrido a su dicho, para tener por actualizada la aplicación de criterios con perspectiva de género reforzada principalmente en el contexto de las obligaciones de las Convenciones «Belém do Pará» y «CEDAW», se efectuó desde una sola óptica; esto es, a diferencia del análisis legal, objetivo e imparcial de la Sala, solo para atender a los hechos denunciados y su concatenación con algunas pruebas *-tanto el acta de matrimonio como la pericial en psicología-* pero dejando de lado todas las inferencias que se dedujeron su falta de idoneidad, y por ende, *generando un trato diferenciado que sí carece de validez y legitimidad*, pues al margen de lo que subyace en forma independiente a lo que se consigna en una norma fundamental en vías de protección a la mujer, existe una carga que también es constitucional y convencional, en torno al análisis objeto de las pruebas; ya que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal; y en donde las partes tienen igualdad procesal para sostener la acusación y la defensa respectivamente; lo último que se invoca en el sentido de que el todo análisis que sobre ese caudal se haga por la Autoridad, debe estar soportado en dos vías, tanto



PRIMER TRIBUNAL CI
EN MATERIA PEN
TERCER CIRCU
7 de JUN, JUL

221

en un sentido positivo como negativo, a efectos de desentrañar la verdad histórica que surja de la apreciación directa que haga de los hechos.

Además, porque ya se ha dicho, de acuerdo al orden legal internacional de derechos humanos, tanto en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, en el 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, las garantías tanto de audiencia como de defensa, deben ser reconocidas sin distinciones, lo que implica un arbitrio judicial imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada. Pues tanto es razonable que se respete, tutele y proteja la esfera de derechos de la víctima como también lo es la del acusado, pues ni la primera con su sola denuncia justifica la existencia de los hechos o la responsabilidad penal, como el segundo, ante su negación o silencio su inculpabilidad en los mismos, por lo que su análisis debe partir desde enfoques, posturas y encuadres que hagan posible atender un criterio imparcial, objetivo y razonable al momento de definir la situación jurídica de los sujetos sobre recae el arbitrio judicial, pues el análisis probatorio se trata de un trato igual entre iguales, ya que la carga de la prueba y de desvirtuar la prueba asiste a ambas partes y su falta les perjudica por igual; lo mismo que el valorar sus alcances probatorios a fin de establecer las normas aplicables; por lo que se considera que al no justificar lo anterior, es más, ni siquiera advertir que la Sala se hubiere convencido de su decisión con base a roles o en su caso estereotipos, es claro que la sentencia efectuada con enfoque de perspectiva de género que fue utilizada para otorgar el amparo y protección de la justicia federal resulta del todo inconstitucional e inconvencional.

Robustece a lo anterior:

«Registro digital: 2020021

Aislada

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Décima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 67, Junio de 2019 Tomo VI

Tesis: I.100.A.4 CS (10a.)

Página: 5311

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU FUNDAMENTO Y CARACTERÍSTICAS. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, segundo párrafo, 94, 100, séptimo párrafo, 116, fracciones III y V y 122, apartado A, bases IV y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las directrices fijadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, se colige que los juzgadores se encuentran sujetos a la observancia de la totalidad de los principios que integran el derecho fundamental a la impartición de justicia, entre los que destaca el de imparcialidad, instituido como una exigencia esencial inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en el deber de mantenerse ajenos a los intereses de las partes en controversia, así como de dirigir y resolver los conflictos judiciales sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, como condición y base protectora de todos los derechos humanos, que se expande en dos



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPAQUE
TAMPAQUE
TAMPAQUE

222

dimensiones: 1) subjetiva, relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que, en buena medida, se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca; y, 2) objetiva, referida a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. En ese contexto, el legislador persigue asegurar el cumplimiento de esa imparcialidad, por ejemplo, a través del artículo 51 de la Ley de Amparo, el cual precisa las causas de impedimento por virtud de las cuales los operadores del derecho, en caso de incurrir en alguna de ellas en los juicios de que conozcan, deben manifestarlo y excusarse de conocer del asunto, ya que éstas, en principio, constituyen una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional o de titulares de las funciones relativas. De lo anterior se advierte que el diseño del sistema jurídico nacional reconoce la obligatoriedad del principio de imparcialidad como primordial para consolidar el ejercicio de ese servicio público, el cual permea de la Constitución General a las normas legales y atribuye consecuencias sancionatorias en el supuesto de incumplir con la conducta imparcial con que debe conducirse un impartidor de justicia.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Impedimento 17/2019. Integrantes del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 28 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Héctor Reyna Pineda.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas jurisprudencias 1a./J. 1/2012 (9a.), de rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL." y aislada 1a. CCVIII/2018 (10a.), de título y subtítulo: "IMPARCIALIDAD JUDICIAL. SU CONTENIDO, DIMENSIONES Y PRUEBA.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 460, así como en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 322, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.»

«Registro digital: 160309

Jurisprudencia

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: Libro V, Febrero de 2012 Tomo 1

Tesis: 1a./J. 1/2012 (9a.)

Página: 460

IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser



PRIMER TRIE
EN MATE
TERCI
ZAPOF

223

ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal.

Amparo directo en revisión 944/2005. Distribuidora Malsa, S.A. de C.V. 13 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Muredú Gilabert.

Amparo en revisión 337/2009. Jorge Morales Blázquez. 13 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo directo en revisión 1449/2009. Pompeyo Cruz González. 25 de mayo de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.



TRIBUNAL COLEGIADO
DE LA PENAL DEL
CIRCUITO
JALISCO.

Amparo directo en revisión 1450/2009. Sabino Flores Cruz. 25 de mayo de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Amparo en revisión 131/2011. Joel Piñón Jiménez. 10 de junio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Tesis de jurisprudencia 1/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce.»

«Registro digital: 2018672

Aislada

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 61, Diciembre de 2018 Tomo I

Tesis: 1a. CCVIII/2018 (10a.)

Página: 322

IMPARCIALIDAD JUDICIAL. SU CONTENIDO, DIMENSIONES Y PRUEBA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual consiste en la posibilidad real y efectiva que tienen en su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus



PRIMER TRIBUNAL C
EN MATERIA PEN
TERCER CIRCU
ZAPOPAN, JALISCO

224

pretensiones, aunado al correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Además, se establece que la impartición de justicia debe regirse por cuatro principios, de modo que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el principio de imparcialidad, judicial tiene el siguiente contenido: Primero, exige que quien juzgue una contienda se aproxime a los hechos de la causa careciendo de prejuicios en lo subjetivo, y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar dudas en torno a su imparcialidad. Segundo, la imparcialidad judicial debe entenderse desde dos dimensiones, mientras que su verificación puede ser objeto de dos tipos de test. Tercero, en cuanto a sus dimensiones, la imparcialidad debe ser funcional (functional in nature) y personal (personal character), la "imparcialidad funcional" deriva de la claridad en cuanto a las funciones que son asignadas a quienes imparten justicia dentro de un proceso judicial, de modo que no participen en diversos roles, no actúen en distintas instancias o carezcan de conexión con alguna de las partes, por lo cual requiere de garantías objetivas; por otra parte, la "imparcialidad personal" se presume de entrada y depende de la conducta de quien juzga respecto a un caso específico y de los sesgos, prejuicios personales o ideas preconcebidas en torno al asunto o quienes participan en él, centrándose en la capacidad de adoptar la distancia necesaria de un asunto sin sucumbir a influencias subjetivas. Cuarto, en cuanto la prueba, la imparcialidad funcional se analiza desde un punto de vista objetivo a partir de circunstancias verificables (objective test), mientras que la personal se estudia tanto desde un punto de vista subjetivo (subjective test) como desde el objetivo. La prueba objetiva se centra en identificar indicios —usualmente normados— que puedan suscitar dudas justificadas o legítimas sobre la conducta que observarán quienes van a resolver un asunto, salvaguardando la confianza que los órganos de impartición de justicia deben inspirar a las personas justiciables. Por otra parte, la imparcialidad personal, desde un punto de vista subjetivo, se presume, salvo manifestación de quien resuelve o prueba objetiva en contrario, la cual: (a) busca determinar los intereses o convicciones personales de quien juzga en un determinado caso (por ejemplo, si ha manifestado hostilidad, prejuicio o preferencia personal, o si ha hecho que el caso le fuera asignado por razones personales); y (b) puede basarse en un comportamiento que refleje una falta de distancia profesional de la o el Juez frente a la decisión (por ejemplo, a partir de los argumentos y el lenguaje utilizado), pero sin comprender, evidentemente, la actuación oficiosa de las y los juzgadores al recabar pruebas para esclarecer la verdad. Quinto, la recusación constituye un instrumento procesal de gran relevancia para la tutela del derecho a ser juzgado por un órgano imparcial e independiente, aunque sin llegar a confundirse con el derecho mismo. Atendiendo a todo lo anterior, en las leyes se establecen diversos medios procesales para que las personas gobernadas busquen garantizar que el fallo sea imparcial, así como para que quienes juzgan hagan patente su posible riesgo de parcialidad y que se inhiban de conocer de un asunto sometido a su jurisdicción.

Impedimento 12/2017. Luis Ángel Velazco Oliva, en su carácter de apoderado legal de la Sucesión a Bienes de Octavio Fuentes San Román. 24 de enero de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.»

De ahí en considerar que el arbitrio del Órgano Colegiado, pese a manifestar que su arbitrio parte de una coherencia normativa sustentada en las Convenciones «Belem do Pará»



PRIMER TRIMESTRE
EN MATERIA
TERCER C
ZAPOCAN,

225

y «CEDAW», así como de las consideraciones plasmadas por la Primera Sala Penal de esta H. Corte Suprema de la Nación, sin desconocer sus alcances normativos que se desprenden de su contenido, se considera al ser aplicados fuera del marco de igualdad; esto es, fuera de un contexto objetivo y razonable, desmotando la figura masculina por el sólo hecho de ser hombre, y priorizando la figura femenina por el sólo hecho de ser mujer, no debe surtir los efectos que se pretende, pues como principios o como derecho, la igualdad parte de un deber que no puede ser objeto privativo de una de las partes, ni mucho menos, debe presumirse que, la sola calidad de víctima justifique una condena, pues ya se dijo que ésta trastoca los alcances de los que constitucional y convencionalmente le es permitido.

Puesto que la sola calidad de víctima que refiere el Órgano Federal, coloca a la mujer en los casos de violencia intrafamiliar, como grupo vulnerable, pero esa calidad, puede en su momento desvanecerse; esto es, no ser suficiente en otros estadios procesales. Pues también se debe ser congruente con éstos para decidir su suficiencia o insuficiencia, considerando lo que aquí ya se dijo en torno al Protocolo de Actuación para Juzgar con Perspectiva de Género en que la calidad de desigualdad y no discriminación debe ser probada en un sentido tanto individual como general, por lo que ese actuar ameritaba una carga de análisis robusta de los elementos probatorios de cargo; esto es, atendiendo a lo dicho razonadamente por la Sala en cuanto a sus divergencias, imprecisiones e irregularidades, auscultando mucho más que en un solo sentido sus alcances, a fin de advertir si era verídico o no que la misma no debía en todo caso contener alcances probatorios, o como lo considero en una sola óptica de estudio, si esta era suficiente para justificar la aplicación convencional y por ende la perspectiva de género que originó el amparo y protección de la justicia federal; razones y motivos por los que se considera que la sentencia infringe el orden constitucional y convencional.

QUINTO.- La sentencia recurrida, trastoca las formas y procedimientos establecidos con base al ejercicio responsable jurisdiccional, que tiene por objeto, tutelar las violaciones a los derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 1º y 2º. Ya que, al momento de considerar el reconocimiento de los derechos humanos que estimó actualizados de acuerdo a la base convencional dispuestas en los instrumentos «Belém do Pará» así como «CEDAW», dejó de considerar el carácter no absolutista de sus cimientos normativos, sino que éstos se encuentran compelidos tanto a la razonabilidad y objetividad de su aplicación, como en la justa ponderación con los derechos en conflicto; pues dejó de advertir que en este caso, el reconocimiento de las prerrogativas de la quejosa; [REDACTED] no podía generar el desconocimiento de las propias inherentes a mi representado y tercero interesado en esta causa penal, [REDACTED] contrariando el sentido y alcances dispuestos en límites jurisdiccionales a los derechos humanos que se consagran en los artículos 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 5º del conocido como Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

En efecto, la consideración de que los derechos humanos tengan por objeto tutelar de manera efectiva la esfera humana, a través del respeto a su dignidad, integridad, libertades y derechos, no puede ser objeto de que éstos, aún y considerando su actualización a un caso concreto -que no es el caso-, puedan tener de algún modo alcances a otras esferas de la



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA PE
TERCER CIR
ZAPOCAN, JA

226

misma especie humana, sin considerar la inviolable esfera de otra persona. Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo al marco de interpretación *conforme a la constitución*, dispone que en el caso de la restricción o que corresponda la suspensión del ejercicio de derechos y garantías, deberá estar adecuadamente y suficientemente fundadas y motivada en los términos establecidos dentro del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A su vez, la suspensión de garantías que al efecto establece el artículo 27 del «Pacto de San José Costa Rica», es claro en señalar que los únicos casos en que se pueda proceder a la suspensión de garantías, es cuando se trate de casos de guerra, de peligro o de otra emergencia que amenace la independencia, así como la seguridad del Estado parte, quien podrá adoptar disposiciones en la medida y por el tiempo estrictamente limitado conforme a las exigencias de la situación. Siendo además necesario precisar, que ninguna suspensión puede o debe surtir efectos, cuando se trate derechos inherentes a la personalidad jurídica, al principio de legalidad y de retroactividad, así como a las garantías judiciales para que se lleve a cabo la protección de tales derechos.

De igual forma, el artículo 5° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, dispone que ninguna disposición de sus alcances normativos, podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos así como libertades reconocidos o a su limitación en mayor medida que la prevista en él; incluso dejando en claro que no hay lugar bajo ninguna circunstancia, a restricciones o menoscabo de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte, por virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el referido Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

La etiología apuntada, tiene por objeto, justificar como parámetro normativo objetivo en el sentido de que, *los derechos humanos no son absolutos, y muchos menos dan lugar a actos absolutista o preferentes*. Esto genera una presunción objetiva que demuestra el que, necesariamente, la única manera de engendrar validez a una interpretación a un derecho humano reconocido, parte desde el respeto, garantía, protección y promoción que al igual forma se haga sobre otros derechos convergentes. Y es que sin lugar a dudas, ya se ha dicho que si bien es cierto existe una confluencia normativa dirigida especialmente a la protección de la mujer, misma que se justifica en el contenido y alcances de las Convenciones tanto del sistema universal como interamericano «CEDAW» e «Belém do Pará»; sin lugar a dudas no hace indiferente el que se plasmen las otras garantías que en este caso se justifican dentro de una acusación penal; puesto que éstas, sólo fueron interpretadas a favor de sus contenidos y alcances normativos, con base en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; empero, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°; así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2°, incluso el referido «Pacto de San José Costa Rica» en sus artículos 1° y 2°, disponen el ejercicio responsable de interpretación, en respeto a la esfera humana y el derecho de todos y todas a acceder a la justicia.



PODER JUDICIAL
EN MATERIA PE
TERCER CIR
APOPAN, JA

Robustece a lo anterior:

«Registro digital: 2007672

Aislada

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 11, Octubre de 2014 Tomo I

Tesis: 1a. CCCXLI/2014 (10a.)

Página: 601

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*), las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudir a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

Amparo directo en revisión 4533/2013. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 29/2015 (10a.), publicada el viernes 24 de abril de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 240, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.»

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) invocada, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.»

Por eso es que el deber jurisdiccional, que es el receptáculo universal de justicia, no puede desconocer en un ejercicio interpretativo, los derechos inherentes al conflicto humano. Y es que, como se dijo, los derechos y libertades son reconocidos de **manera uniforme a**



PRIMER TRIBU
EN MATERIA
TERCER
ZAROPAN

228

todo individuo, por lo que, el respeto de uno, conlleva a la garantía del otro; o en su caso, como ya se dijo anticipadamente, *la restricción a un derecho humano, debe estar justificada en una consideración robusta y sana*, pues ya lo dice otro precepto convencional asociado precisamente a aquél instrumento adoptado en San José Costa Rica, que sólo fue adoptado en forma parcial hacia la parte quejosa, en su alcance interpretativo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Autoridad recurrida: *todas las restricciones permitidas, de acuerdo a dicha convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dicten por razón de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas*; y es que dicha intelección, que cabe destacar se concentra en su artículo 30, no deconfigure los alcances asociados a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contrala Mujer; mucho menos, a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, e incluso de la misma manera, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, *por el contrario, conlleva el deber de justificar que sus aplicaciones y por ende, ponderaciones de derechos, se den bajo un objeto que se justifique en el interés general para el cual fueron suscritas y con el propósito para el cual han sido establecidas*; es decir, para proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia encaminada en la acción o conducta basada en su género, y que de alguna forma le pueda causar la muerte, el daño físico o sufrimiento, sexual o psicológico tanto en el ámbito público como en el privado.

VAL COLEGIADO
PENAL DEL
CIRCUITO
JALISCO.

Es decir, tiene un objeto inmediato asociado a un interés general de tutela efectiva y protección inmediata a los casos que generen violencia contra la mujer, bajo el esquema de que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia; al reconocimiento, goce y desde luego ejercicio y protección de los derechos humanos y libertades que le son reconocidos al albor de las normas instrumentales que no sólo se refieren sin lugar a dudas a aquellas que en el particular se mencionaron en específico, sino además a aquellas que al igual forma aquí en este escrito de agravios se invocan, pues antes que mujeres persona, y como tal es un ser vivo, un humano más que forma parte de una diversidad que amerita protección tanto de manera focalizada como integral.

Empero, se insiste, sus manifestaciones normativas *no son absolutas*, encuentran límites bien definidos; *para empezar el que justifique su actualización; pero además el que demuestre que en su interpretación se toman en cuenta otros derechos humanos, al igual reconocidos a la especie humana*. En ese sentido, es que, cuando existe un conflicto humano que se debe apreciar sobre la esquematización de sexos o enfoques interseccionales de ventaja y desventaja, por la exigencia reconocida en el texto de los alcances normativos 1º, 4º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2º, 3º y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, *se justifique realmente el trato diferenciado desigual y por ende, la acción, atención, reacción; tanto formal como material que patentice esa situación especial que amerita cuidado específico*. Porque la conjunción de esa índole normativa, dispone para empezar, que el respeto a los derechos y libertades reconocidos son de todos; y en segundo lugar, que en tratándose de hombres y mujeres, se debe garantizar en igualdad el goce de sus derechos civiles y políticos enunciados; de manera que no sea desnaturalizado su gradualidad



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA PENAL
TERCER CIRCUITO
GUANAJUATO, JALISCO

22a

y progreso; pues tanto hombres como mujeres, adquieren relevancia jurídica y ameritan una protección inmediata del Estado.

Cobra aplicación al caso concreto que nos ocupa:

«Registro digital: 2019325

Jurisprudencia

Materias(s): Constitucional, Común

Décima Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 63, Febrero de 2019 Tomo I

Tesis: 2a./J. 35/2019 (10a.)

Página: 980

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.

Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Amparo en revisión 1148/2016. Lorenzo Torres Vargas. 21 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Layneá Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I., votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa.

Amparo en revisión 249/2018. Defensoría Capacitación Asesoría Patrimonial y Consultoría, S.C. o Defensoría Capacitación Asesoría Patrimonial y Consultoría, S.A. de C.V. 4 de julio de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier



PRIMER TRIB
EN MATER
TERCE
ZAPOPA

230

LaynePotisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; se separó de algunas consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Amparo directo en revisión 4191/2018. Miguel Ángel Huerta Rodríguez. 14 de noviembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier LaynezPotisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Selene Villafuerte Alemán.

Amparo en revisión 886/2018. Soluciones Empresariales HPG, S.A. de C.V. 9 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier LaynezPotisek; se apartó de consideraciones relacionadas con el estudio de progresividad Margarita Beatriz Luna Ramos y con reserva de criterio José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 35/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, sesión privada del seis de febrero de dos mil diecinueve.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

COLEGIO
A FAVOR DEL
CIRCUITO
JALISCO.

Ahora bien, si existiere un conflicto de derechos humanos, suponiendo de ser el caso el que de actuaciones se actualicen otros derechos humanos también reconocidos; estos no deben ser abordados desde una sola perspectiva; sino que deben ser racionales en su justa y necesaria dimensión, pues en el caso que se pretende, se atenta contra ese orden normativo, y se restringen los derechos del tercero interesado, inculcado dentro de la causa penal, a través de actos abusivos y arbitrarios del Órgano Colegiado, quien está obligado a justificar, no sólo la actualización de las Convenciones reconocidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como la Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; sino además, para analizar que éstas en su justa dimensión, no trastocan otros aparatos normativos constitucionales y convencionales que de igual forma ameritan protección; ***pues no se advierte de ninguna manera el ejercicio de ponderación de derechos humanos que sin lugar a dudas se actualiza, tanto al momento de advertir la violencia y discriminación contra la mujer, sostener los principios y garantías de Presunción de Inocencia, Indubio Pro Reo, así como las garantías judiciales en juego, y los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, que sin lugar a dudas convergen a una y otra esfera, y que necesariamente se deben abordar para adoptar ya no sólo una decisión judicial justa, sino con mayor razón para cumplir los compromisos de protección a los derechos humanos adquiridos en su quehacer jurisdiccional.***

Es por ello, que se asume que los derechos humanos no son absolutos, porque deben en todo caso justificarse sus contenidos formales y ser redundantes en los materiales, porque esa falta de coherencia normativa, en vez de reconocer, excede los fines legítimos para los que fueron reconocidos y se separan del interés general al que se encuentra sujetos. Puesto



NEWER TRIBUN
MATERIAL
ORDER C
OF PAN,

231

que aún incluso, como ya se anticipó, la perspectiva de género no se constriñe a un sexo, y mucho menos trata de algunos de los derechos reconocidos en el catálogo de prerrogativas de índole humana. Pues existe una analogía uniforme para los procedimientos penales, a cuyas hipótesis me remito para hacer valer este agravio, y denostar el ejercicio de apreciación de los elementos normativos para justificar la actualización de las convenciones «CEDAW» e incluso «Belém do Pará»; porque éstas deben delimitar que se está en presencia de violencia contra la mujer en los casos concretos en que se actualice su aplicación, pero ello debe partir por la trascendencia de su contenido, en análisis congruentes, completos pero sobre todo *imparciales*, de manera que se defina, no sólo por el hecho de ser mujer, si ésta afirmación de violencia tiene sustento, *pero no sólo bajo enfoques admisibles, sino también poniendo en duda todo aquellos que tanto en lo esencial como en lo accidental se constate*, , pues no puede, so pretexto de aplicar prerrogativas de índole humana, desconocer los procedimientos y competencias que se *asocian a un debido proceso legal, en el que el derecho de audiencia y defensa, también se garantiza desde la justa valoración de los elementos probatorios, bajo el enfoque de Presunción de Inocencia que debe hacer que el análisis documental sea tal que no quede lugar a dudas sobre el arbitrio empleado.*

Cobra aplicación:

«Registro digital: 2009563

Aislada

Materias(s): Constitucional

Décima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 20, Julio de 2015 Tomo II

Tesis: I.5o.C.I CS (10a.)

Página: 1722

DERECHOS HUMANOS. LA PREVISIÓN DE QUE SU TUTELA SÓLO PUEDE DESPLEGARSE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO NO ES UNA RESTRICCIÓN A SU EJERCICIO, SINO UNA HERRAMIENTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA SU PROTECCIÓN. Si en el juicio de amparo se alega la violación de un derecho humano, ello no puede ser motivo para que, so pretexto de lograr la mayor protección de la persona y se cumplan las obligaciones constitucionalmente previstas para el Estado Mexicano, se soslayen normas que en el derecho interno establecen los procedimientos y competencias de los órganos jurisdiccionales, ni las del derecho sustantivo que resulten aplicables, pues si bien conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todo ello está delimitado por el ámbito de sus propias formas y competencias, establecidas para la eficacia de los derechos sustantivos; sin que ello conduzca a considerar que la delimitación constitucional para el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de derechos humanos, implique una restricción para su ejercicio; sin embargo, si se está en presencia de una norma que posibilita y, a su vez, condiciona el funcionamiento del sistema diseñado para la tutela de los derechos humanos y, con ello, el cabal cumplimiento de dichos imperativos, circunscribiendo tal proceder al



PRIMER TIRAJE
EN MATERIA
TERCER
JODAN

232

ámbito competencial de las autoridades del Estado, ello para evitar la inseguridad jurídica que implicaría dotar de eficacia, sin ninguna sujeción, a los derechos humanos que integran el parámetro de regularidad constitucional en el Estado Mexicano pues, de lo contrario, se generaría el caos en el sistema, al permitirse que la autoridad, con ese pretexto, actuara fuera de todo control: lo que los órganos de amparo no deben propiciar ni permitir.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 321/2014. Salomé García y otra. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de julio de 2015 a las 09:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.»

De ahí en considerar que, el actuar de la autoridad es inadmisibles, porque aplica los derechos humanos de forma parcial, puesto que, por un lado, relega los deberes a emitir un fallo que se circunscriba a menesteres imparciales; es decir, sin tener una postura definida, misma que quedó manifiesta desde que analizó desde una sola óptica de interpretación los derechos humanos en conflicto; y, por el otro lado, desafiando la tutela judicial efectiva que en su caso se le delega para que sus actos se ajusten a los casos que exigen justicia; como por ejemplo al momento en que debió valorar con congruencia, completitud e imparcialidad los testimonios de la denunciante [REDACTED] pero además, a aquellas manifestaciones que se hicieron de su conocimiento por parte de mi cliente, [REDACTED] los cuales son parte de la Presunción de Inocencia que opera en mi favor; siendo al respecto, que a la primera, le otorgó sólo un carácter referente comprobatorio partiendo desde una óptica global; es decir, atendiendo a que la ofendida manifestó de forma reiterada el supuesto ejercicio de violencia intrafamiliar; pues desconecto las conjeturas que fueron abordadas por la Sala responsable no partieron sólo de la falta de corroboración, sino además de las inconsistentes con la única testigo compareciente en la causa penal, [REDACTED] ya que la diversa [REDACTED] no fue invocada en los hechos que intento reconozco de manera maliciosa; cuyos aspectos eran y son relevantes para adoptar no sólo la decisión judicial de comprobación del delito, sino además, para efecto de que ésta conlleve una debida aplicación del marco normativo que se ajustó y dispuso desde el contexto de las convenciones referidas, pero que irrespeto aquellos relativos al procedo penal y a las garantías judiciales que se le consignan, como ya se dijo, a través del Indubio Pro Reo, que se encuentra consagrada en forma elemental en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Robustece por analogía al caso concreto:

«Registro digital: 161368

Aislada

Materias(s): Constitucional

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomó: Tomo XXXIV, Agosto de 2011



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA DE
TERCER CIRCUITO
ZACAPAN, JALISCO

CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RESOLUCIÓN JURÍDICA. Los derechos fundamentales, siendo en su definición más básica pretensiones jurídicas destinadas a establecer los límites que los representantes de los ciudadanos no pueden traspasar en el desarrollo de sus responsabilidades normativas, no son en sí mismos ilimitados. En efecto, su estructura normativa típica no es la propia de las reglas -normas jurídicas con condiciones de aplicación razonablemente detalladas y determinadas, que se aplican mediante razonamientos subsuntivos- sino la que caracteriza a los principios, que son imperativos jurídicos con condiciones de aplicación definidas de modo muy abierto, lo cual los destina naturalmente a entrar en interacción, en los casos concretos, con otras normas con contenidos jurídicos que apuntan en direcciones no idénticas. Es por eso que suele decirse que los derechos fundamentales operan en el razonamiento jurídico como mandatos de optimización, porque su protección y reconocimiento en los textos constitucionales presuponen naturalmente que sus exigencias normativas entrarán en conflicto con otras en los casos concretos, supuesto en el que será necesario desarrollar un ejercicio de ponderación para articular el resultado de su aplicación conjunta en esos casos. Así, en las democracias constitucionales actuales la resolución jurídica de los conflictos que involucran derechos fundamentales no parte cada vez de cero, sino que el sistema jurídico contiene un abanico más o menos consensuado de reglas o criterios que expresan lo que puede o no considerarse un equilibrio adecuado entre ellos en distintos contextos o escenarios aplicativos. Así, algunas de estas reglas están consagradas expresamente en los tratados de derechos humanos o en las Constituciones mismas, y otras se van explicitando a medida que la justicia constitucional va resolviendo casos, incluidos aquellos en los que se juzga la constitucionalidad de los límites a los derechos incluidos en las leyes. De ahí que el legislador es competente genéricamente para emitir normas que regulan y limitan derechos, pero no puede hacerlo como prefiera, sino bajo determinadas condiciones relacionadas tanto con fines como con medios, en tanto que su labor normativa -llegado el caso- debe ser cuidadosamente examinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar que los límites que de ella derivan estén justificados por la necesidad de proteger a su vez derechos e intereses constitucionalmente amparados, y no haya sido adoptada sobre bases arbitrarias o insuficientemente sensibles a su impacto en las condiciones de goce del derecho involucrado.

Amparo en revisión 7/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarías: Francisca María Pou Giménez, Fabiana Estrada Tena y Paula María García Villegas Sánchez Cordero.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

Así pues, el carácter absolutista de los derechos humanos que se aplicaron, escapan de la fuente de obligaciones, de validez y legitimidad para los que se constituyeron normas especiales de protección de la figura femenina; pues éstas se deben amoldar a los casos que justifiquen su actualización, de manera que toda ponderación desmedida, debe considerarse inconstitucional e inconvencional; pues como ya se dijo, y se ampara del criterio invocado, los derechos humanos en su carácter de pretensiones jurídicas, deben satisfacer una carga de contenido que distribuya las formas, las cargas y los efectos de su aplicación, pues su



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER
ZAPOCAN

234

estructura no emplea que se apliquen sin mayores miramientos, sino que con mayor razón se deben ajustar y ser congruentes a todas aquellas adversidades que resuelven.

Y es que, se insiste, la aplicación de las Convenciones en pro de la mujer violentada o discriminada, se hicieron sobre bases preferentes, en las que prevaleció la justicia dispar, pues no se tomaron en consideración, los elementos consignados en la valoración de las pruebas por la Sala responsable, para determinar su sus contenidos abstractos eran materialmente aplicables al caso concreto; pues ciertamente, no abordó las contradicciones sustentadas por ésta, en la denuncia y ampliaciones, así como respectivas ratificaciones, e incluso, en las tan ya señaladas parciales en psicología, ni siquiera se advierte que estas hubieren sido superadas sino solamente soslayadas en el ejercicio parcial y preferente de derechos hacia la contraria; pues basta advertir que sólo se limitó en cuanto a la Sala a señalar que:

«Luego, tras enunciar y transcribir, entre otras, las probanzas acotadas, por la Sala responsable, especialmente concluyó:

I.- Que el Agente del Ministerio Público que llevó a cabo la investigación de los hechos delictivos fue omiso en investigar bien todos y cada uno de los elementos de convicción, para que sirvieran a su pretensión de que el imputado [REDACTED] fuera sancionado penalmente.

II. Que los hechos denunciados por la ofendida y los relatados por los testigos de cargo [REDACTED] y [REDACTED] resultaron contradictorios y, por ende, insuficientes para corroborar la versión de la ofendida, en cuando aseveró haber sido objeto de violencia durante diversos años por parte de su esposo...

III. Que adicionalmente a las diversas declaraciones, solamente se recabó el dictamen de vacilación psicológica elaborado por el perito [REDACTED]

IV. Que si bien se puede establecer que el inculcado le infirió a la ofendida una palabra altisonante, también lo es que, de acuerdo a la mecánica de los hechos que estableció el Agente del Ministerio Público, en su consignación, acusación y agravios, los medios de convicción son insuficientes para señalar que de ese sólo evento se pueda establecer una afectación al Estado psicológico y emocional.

V. Que el Agente del Ministerio Público al formular conclusiones acusatorias no debe variar los hechos materiales que motivaron el ejercicio de la acción penal y por su parte el juez podrá en su sentencia diferir el grado en relación al delito que haya sido materia del proceso, si esto beneficia al procesado, o variar la clasificación, siempre que se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación y del auto de formal prisión, pero sin rebasar la acusación.

VI. Que no debe perderse de vista que el acusado fue quien abandonó el domicilio conyugal, quien demandó la disolución del vínculo matrimonial, aunado a que refirió que su relación de pareja con la ofendida era conflictiva; máxime que en el dictamen que interesa, la experta en la materia indicó que la afectación al estado psicológico de la ofendida es en virtud de la dinámica disfuncional en su vínculo de pareja con su entonces esposo.»

Pues al efecto, ello obedeció solamente a que el Órgano Colegiado se sustituyera en un Tribunal Ordinario, y efectuara tal cual un análisis parcial —como ya se ha dicho en agravios que anteceden y en este mismo— de los alcances demostrativos, de la apreciación de

LOM 2000
PENAL DE
CIRCUITO
JALISCO



PRIMER TRES
EN WATER
TERCEP
ZAPOPA

235

la hipótesis delictiva o tipo penal consagrada en el artículo 176-Ter, y en el hecho a que, sin atender dichas manifestaciones de la Sala, construyera un teorema desde un enfoque parcial hacia la denunciante y quejosa [REDACTED] puesto que en estos sólo se limitó a valorar el caudal probatorio, sin manifestarse a las contradicciones que en términos del artículo 276 del Enjuiciamiento Penal para el Estado de Jalisco, le obligan a analizar las pruebas contradictorias, ya en lo esencial, ya en lo accidental, que como en el presente, hasta ese momento en que se desatendieron, habían influido *—indubio pro reo—* en el sentido del fallo adoptado, puesto que era su deber atender su convergencia con el resto del caudal probatorio, aún y analizando sus respectivas implicaciones negativas, y no sólo atendiendo sus alcances demostrativos positivos.

Porque lo anterior, fue determinado bajo un carácter absolutista de los derechos humanos que se reconocen a la mujer violentada, pero como ya se dijo, ese carácter debe ser justificado aún y atendiendo a las divergencia del contenido de las pruebas, y no sólo bajo una sola óptica del planteamiento del problema, que considero justificar en la aplicación de derecho convencional «CEDAW» y «Belém do Pará», pues éstas, de igual forma ameritaban al uso de otras prerrogativas humanas, como la *Presunción de Inocencia y el señalado Indubio Pro Reo*, que era el parámetro de decisión que se debió considerar para garantizar una gama de derechos que no tienen parte definida, como lo es el de *acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva*, que se consagran a la parte acusadora y a la parte acusada.

Además, se considera que la afectación en ese sentido fue excesiva y abusiva, porque en lo que respecta a lo dicho por la parte que represento, sólo se limitó a señalar:

«Máxime que a contrapartida, se tiene que la (Sic) al haberse ejercitado la acción penal sin detenido, no existe declaración ministerial del activo, mientras que en preparatoria hizo valer su derecho constitucional de abstenerse a declarar.

Posteriormente presentó un escrito negando los hechos que le fueron imputados por la ofendida, ofreciendo diversos medios de prueba; ocuso que el juez del proceso estableció se trata propiamente de una ampliación de declaración y que por tanto debía ratificarse formalmente, sin que de actuaciones de la causa se advierta que haya tenido a lugar dicha diligencia de ratificación»

Elementos que no eran obstáculo para considerar el sentido manifestado dentro de su testimonio, pues además de que el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, establece la ratificación de promociones formuladas por escrito; esto sólo se debe justificar en la medida en que se demuestre su necesidad o en el hecho de que no se encontraran firmadas por quien las suscribe; además, conforme al Principio Constitucional *Indubio Pro Reo*, era un elemento válido, no sólo para constatar su contenido en lo individual, sino además para garantizar la *Presunción de Inocencia* en lo colectivo; esto es, a efectos de que se superaran sus alcances convictivos con los otros elementos probatorios que de por sí ya habían generado dudas en lo referido por la quejosa [REDACTED]

En ese sentido, no sólo debió constreñirse a invocar su existencia, sino que además, para establecer adecuadamente la aplicación del orden normativo nacional y convencional,



COMER TRIBON/
MINISTERIA
TERCER C
ZAPOTAN

236

éste debió atender a su contenido, su relación con los hechos, y los efectos que la misma en esa coherencia desprendieran, ahora sí para delimitar los alcances y las restricciones al ejercicio de los derechos humanos y al reconocimiento de éstos. Porque el tercero interesado, inculcado en la causa penal, fue enfático en establecer que las acusaciones en su contra eran falsas, siendo irrelevante que lo hubiere hecho con posterioridad y mediante escrito, pues ese silencio, se encuentra consagrado en el artículo 20, inciso B), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mismo que por misma prescripción constitucional no puede ser utilizada en su contra.

Luego, se debió destacar como bien lo refirió la Sala responsable, y que dejó de atender el Órgano Colegiado, que mi cliente, [REDACTED] refirió que las acusaciones efectuadas por [REDACTED] eran falsas, incluso donde le hizo del conocimiento que ésta les hacía creer que el mismo era violento, posesivo y alcohólico; señalando que incluso, *el fue víctima de violencia física y psicológica por parte de ésta*. Incluso que de los años 2014, 2015 y 2016 en que vivió junto a ella, *le había hecho la vida imposible, sobre todo con la convivencia con sus menores hijos*. De igual forma le manifestó a las autoridades que, contrario a lo referido por la denunciante, este sí cumplía con sus obligaciones alimentarias; pero que pese a ello, ésta le demandó en la vía judicial, dentro de la causa familiar 1412/2014, en el que incluso se dictó sentencia que lo condenó a pagar en favor de sus tres hijos el 30% treinta por ciento de la pensión alimenticia. Que a virtud de lo anterior, mi representado fue el que interpuso a principios del año 2016 dos mil dieciséis, la demanda de divorcio contencioso en su contra, y en donde tajantemente negó cada una de las epopeyas que señaló en su escrito de denuncia, ampliaciones y ratificaciones.

LOCAL
EN EL DEL
IRCUITO
JALISCO.

Cobra aplicación al caso a estudio:

«Registro digital: 2018964

Aislada

Materias(s): Constitucional, Penal

Décima Época

Instancia: Pleno

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 62, Enero de 2019 Tomo I

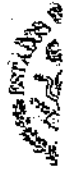
Tesis: P. VI/2018 (10a.)

Página: 472

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA.

Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúan la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contradicciones den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Amparo directo 61/2014. Alejandro Garmaño Tejeda y otro. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Rantos, José Fernando Franco



PRIMER TR
EN MAT
TERI
ZAP

237
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier LaynezPotisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo 14/2015. Juan Manuel García Chávez. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier LaynezPotisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo 15/2015. Ángel Muñoz Rico. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier LaynezPotisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo 16/2015. Sergio Figueroa Hernández. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier LaynezPotisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, aprobó con el número P. VI/2018 (10a.), la tesis aislada que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación.»

«Registro digital: 2018952

Aislada

Materias(s): Constitucional, Penal

Décima Época

Instancia: Pleno

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 62, Enero de 2019 Tomo I

Tesis: P. V/2018 (10a.)

Página: 469

IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE "DUDA" ASOCIADO A DICHO PRINCIPIO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el citado principio forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Ahora bien, el concepto de "duda" implícito en el principio in dubio pro reo debe entenderse como la existencia de incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, incertidumbre que no sólo está determinada por el grado de confirmación de esa hipótesis, sino también eventualmente por el grado de



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER
ZAPOPA

239

confirmación de la hipótesis de la defensa, en el supuesto de que existan pruebas de descargo que la apoyen. De esta forma, cuando la hipótesis de la defensa es total o tendencialmente incompatible con la hipótesis de la acusación, el hecho de que aquélla se encuentre confirmada por las pruebas disponibles genera una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis que sustenta el Ministerio Público, lo que se traduce en la existencia de una duda razonable sobre la culpabilidad del imputado. En este orden de ideas, entender la "duda" a la que alude el principio *in dubio pro reo* como incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, no sólo exige abandonar la idea de que para determinar si se actualiza una duda absolutoria el juez requiere hacer una introspección para sondar la intensidad de su convicción, sino también asumir que la duda sólo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles. En consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende de la existencia de una creencia subjetiva del juez que esté libre de dudas, sino de la ausencia dentro del conjunto del material probatorio de elementos que justifiquen la existencia de una duda.

Amparo directo 61/2014. Alejandro Garniño Tejeda y otro. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier LaynezPotisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo 14/2015. Juan Manuel García Chávez. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier LaynezPotisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo 15/2015. Ángel Muñoz Rico. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier LaynezPotisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo 16/2015. Sergio Figueroa Hernández. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier LaynezPotisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número V/2018 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación.»



PRIMER TRIBUN
EN MATERIA
TERCER (C
ZAPOCAN.

239

Así pues, el Órgano Colegiado tenía a su vez, elementos justificativos suficientes para estimar, si en el caso era dable advertir otro lenguaje jurídico de mayor amplitud, en el caso de las Convenciones «CEDAW» y «Belén Do Pará», porque previo debió justificar que la referida denunciante, [REDACTED] efectivamente se encontrara dentro de los supuestos normativos señalados de su contenido; esto es, ser una mujer violentada. Pero se insiste, desde una óptica retórica, porque al mismo tiempo convergían otros derechos humanos, Y de hecho, el estándar de presunción de inocencia que se invoca, conlleva un ejercicio de ponderación, y no sólo de mención, de los elementos probatorios de cargo y de descargo, así como de establecer que entre estos no exista duda razonable.

Y aunque no escapa el ejercicio de la prueba circunstancia o indirecta de valoración que empleo, tales elementos deben partir de la significancia normativa que desprendan los elementos de convicción, y no sólo del valor legal que se les pueda dar por reunir ciertas formalidades procesales y rendirse en tiempo; éste elemento de convicción también debe ser sujeto de una comprobación, partiendo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 de del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, del hecho de que, cuando en el proceso no exista prueba directa; ya sea de los hechos constitutivos del delito; incluso de la participación que se atribuye al inculcado en esos hechos o en cualquier otro hecho esencial o circunstancial que interese para el sentido y alcances del fallo, *el juez o tribunal debe en todo caso justificar cuidadosamente los indicios que resulten de las diversas pruebas aportadas y en consideración a la naturaleza de los hechos de que se trate y el engarce lógico y natural que exista entre éstos y el hecho por demostrar, a fin de que pueda decidir si tales indicios justifican la certeza del hecho*; empero se insiste en la disyuntiva d la prueba que se genera en contradicción, y de la cual también repercute esa decisión de indicios.

Cobra aplicación por analogía:

«Registro digital: 2004757

Aislada

Materias(s): Penal

Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2

Tesis: 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.)

Página: 1058

PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES.

Juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos probados, mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta probado el hecho presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo deben encontrarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión racional entre



PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA
TERCER C
ZAPOCAN,

270

los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen la prueba. Adicionalmente, es necesario subrayar que la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista una prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, válidamente podrá sustentarse la misma en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran acreditados en la causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse con un cúmulo de sospechas, sino que la misma debe estimarse actualizada solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe señalarse que la prueba indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues solamente debe emplearse cuando con las pruebas primarias no es posible probar un elemento fáctico del cual derive la responsabilidad penal del acusado, o cuando la información suministrada por dichas pruebas no sea convincente o no pueda emplearse eficazmente, debido a lo cual, requiere estar sustentada de forma adecuada por el juzgador correspondiente, mediante un proceso racional pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la misma se sustente una condena de índole penal.

Amparo directo 78/2012. 21 de agosto de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.»

«Registro digital: 237007

Aislada

Materias(s): Penal

Séptima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Volumen 6, Segunda Parte

Tesis: null

Página: 49

PRESUNCIONES, PRUEBA DE. EN QUE CONSISTE. La presunción nace de la probabilidad, de la sospecha; la relación existente entre el hecho conocido y el desconocido, se apoya en la conjetura, y por ello es preciso acreditar con raciocinio la conclusión a que se llega. La presunción es obra del artificio, porque es abstracción del pensamiento humano; supone la duda y la duda implica que no es exacta la relación de ciertos efectos o ciertas causas, sino solamente probable. Tomando en cuenta que la prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene como punto de partida hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado, se puede, mediante el análisis de los indicios y las presunciones, despejar las circunstancias de comisión del delito.

Amparo directo 8893/68. Raúl Rodríguez García. 16 de junio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ausente Manuel Rivera Silva. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera.»



PRIMER TRIBUN
EN MATERIA
TERCER
EJECUTIVO

241

Ahora bien, como se ve, tanto del ejercicio correlativo de interpretación gramatical y de su apreciación funcional y sistemática de preceptos y jurisprudencia, ese examen del que son objeto las pruebas, debe partir de hechos probados, por lo que el análisis de contradicción debe ser un parámetro previo a establecer, como bien lo hizo la Sala responsable, si es válido darles presunciones demostrativas y en qué sentido y alcances. Pues de éstas también parten los reconocimientos de derechos «CEDAW» y «Belén Do Pará» que se pretendieron aplicar, incluso de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y de otros criterio adoptados con base a su interpretación por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus Comités; pues forman parte de una configuración procesal, formal y sustantiva que permiten advertir la sustancia particular de los hechos que la material real sobre la que se puede colegir una adecuación normativa; a fin de ponderar los derechos que en lo envidiar le asistían a la supuesta víctima del delito. [REDACTED]

en los términos de los criterios apuntados; pero además, sobre la base de los particulares que le asistían a mi representado, sobre la vertiente del *Indubio Pro Reo* y *Presunción de Inocencia* que dicran cabida a los que corresponden, de acuerdo a ese engarce probatorio a delimitar la interpretación que debe prevalecer y así satisfacer otros derechos humanos asociados a ambas partes, tales como el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva, así como el acceso a la justicia, a través del respeto a las garantías judiciales, y de una decisión judicial justa que partiere del respeto a la seguridad jurídica y a la certeza de las partes.

Cobra aplicación al caso a estudio, en lo relativo a la ponderación de derechos:

«Registro digital: 2014896

Aislada

Materias(s): Constitucional, Común

Décima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Libro 45, Agosto de 2017 Tomo IV

Tesis: I.Jo.P.14 K (10a.)

Página: 2846

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN CASO DE COLISIÓN EN LA APLICACIÓN DE DOS O MÁS DERECHOS HUMANOS, LA ADOPCIÓN DE ESTE PRINCIPIO OBLIGA A LAS AUTORIDADES A HACER UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN PARA BUSCAR LA ARMONIZACIÓN ENTRE LOS VALORES EN JUEGO, PERO SIN OMITIR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE ALGUNO DE LOS INTERESADOS, A FIN DE OTORGAR AL INFANTE TODO LO QUE SOLICITA, EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA Y SIN REQUISITO ALGUNO. La adopción del principio del interés superior del menor o la protección más amplia hacia éste, obliga a las autoridades del Estado Mexicano, al igual que en los casos de colisión en la aplicación de dos o más derechos humanos, a hacer un ejercicio de ponderación para buscar la armonización entre los valores en juego, pero sin omitir el respeto a los derechos de alguno de los interesados, a fin de otorgar al menor todo lo que solicita, en cualquier circunstancia y sin requisito alguno. Aplicado lo anterior a los procesos jurisdiccionales, la intervención de un menor en un juicio no implica que el juezador únicamente deba respetar los derechos humanos de éste y omitir



PRIMER TRIBUN
EN MATERIA
TERCER (
ZAPOCAN

242

los derechos fundamentales de su contraparte, ya que si se aceptara una posición contraria, se correría el riesgo de convertir al juzgador en un autócrata y no en el director del proceso, que únicamente observa y cumple lo que subjetivamente considera conveniente y favorable para los derechos del niño, sin respetar los derechos de los demás integrantes de la relación jurídico procesal, otorgándole al primero cualquier beneficio, por el solo hecho de ser infante, incluso en los casos en que no le asista la razón, conforme a derecho, mediante una mal entendida protección del interés superior del niño.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 48/2017. 3 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretario: Jorge Daniel Aguirre Barrera.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.»

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente le:

P I D O :

PRIMERO.- Se me tenga en tiempo y forma, por cada uno de los motivos aducidos, y encontrarme dentro del término legal de diez días, emitiendo la respectiva **AMPLIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN**, de igual forma contra el fallo definitivo pronunciado por el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el 19 diecinueve del mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte; y, por consecuencia, en términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, exponiendo los agravios expresados contra su pronunciamiento.

SEGUNDO.- Se me tenga, en la forma y términos precisados, reiterando cada uno de los aspectos de procedencia evocados en mi escrito inicial de revisión, a efectos de que surtan las consecuencias legales dentro de este medio legal de defensa, y por ende, en su caso, se admita por encontrarse ajustado a derecho.

TERCERO.- En términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, interpongo por su conducto este mecanismo legal de defensa, a efectos de que en su oportunidad, a la brevedad posible, juntamente con el escrito de expresión de agravios que le antecede en tiempo, lo remita a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en última instancia se pronuncie sobre su procedencia juntamente con los agravios esbozados en forma primigenia, a fin de consagrar el derecho de audiencia y defensa de la parte que represento.

CUARTO.- A efectos de cumplir con lo establecido por el ordinal 86, empero en su hipótesis jurídica establecida dentro de su párrafo tercero, acompañe las copias del traslado a efectos de que se distribuyan entre las partes contendientes en amparo para que se impongan de los alcances de esta ampliación.

QUINTO.- Se considere en cualquier decisión que se estime adoptar, tanto en este ocurso como en el que se presentó con anterioridad, la debida apreciación que permita la aplicación efectiva de la suplencia de la queja que determina la hipótesis normativa prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; al tratarse en este caso de agravios



FEDERAL
BUREAU OF
INVESTIGATION
WASHINGTON, DC

243

esbozados en beneficio del inculpado [REDACTED] y, en esa misma tesitura, la aplicación fundamental de derechos y garantías que permita la protección de la esfera humana consagrada en los artículos 1^o y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en su correlación integral, con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; aplicando para tal efecto los derechos humanos asociados al conflicto en orden de igualdad y no exclusión, como hasta el momento se ha efectuado por el Órgano Colegiado recurrido.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, México, a la fecha de su presentación.

[REDACTED]
Tel. [REDACTED]

COLEGIADO
NAL DEL
UITO
16-02



UNITED STATES DISTRICT COURT
DISTRICT OF COLUMBIA
THIRD CIRCUIT
CAPOTAN, ILLIS

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign**Archivo Firmado: rec rev.pdf****Secuencia: 3489543****Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal**

Firmante	Nombre:	JOSE DANIEL LOMELI JIMENEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	LOJD671105HJCMMN07			
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000000000000088c6	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/01/2021T21:45:44Z / 15/01/2021T15:45:44-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1c 76 8f 5b 80 83 6b a4 f5 6e 23 47 60 5e 21 bb 2c a6 c4 70 28 b2 1f 71 2c 11 53 92 2f b9 50 88 83 f7 87 3d 6c f7 b5 03 d8 84 ce ce 7b b5 9d 09 92 2a c8 da d9 b9 bd 76 c6 89 b0 bc 67 fa 8c 65 16 85 f4 a6 60 28 32 64 8f 49 e7 3b b4 94 90 36 e8 ba 2e 07 16 5a 42 b7 45 6f 7f ec e2 92 05 c4 75 3a 44 dd 12 d5 1a 18 8a 62 9a ff 75 55 5b 68 ca c8 d0 d7 5a 19 2c f5 d9 04 df 33 41 13 7f 5d 72 31 c3 eb 93 b1 42 45 fe b1 74 e9 9f 39 ac 37 1e 3b 9b 8e 04 1c bd 0c 7b 09 5f 57 13 19 1f 3f 9a 9b d8 6c a7 22 bd 39 c8 9f 23 af 86 ad f7 c6 8a 3e 7b 8d 8c ed 81 d2 a4 46 6f 01 54 40 32 3f 78 b7 f9 47 90 24 63 04 65 b9 00 c5 1c a2 70 03 1e e2 6f 76 a9 9e 91 71 9c 28 ea 2b b9 22 29 b3 21 0b 7c 7f 2d 6a 1e ed b5 fe 04 62 46 ed 0a 32 d8 bf df 49 6f 4e 2c ae c3 2e 6f 79 35 aa 2f 9a			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/01/2021T21:47:55Z / 15/01/2021T15:47:55-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000000088c6			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	15/01/2021T21:45:44Z / 15/01/2021T15:45:44-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3551781			
	Datos estampillados:	50547F82236BFE5B02313DD03A4173D34B31B255D720CFD585431FE16373E770			

50547F82236BFE5B02313DD03A4173D34B31B255D720CFD585431FE16373E770

PARTE QUEJOSA: [REDACTED]
PARTE TERCERA INTERESADA Y
RECURRENTE: [REDACTED]
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO:
56/2021
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS.

Ciudad de México, a veinte de enero de dos mil veintiuno,
se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Folio electrónico 1234/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registrado con el número 1259-MINTER; y, su evidencia criptográfica.	Originales
2. Escrito de demanda de amparo de la parte quejosa, en el juicio de amparo directo 13/2020.	Versiones impresas fieles de la versión electrónica, de conformidad con el Acuerdo General 12/2014
3. Resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo 13/2020.	
4. Escritos de expresión y de ampliación de agravios de la parte tercera interesada.	
5. Constancia de la notificación por medio de lista electrónica derivada de personal, a la parte tercera interesada	
6. Diversas constancias.	Originales
7. Folio electrónico 1241/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registrado con el número 1280-MINTER; y, su evidencia criptográfica.	
8. Oficio 2/2021, de catorce de enero de dos mil veintiuno, del Secretario adscrito al referido órgano jurisdiccional, mediante el cual se hace constar lo siguiente: “...en la sentencia que se recurre no subsiste una cuestión propiamente constitucional...”.	Versiones impresas fieles de la versión electrónica, de conformidad con el Acuerdo General 12/2014
Contiene requerimiento al OJPJF.	
PENAL – DESECHAMIENTO POR AUSENCIA DE CPC	
CONTIENE DATOS SENSIBLES	

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día quince de enero del presente año, por medio

del **MINTERSCJN** en términos de lo señalado en el Acuerdo General número 12/2014. Conste.

Ciudad de México, a veinte de enero de dos mil veintiuno.

Se actúa en términos del punto octavo del Acuerdo General del Pleno de este Alto Tribunal número 14/2020¹, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de dos mil veinte, cuya vigencia se prorrogó mediante el punto único del instrumento normativo aprobado por el propio órgano jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil veinte².

I. Formación del expediente. En términos de la normativa aplicable y en cumplimiento a la Circular número 11/2014-AGP SEPTIES de quince de febrero de dos mil diecinueve, con los folios electrónicos de remisión de los documentos de cuenta, **fórmense los expedientes impreso y electrónico** correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por la **parte quejosa**, contra actos de la Décima Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y de otra autoridad.

Acúsesse recibo por conducto del MINTERSCJN, en la inteligencia de que la versión digital impresa de este acuerdo hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 16, párrafo segundo, del Acuerdo General 9/2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fórmese cuaderno auxiliar**, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las

¹ OCTAVO. Para los efectos previstos en la legislación que rige los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinte las notificaciones realizadas por lista o por rotulón electrónicos visibles en el Portal de Internet de este Alto Tribunal, tendrán los mismos efectos que las llevadas a cabo mediante la publicación en los estrados de las listas y de los rotulones impresos.

² Se prórroga del **siete al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno**, la vigencia de lo establecido en los puntos del Tercero al Noveno del Acuerdo General 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte.

determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

II. Improcedencia del recurso. El defensor particular de la parte tercera interesada, mediante escrito remitido vía electrónica, hace valer en tiempo y forma recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo 13/2020, en el cual se transcribe de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte de la sentencia reclamada que a su parecer contiene el problema de constitucionalidad. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que en la demanda de amparo no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad, incluyendo inconveniencia, de una norma de carácter general ni se planteó uno relacionado con la interpretación de algún precepto constitucional o tratado internacional, además de que tampoco se advierte que el Tribunal Colegiado haya decidido sobre tales cuestiones, por lo que debe concluirse que no se surten los supuestos que establecen los artículos 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que proceda el recurso que se interpone, siendo incluso que de los agravios se advierte que se trataron cuestiones de mera legalidad, relativas a la valoración de diversas pruebas, razón por la cual debe desecharse este recurso.

Resulta aplicable a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2015 (10a.) aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, publicada en la página mil ciento noventa y cuatro, Febrero de dos mil quince, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de rubro: “**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE SI LOS AGRAVIOS SE LIMITAN A IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES EN LAS QUE EL ÓRGANO**

COLEGIADO DA RESPUESTA A CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD.”, así como la tesis de jurisprudencia 2ª./J.56/2016, (10ª) aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión privada de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, que lleva por rubro: **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE MERA LEGALIDAD DEBEN DESESTIMARSE POR INEFICACES.”**.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a. CXIV/2016, publicada en la página mil ciento seis, Libro Veintinueve, correspondiente al mes de abril de dos mil dieciséis, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: **“AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ENTRE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD QUE LO HACEN IMPROCEDENTE, SE ENCUENTRAN LAS REFERIDAS A LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS, LA ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LO RELATIVO A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.”**.

No constituye obstáculo a lo determinado, la circunstancia de que la **parte tercera interesada** invoque que se **le violaron los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 20, 29 y 133**, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **así como diversos derechos humanos**, toda vez que la sola mención de ello no actualiza la existencia de una cuestión de constitucionalidad que pudiera dar lugar a la procedencia del recurso.

Es preciso señalar que no contraría a lo anterior que en su **escrito de agravios** cite el principio **pro persona**, toda vez que, no por virtud del deber de otorgar la protección más amplia **a la parte tercera interesada**, el órgano jurisdiccional está obligado a resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia, de ahí que tales manifestaciones no sean suficientes para declarar procedente, en esta vía, la impugnación de la respuesta que dio el Tribunal Colegiado, a cuestiones de mera legalidad. Encuentra apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 10/2014 (10a.), publicada en la página

cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, del mes de febrero de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de rubro: **“PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA”**.

Tampoco obsta a lo anterior que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya expuesto los alcances del derecho de la quejosa a ser juzgada con perspectiva de género; y que el inconforme tercero interesado combata en los agravios lo así expuesto por el referido órgano jurisdiccional, en relación con el alcance de la presunción de inocencia. Pues se aprecia que el aludido Tribunal se apoyó en diversos precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las tesis [1a./J. XXVII/2017 \(10a.\)](#)³ y [1a./J. 22/2016 \(10a.\)](#)⁴, con los rubros: **“JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN.”** y **“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”**, por lo que el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito** no hizo un ejercicio interpretativo propio; y el ejercicio de valoración del material probatorio del caso lo llevó a cabo en materia de legalidad.

III. Datos Sensibles.- Por otro lado, tomando en consideración lo dispuesto en el Punto Segundo del **ACUERDO GENERAL 11/2017, DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULAN LOS ALCANCES DE LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE DE PERSONAS FÍSICAS O**

³ De la Primera Sala de este Alto Tribunal, publicada en la página 443, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2013866.

⁴ De la Primera Sala de este Alto Tribunal, publicada en la página 836, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011430.

MORALES CONTENIDO EN LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS JURISDICCIONALES⁵ (AGP 11/2017), toda vez que, de oficio, se advierte que **el presente asunto guarda relación con un supuesto de datos sensibles al derivar de una causa penal donde se le condenó a la parte tercera interesada por el delito de violencia intrafamiliar**, en la versión pública de este proveído y en la lista de notificación respectiva, **se deberán omitir y/o suprimir el nombre y demás datos personales o cualquier otra denominación que identifique o haga identificable a cualquiera de las partes en el presente asunto, salvo los datos que correspondan a órganos del Estado y/o servidores públicos**; con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, parte primera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 68, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con el objeto de agilizar el trámite que corresponda, tomando en cuenta el carácter de Módulo de Acceso a la Información de la Subsecretaría General de Acuerdos, en los términos del artículo 24 del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el artículo 6° constitucional, solicítase al Titular de esta última, informe a la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre las medidas que se adoptarán, entre otras, los datos que habrán de cancelarse o no publicarse, la documentación en la que se lleva a cabo lo anterior y cualquier otro aspecto que resulte relevante, en la inteligencia de que el referido informe deberá generarse dentro de los cinco días hábiles

⁵ Consultable en el vínculo: <http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/AcuerdosPlenarios.aspx>

siguientes a la notificación de este acuerdo. Lo anterior, con el objeto de que esa Unidad de Transparencia atienda a lo dispuesto —entre otras disposiciones—, en el artículo 85, fracción II, de la referida Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Asimismo, comuníquese esta determinación a los diversos órganos de este Alto Tribunal que corresponda, con el objeto de informarles sobre las medidas que se estima deben adoptar para garantizar el derecho a la privacidad de las partes en el presente asunto.

Finalmente, en términos de lo previsto en el punto tercero del **Acuerdo General Plenario 14/2020**, se hace del conocimiento de las partes que en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán promover por vía electrónica mediante el uso de la FIREL o de la e.firma en términos de lo previsto en el **Acuerdo General Plenario 9/2020**.

Consecuentemente, tomando en consideración que el recurso de revisión de que se trata es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la fracción IX del artículo 107 constitucional; con fundamento en los artículos 10, fracción XII, 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 91 de la Ley de Amparo, así como en los puntos Tercero, Cuarto y Segundo Transitorio del Acuerdo General Plenario 9/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil quince, se acuerda:

I. Se actúa en términos del punto octavo del Acuerdo General del Pleno de este Alto Tribunal número 14/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de dos mil veinte, cuya vigencia se prorrogó mediante el punto único del instrumento normativo aprobado por el propio órgano jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil veinte.

II. Se desechan por improcedentes los recursos de revisión y de ampliación de agravios interpuestos,

respectivamente, en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

III. Las personas que tengan reconocido el carácter de partes en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, por sí o por conducto de sus representantes— no los autorizados de éstas— **podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico**, para sí o para un tercero, **proporcionando la CURP de la o de las personas respecto de las cuales se solicita la autorización correspondiente**, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

IV. Asimismo, las personas que tengan reconocido el carácter de partes en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, por sí o por conducto de sus representantes —no los autorizados de éstas,— **podrán solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas proporcionando la CURP de la o de las personas respecto de las cuales se solicita la autorización correspondiente a su FIREL vigente** y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que de éste deriven, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

V. Toda vez que, de oficio, se advierte que **el presente asunto guarda relación con un supuesto de datos sensibles en términos del citado AGP 11/2017**, en la versión pública de este proveído y en la lista de notificación respectiva —como en cualquier documento que se genere con motivo del trámite y resolución del presente asunto—, **se deberán omitir y/o suprimir el nombre y demás datos personales o cualquier otra denominación que identifique o haga identificable a cualquiera de las partes en el presente asunto, salvo los datos que correspondan a órganos del Estado y/o servidores públicos.**

VI. **Notifíquese por lista electrónica**; y de forma

personal a la parte tercera interesada en el domicilio señalado en su escrito de agravios, ubicado en: [REDACTED]

número [REDACTED] colonia [REDACTED]

[REDACTED] por conducto del **Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento**, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído, en la inteligencia que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, es decir, dicho órgano jurisdiccional deberá notificar por lista conforme a las reglas establecidas para ello en el numeral 29 de dicho ordenamiento; así como a lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la inteligencia de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el MINTERSCJN, en términos del artículo 14, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 12/2014, de diecinueve de mayo de dos mil catorce, hace las veces del despacho número **SSGA_DPO-XXI-238/2021**, por lo que se requiere al referido órgano jurisdiccional a fin de que en auxilio de las labores de esta Presidencia, con la brevedad posible lo devuelva debidamente diligenciado. **Cumplido lo anterior, previa certificación que se elabore en la que se haga constar que este acuerdo causó estado, archívese el toca como asunto concluido.**

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.

RCC/DDV/CGRG/ars

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Acuerdo.docx
Identificador de proceso de firma: 42807

[illegible][illegible]